

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

BOLETÍN N° 14.137-05.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue considerado previamente, en segundo informe, por la Comisión de Economía.

A la Comisión de Hacienda, en tanto, le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a lo dispuesto por la Sala del Senado con fecha 23 de junio de 2021.

- - -

A una o más sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistió, además de sus miembros, el Honorable Senadores señor Edwards.

Concurrieron, asimismo, las siguientes personas:

Del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, el Coordinador Tributario, señor Diego Riquelme, y la Coordinadora Legislativa, señora Consuelo Fernández.

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministro, señor Nicolás Grau; la Coordinadora Legislativa, señora Virginia

Rivas, y el asesor, señor Juan Ignacio Bugueño.

De Chilecompra, la Directora (S), señora Dora Ruiz, y el Fiscal, señor Ricardo Miranda.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaria, señora Macarena Lobos, y la asesora, señora Mónica Bugueño.

Del Tribunal de Contratación Pública, el Juez Titular del Tribunal, señor Álvaro Arévalo, y el Secretario, señor Felipe Olmos.

De la Asociación de Funcionarios de ChileCompra (AFUCH), la Presidenta, señora María Cristina Alcántara.

El asesor del Honorable Senador Castro Prieto, señor Daniel Quiroga.

Las asesoras del Honorable Senador Coloma, señoras Bárbara Bayolo y Carolina Infante.

El asesor del Honorable Senador Edwards, señor Ignacio Pinto.

El asesor del Honorable Senador García, señor José Miguel Rey.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

El asesor del Honorable Senador Núñez, señor Elías Mella.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el Analista, señor Samuel Argüello.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Economía.

NORMAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: artículo primero, número 1, en el artículo 1° propuesto, sus incisos segundo, tercero y quinto; número 9, en la letra a), numeral iv, literal d), número 4, su párrafo segundo, y en la letra b), su numeral ii; número 11, en el artículo 8° bis propuesto, el párrafo quinto de su letra c) y el párrafo sexto de su letra e); número 23, en el artículo 16 propuesto, sus incisos primero, segundo, octavo, undécimo y décimo tercero; número 31, en el artículo 22 propuesto, su inciso primero; número 32, los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quinquies y 22 sexies inciso final propuestos; número 33, en el artículo 23 propuesto, sus incisos primero, segundo y final; número 34, el artículo 23 bis propuesto; número 35, el artículo 23 ter propuesto; número 39, en el artículo 25 quáter propuesto, su inciso quinto; número 45; número 48, en el artículo 35 decies propuesto, su inciso tercero, y número 50, en el artículo 56 propuesto, sus incisos primero y segundo; artículo segundo, en el artículo 1 propuesto, su inciso primero, y el artículo 7 propuesto, permanentes; y los artículos segundo, tercero y séptimo inciso final transitorios. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Economía, como reglamentariamente corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

- - -

Se deja constancia de que la Comisión de Hacienda no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Economía en su segundo informe.

- - -

DISCUSIÓN

Previo a la consideración de los asuntos de competencia de la Comisión de Hacienda, en **sesión de 30 de mayo de 2023**, la **Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner**, y el **Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau**, efectuaron una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Proyecto de ley que moderniza la ley N° 19.886 y

otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín N° 14137- 05)

1. Antecedentes

Panorama de las compras públicas en Chile

- Las compras públicas son fundamentales para la **satisfacción directa e indirecta de las necesidades de la población**, permitiendo el **buen funcionamiento de los organismos públicos**, además del **desarrollo de oportunidades negocios para** miles de personas y empresas de todos los tamaños, en todo el país, al ser parte de la red de proveedores del Estado.

- La regulación central de compras públicas lleva 19 años, y a pesar de las diversas modificaciones, **no se han realizado grandes cambios estructurales**.

- Según los datos abiertos disponibles en la plataforma de Mercado Público, a mayo de 2023 el gasto público en compras públicas asciende a \$USD 5.030.144.109.

- Asimismo, 996 entidades públicas compradoras han generado un total de **582.491 órdenes de compras**.

- Entre enero y abril de 2023 se han observado 77.741 proveedores transando, los que al menos han enviado una oferta.

- Los procedimientos administrativos de contratación y medidas para fomentar aspectos relevantes se han realizado a través del Reglamento de la Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda) e normativas dictadas por el propio servicio, en el marco de sus competencias.

- Sin embargo, estos cambios **han resultado ser insuficientes para aumentar los niveles de competencia, probidad e innovación del sistema de compras públicas**.

- El proyecto de ley surge a propósito de diversos estudios que se han realizado respecto de las compras públicas en Chile y que han levantado importantes observaciones. En ese sentido, destacan las conclusiones en los informes del **Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, “Comisión Engel” (2015); de la OCDE sobre la Modernización de los Convenios Marco (2017)** y el **Estudio de Mercado sobre Compras**

Públicas de la Fiscalía Nacional Económica (2020).

Momentos legislativos

Fecha de ingreso: 29 de marzo de 2021.

Primer trámite constitucional (Cámara de Diputados): Proyecto aprobado con alto consenso.

Segundo Trámite Constitucional (Senado): El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Economía el 19 de enero de 2022.

Luego, se inicia un proceso entre la administración anterior, los Senadores y las Senadoras de la Comisión de Economía y distintas organizaciones para presentar indicaciones, las que ingresaron el 07 de marzo de 2022.

Desde **marzo de 2022**, la actual administración realizó un **análisis del proyecto de ley**, para presentar una **propuesta que recogiera las observaciones** de distintas partes interesadas y alcanzar un proyecto armónico. El primer paquete de indicaciones fue presentado el 15 de junio de 2022.

Posteriormente, luego de **continuas reuniones de trabajo** con los y las asesoras de los Senadores y Senadoras, se presentaron otros 4 paquetes de indicaciones, siendo el último de ellos ingresado el 13 de abril de 2023.

Metodología de Trabajo

- **Primera etapa:** El Ministerio de Hacienda, en conjunto con MINECON y ChileCompra, **trabajó en base a las indicaciones presentadas por la administración anterior y las Senadoras y Senadores de la Comisión de Economía**, incluyendo mejoras en probidad, innovación, transparencia y competencia, además se revisaron problemas de redacción y de implementación que pudiese tener la ley.

Segunda etapa: Se conforma una **mesa de trabajo con los y las asesoras** de los Senadores y las Senadoras, realizando reuniones periódicas **para acordar previamente los principales aspectos de las indicaciones presentadas**.

- Este trabajo se realizó con el **constante contacto** con la **CGR, Fiscalía Nacional Económica, Tribunal de Compras Públicas y ministerios sectoriales**. Por su parte, el MINECON analizó los cambios con el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño.

- Esto concluyó en la **presentación otros tres paquetes de indicaciones**, el 29 de julio, el 12 de agosto y el 7 de octubre de 2022.

- **Tercera etapa:** Se mantuvo el trabajo constante con los y las asesoras, **se reconocieron los puntos de disenso y de mejora**, y se mapearon los artículos que estaban en condiciones de ser votados. Finalmente, se presentó, **el 13 de abril de 2023, un último paquete de indicaciones** para corregir y agregar todos los elementos que fueron surgiendo durante la tramitación.

Esta metodología utilizada significó que la **mayoría de las indicaciones fueran aprobadas** con alto consenso.

Situación actual del proyecto de ley

Contraloría General de la República:

Durante la tramitación del Proyecto de Ley ante la Comisión de Economía, el 21 de septiembre de 2021, el Contralor General de la República dio cuenta de las importantes deficiencias del proyecto aprobado en general, urgiendo a que se introdujeran mejoras en las siguientes materias:

- El proyecto dejaba en el mismo nivel la licitación pública con los demás procedimientos de contratación, la que además debía ser fundada. Esto quebrantaba el principio de concursabilidad y afectaba la libre competencia y a las Empresas de Menor Tamaño (EMTs).

- No se avanzaba en limitar las causales de trato directo.

- No establecía incentivos ni mecanismos para el control del proceso de decisión de compra y la preparación de la contratación administrativa.

- Contemplaba una serie de conductas supuestamente sancionables, sin embargo, no señala quién tenía esa potestad y su procedimiento de aplicación.

- No se avanzaba en el fortalecimiento de la probidad.

Situación actual del proyecto de ley en trámite

- En la propuesta en trámite, destacan los

siguientes elementos:

- Ampliación del ámbito de aplicación;
- Procedimientos más competitivos;
- Nuevos procedimientos de contratación pública;
- Uso eficiente de los recursos públicos;
- Gestión de los contratos;
- Modernización y ampliación de los sistemas de información;
- Mejoras al Tribunal de Contratación Pública;
- Nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública;
- Mayor probidad y transparencia;
- Impulso a la participación de EMTs;
- Fomento a la innovación y la sustentabilidad.

3. Disposiciones aprobadas en la Comisión de Economía del Senado

I. Ámbito de aplicación de la ley

- **Aumenta el número de instituciones reguladas** por la Ley de Compras Públicas, extendiendo la cobertura de la plataforma Mercado Público.

- La regla general será que, **existiendo aportes públicos, deberá sujetarse a la ley** de compras.

- La ley **se aplicará a organismos autónomos constitucionales** tales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros. Deberán dictar una normativa interna para tales efectos.

- **Incorpora a las corporaciones, fundaciones y asociaciones** en las que participe un organismo de la Administración del Estado en su organización o que reciban más de 1.500 UTM en aportes públicos, las que deberán ser identificadas por decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Aquellas no identificadas en el decreto, podrán adherir voluntariamente, mediante convenios, sin perjuicio de que se le aplicará el capítulo VII sobre probidad y transparencia.

- Incorpora con rango legal a corporaciones regionales y municipales.

- Al **Banco Central, a las empresas públicas y las sociedades en que el Estado tenga más de 50% de participación**, se le aplicará el Capítulo de **Probidad y Transparencia**. La adhesión voluntaria

de estas instituciones a la ley de compras será vía convenios con ChileCompra.

• **Aplica la ley de compras en los contratos de ejecución de obra** y concesión de obra, según sus particularidades. Deberán utilizar el Sistema de Información y Compras Públicas.

• Excepcionalmente, por las causales establecidas en la ley, podrán realizar algunas contrataciones fuera del sistema.

ENTIDADES	COBERTURA
<ul style="list-style-type: none"> Organismos de la Administración del Estado Corporaciones municipales Fundaciones de la Presidencia Corporaciones con participación de la Administración del Estado, que reciban asignaciones públicas sobre 1.500 UTM, identificadas por D.S. Congreso Nacional Poder Judicial CGR Ministerio Público TC, TDLC, TRICEL, Tribunales Electorales Regionales, Tribunales Ambientales SERVEL CNTV 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los capítulos de la Ley 19.886 Sistema de Información y Registro de Proveedores administrados por ChileCompra Competencia de TCP
<ul style="list-style-type: none"> Corporaciones con participación de la Administración del Estado, con asignaciones públicas inferiores a 1.500 UTM. Empresas del Estado Banco Central 	<ul style="list-style-type: none"> Cap. VII Probidad y Transparencia Adhesión voluntaria a Sistema de Información
<ul style="list-style-type: none"> Personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según ley N° 19.862, respecto de tales fondos. 	<ul style="list-style-type: none"> Remisión a Reglamento
<ul style="list-style-type: none"> Licitaciones de Obra Pública y de Concesiones de obra pública (MOP y MINVU) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Información (solo en etapa de licitación) Cap. VII Probidad y Transparencia Competencia del TCP (solo en etapa de licitación)

II. Procedimientos más competitivos

• **La licitación pública es la regla general.** Excepcionalmente, por acto debidamente justificado, podrán adjudicarse contratos mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad u otros procedimientos especiales de contratación.

• Las causales de **trato directo están sujetas a una potestad reglada.** Según la causal y el monto a contratar deberán publicar -eventualmente- la decisión de recurrir a dicho procedimiento **y siempre deberá publicarse el acto administrativo totalmente tramitado.**

• Los nuevos procedimientos de contratación, al igual que la contratación directa y la licitación pública, **son excepcionales, justificados, públicos y, en su gran mayoría, competitivos.**

• Se **fortalece** la normativa aplicable **al mismo grupo empresarial o relacionado entre sí y a los beneficiarios finales.** Se regula la **inadmisibilidad de ofertas** que pretendan **la simulación de escenarios competitivos.**

- Se reconocerá la subcontratación, con limitaciones establecidas por ley.

III. Nuevos procedimientos de contratación

- Se define con **rango legal** la “**Compra Ágil**” y “**Convenio Marco**”. Se introducen como nuevos la “**Compra por cotización**”, “**Contratos para la Innovación**”, “**Diálogo Competitivo**” y “**Subasta inversa**”.

- La “**Compra Ágil**” ya no es una forma de trato directo. Destaca que se utilizará para la **adquisición de bienes y servicios menores a 100 UTM** y debe realizarse **exclusivamente con EMTs**, salvo excepciones.

- En “**Convenio Marco**” se especifica que es un **procedimiento competitivo**, que persigue la **eficiencia y la reducción de costos**, para cubrir **bienes o servicios de demanda regular y transversal**. Requiere de un **estudio previo**. Debe contemplar **adjudicaciones regionales** y considerar la participación de las empresas de menor tamaño.

- La “**Subasta inversa**” es un nuevo procedimiento **en etapas o rondas, para adquisición de productos estandarizados**, a través de plataforma administrada por ChileCompra.

- Los “**Contratos para la Innovación**” y “**Diálogo Competitivo**”, deben ser acordes a la **Política Nacional de Innovación**.

IV. Mejoras en la planificación y gestión de los contratos

- Los contratos podrán ser modificados **si las bases lo establecen**. Además, por **caso fortuito o fuerza mayor**, se podrá modificar el **plazo de ejecución** mientras dure el impedimento, o **cambiar los bienes por otros equivalentes**. Todo ello, siempre que no altere la naturaleza del contrato y no se aumente el monto más allá del 30.

- Se precisan las causales de término anticipado de los contratos. Se considera la **imposibilidad de ejecutar las prestaciones por parte de los proveedores**.

- Las **medidas por incumplimiento** deben establecerse de **forma clara e inequívoca** en las bases, acorde un debido proceso regulado en estas.

- **No podrán cobrarse las multas al proveedor**

que se le adeuden pagos.

- Se fortalecerá el **plan de compras** como **instrumento de planificación y evaluación**. Se deberá considerar las **necesidades públicas a satisfacer**, su **plan estratégico de desarrollo**, sus **adquisiciones habituales**, el **presupuesto asignado** y criterios de **sustentabilidad**. Chilecompra podrá **exigir la modificación** de este instrumento, cuando **contravenga la presente ley**. El **Ministerio de Hacienda** establecerá una **metodología** para que cada institución **evalúe** el cumplimiento de su plan de compras.

V. Fortalecimiento del Tribunal de Contratación

Pública

- Se **augmenta la integración (de 3 a 6 jueces)** con funcionamiento en **2 salas**.

- Los y juezas jueces servirán en **jornada completa**, con **dedicación exclusiva** y una **remuneración equivalente al grado VI** del escalafón superior del Poder Judicial.

- Durarán **6 años** en sus cargos.

- Se regulan **inhabilidades y prohibiciones** para los jueces y juezas.

- Se **augmenta competencia del TCP**, lo que comprende: todo el procedimiento de contratación pública, no sólo las licitaciones; ejecución del contrato; inscripción en Registro de proveedores; y acción de nulidad.

V. Fortalecimiento del Tribunal de Contratación

Pública (TCP).

- Se **perfecciona las normas de procedimiento** ante el Tribunal.

- TCP puede decretar **suspensión de procedimiento de compra o ejecución de contrato** como **medida prejudicial precautoria**.

- La **conciliación es obligatoria**. Respecto de los organismos de la Administración, la Dirección de Presupuestos deberá autorizar las conciliaciones que afecten el patrimonio fiscal, en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud.

- Procederán las **notificaciones a través de**

correo electrónico.

- Las audiencias podrán ser remotas.

- La **gestión administrativa** del TCP corresponderá a la **Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros**.

VI. Fortalecimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública

- **Proponer** al Ministerio de Hacienda **políticas públicas** en materia de compras públicas

- **Impartir instrucciones obligatorias**, de general aplicación para la correcta aplicación de los procedimientos de contratación. Deberá realizar las instrucciones previa consulta pública, en un plazo no inferior a 30 días. La resolución que las aprueba son afectas toma de razón por la Contraloría General de la República.

- Reconocimiento legal de plataforma de reclamos en procesos de compra:

- a. Se establece un **procedimiento administrativo de reclamo claro, expedito y con plazos** asociados.

- b. De **oficio o producto de una denuncia reservada**, deberá gestionar las irregularidades que detecte. Además, deberá notificar al organismo público cuestionado y a las partes interesadas.

- c. ChileCompra deberá **poner en conocimiento a los organismos de control** pertinentes sobre las irregularidades que detecte.

VI. Fortalecimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública

- **Hacer seguimiento de los procesos de compra y oficiar a los organismos públicos** para que se refieran sobre las eventuales infracciones a la ley.

- **Monitorear procedimientos de compra**. Deberá velar por el cumplimiento de las normas que imparta e informar sobre los resultados a las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara de Diputados y del Senado.

VII. Probidad y transparencia

- **Publicación** en el sistema informático del personal que participe en el procedimiento de compra.

- Mejoras al **Registro de Proveedores**, se amplía la información que deben aportar los proveedores, incluyendo el concepto de beneficiarios finales.

- Las **inhabilidades** para participar del Registro de Proveedores implicarán la **imposibilidad de ofertar y contratar con el Estado**.

- **Nuevo catálogo de inhabilidades** en Registro (delitos concursales; delitos tributarios; incumplimientos contractuales; condenas laborales; condenados por cohecho).

- Se detalla la **etapa de preparación de la contratación administrativa** (prueba de concepto, consultas al mercado, estudios de mercado, entrevistas y reuniones con la industria, etc.).

- **Ampliación de causales de incompatibilidad** a todos los funcionarios y funcionarias de la entidad compradora; y **extensión de incompatibilidades por un año desde cese de funciones** (respecto de autoridades directivas y el personal que participen en el proceso de compra).

- Se regula el **deber de abstención** de funcionarios y funcionarias.

- Establecimiento de **canal de denuncias reservadas**.

- **Personal que evalúa la licitación** deberá suscribir **declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y confidencialidad**.

- **Contraloría General de la República** podrá **ordenar instruir o instruir directamente** sumarios por infracciones a ley de compras. En caso que CGR instruya directamente el sumario la autoridad deberá dictar la sanción administrativa en 30 días desde que se le notifica la resolución que aprueba el sumario.

- Se fortalece la **publicación de las contrataciones** en el sistema, especialmente en el caso de tratos directo, y **las eventuales acciones judiciales** de las que puedan ser objeto.

- Los funcionarios y las funcionarias que **participan en el procedimiento de compras** deberán realizar una

declaración de intereses y patrimonio de acuerdo a la ley 20.880, con **periodicidad de 6 meses**.

VIII. Innovación y sustentabilidad

- **Contratos para la Innovación:** procedimiento competitivo para **productos no disponibles** en el mercado.

- **Diálogo Competitivo:** procedimiento competitivo que establece un dialogo estructurado con proveedores de un producto que existe en el mercado, pero requiere de adaptaciones, el **objeto de determinar los medios más idóneos para la satisfacción de una necesidad pública**.

- Creación de **Comité de Innovación y Sustentabilidad en Compras Públicas**, que debe aprobar **una política nacional bianual**. Es presidida por la Subsecretaría de Hacienda e integrada las Subsecretarías de Economía y Empresas de Menor Tamaño; del Medio Ambiente; de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y 4 personas calificadas.

- **Incorpora proyecto de ley de economía circular** (nueva ley, distinta de ley 19.886) **en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado**. Se aplica a los organismos de la **Administración del Estado** con la finalidad de **reutilizar los bienes en desuso y contratar servicios de forma conjunta**. En caso de que deban ser **eliminados**, debe serlo conforme a un **adecuado manejo de residuos**.

- Creación de **plataforma/catálogo economía circular**.

IX. Promoción de las MiPymes y Cooperativas

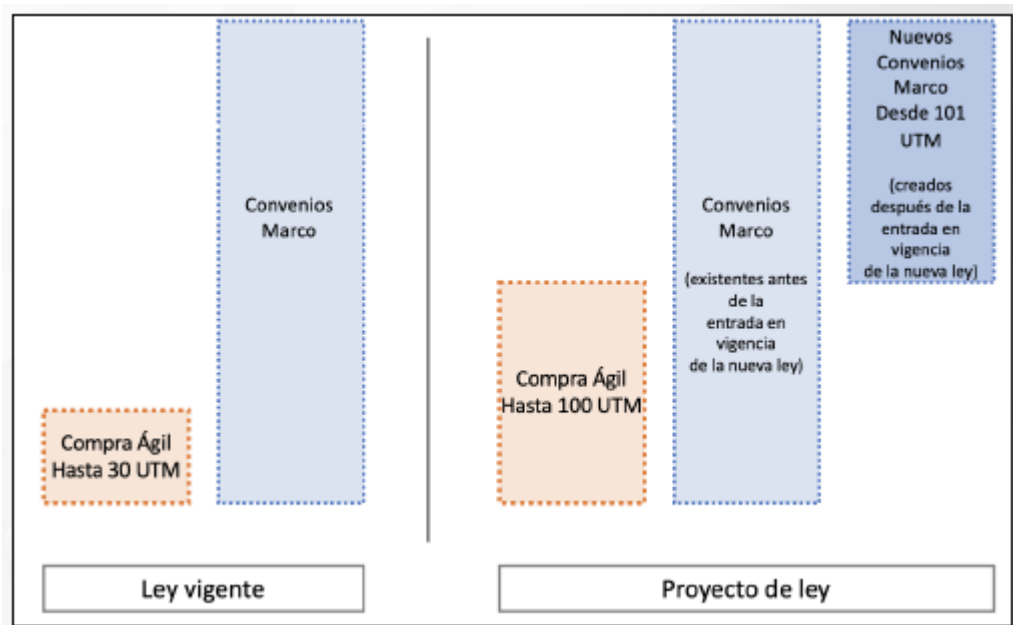
1) Se establece la exclusividad del procedimiento de compra ágil para las MiPymes y Cooperativas

- Se aumenta ámbito de aplicación, pasando de un tope de compras de 30 UTM hasta compras de 100 UTM y nuevos Convenios Marco partirán por sobre ese umbral

- Disponible para MiPymes y Cooperativas a través de plataforma de Chile Compra que restringirá la recepción de ofertas de grandes empresas

- Excepcionalmente, sólo si no se hubiese recibido cotización de MiPyme o Cooperativa, se podrá seleccionar a un proveedor que no cumpla estas características

Chile Compra estima que esta modificación permitirá aumentar la compra a Mipymes y Cooperativas por un valor cercano a los USD \$300 millones al año.



2) Se introduce la **definición de “proveedor local”** para fomentar la compra a MiPymes y Cooperativas locales

- Concepto se usará exclusivamente en MiPymes y Cooperativas cuyo domicilio esté en la misma región donde se entregan los bienes o se prestan los servicios

- Medida es esencial para potenciar la compra regional mediante criterios de priorización o desempate que serán desarrollados en bases de licitación

- Los nuevos Convenios Marco deberán contener cláusulas de adjudicación por zonas geográficas

3) Los criterios de evaluación en **Convenios Marco reconocerán la realidad de las MiPymes y Cooperativas**. Criterios y requisitos no podrán implicar una discriminación arbitraria en contra de MiPymes y Cooperativas.

4) Se consagra y **regula a nivel legal la figura de la Unión Temporal de Proveedores (UTP)** solo entre MiPymes y Cooperativas

- Permite que **MiPymes puedan competir en**

mejores condiciones frente a grandes empresas. Esta medida les permite disminuir costos de inversión, diversificar el riesgo y acceder a mejores condiciones para préstamos.

- Si algún integrante se ve afectado por inhabilidad, la UTP podrá decidir si continuar con los restantes integrantes, reemplazarlo o desistir de su participación.

4. Medidas para potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras y la demanda de compra pública de innovación por parte del Estado para dar satisfacción a problemas complejos

Soluciones innovadoras y compra pública de innovación

1) Creación de dos procedimientos especiales de compra, de carácter excepcional:

- Contratos para la innovación: operará cuando no existan soluciones en el mercado para el problema planteado, por lo que las empresas que participen requieren realizar investigación y desarrollo (I+D) para elaborar nuevos productos y servicios que permitan resolver el problema o atender la necesidad planteada por el organismo de la administración. El desarrollo de prototipos es financiado por el Estado.

- Diálogos competitivos: opera cuando hay un desafío complejo, donde sí existen soluciones en el mercado, pero en que éstas que se plantean son disímiles y, por ende, difíciles de comparar, además de requerir, por lo general, de un grado de desarrollo (pero no I+D) para desplegarlas como se solicita (adaptación).

Proceso se desarrolla en fases para que empresas mejoren y adapten sus productos o servicios y para ir delimitando lo que la entidad compradora realmente necesita.

2) Creación del Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad

- Instancia interministerial liderada por la Subsecretaría de Hacienda, junto con Min. Economía, Ciencias y Medioambiente.

- Misión de articular una política de compra pública de innovación, evaluar su funcionamiento y la implementación concreta de los procedimientos de compra pública de innovación, detectar brechas y proponer medidas de mejora.

- Evaluación de la implementación de los criterios de sustentabilidad en las compras públicas y en la ley de economía circular contenida en este proyecto.

- Creación de la política de compra pública de innovación:

- Lineamientos sobre las áreas dentro del Estado donde fomentar la Compra Pública de Innovación.

- Objetivos e indicadores de resultados.

- Plan de acción para el desarrollo de capacidades públicas necesarias para implementar la Compra pública de innovación.

- Guías o mecanismos para establecer estándares para la realización de adquisiciones en procedimientos de compras públicas de innovación.

5. Entrada en Vigencia

Acorde al artículo primero transitorio, los plazos son los siguientes:

- Las **normas de la presente ley entrarán en vigencia un año** después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las excepciones que se señalan.

- El capítulo VII, sobre **probidad y transparencia** entra en vigencia en el **momento de publicarse esta ley**.

- Las disposiciones contenidas en los numerales 4, 5 y 6 del literal d) del artículo 7° del artículo primero, sobre **Contratos para la Innovación, Diálogos Competitivos de Innovación y Subasta Inversa, y la ley de economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado entrarán en vigencia 18 meses** después de la publicación.

- Los **reglamentos** deberán dictarse a más tardar dentro de los **180 días** siguientes a su publicación.

6. Efecto Fiscal

De acuerdo a los informes financieros que han acompañado a este PDL y sus indicaciones, se consideran las siguientes fuentes de gasto fiscal:

	Año 1 (\$M)	Año 2 (\$M)	Año 3 (\$M) (régimen)
Ampliación de órganos afectos a la ley (61 nuevos órganos):	\$31.412		
Personal y mobiliario Tribunal de Contratación Pública (IF 30)		\$254.339	\$189.339
Plataforma de Economía Circular	\$52.316		
Segunda Sala Tribunal de Contratación Pública (IF 36)	\$188.004	\$188.004	\$188.004
Planta Chile Compra (técnico informático grado 13)	\$23.520	\$23.520	\$23.520
Instalación Compra Ágil (plataforma)	\$100.000		
Cambio de Régimen Tribunal de Contratación Pública (dedicación exclusiva y jornada completa, sólo se considera adicional a IF 36) (IF 178)	\$81.317	\$81.317	\$81.317
Selección ADP jueces	\$15.800		
TOTAL	\$476.569	\$547.180	\$482.180

Durante la presentación, el **Honorable Senador señor Lagos** consultó respecto a la información consignada en la lámina número 9 de la ppt, titulada “Problemas detectados durante la tramitación del proyecto de ley”. Sobre el particular inquirió si los reparos o aprensiones que hizo presente el Contralor General de la República al proyecto de ley ante la Comisión de Economía del Senado fueron recogidas por el Ejecutivo.

La **señora Subsecretaria** respondió que así se procedió por medio del conjunto de indicaciones que se fueron presentando, lo que facilitó el perfeccionamiento del proyecto de ley.

Enseguida, durante la proyección de la lámina número 12, titulada “I. Ámbito de aplicación de la ley”, el **Honorable Senador señor Coloma** preguntó si con la modificación legal que se propone pasan a incluirse dentro del marco regulatorio de la ley N° 19.886 las corporaciones municipales.

La **señora Subsecretaria** contestó que quedan comprendidas

El **Honorable Senador señor García**, en complemento a lo señalado por el Senador Coloma, y teniendo a la vista el cuadro inserto en la lámina número 14, que contempla las entidades a las cuales se les aplica la ley N° 19.886, consultó sobre la situación en la quedaban las municipalidades, ya que no aparecían mencionadas en ese listado.

La **señora Subsecretaria** señaló que actualmente ya están comprendidas dentro de los organismos de la Administración del Estado.

El **Honorable Senador señor Coloma** apuntó que actualmente los municipios ya se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley N° 19.886 y lo que se estarían agregando son las corporaciones municipales.

Posteriormente, el **Honorable Senador señor Edwards** preguntó sobre la razón de que, para las corporaciones con participación de la Administración del Estado, en caso que reciban asignaciones públicas inferiores a 1.5000 unidades tributarias mensuales, su adhesión al Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas sea voluntaria.

La **señora Subsecretaria** aclaró que lo anterior es producto de los acuerdos adoptados, por lo que si estas corporaciones reciben aportes iguales o mayores de 1.500 unidades tributarias mensuales se les aplican todos los capítulos de la ley N° 19.886, mientras que si el aporte es menor a esa cantidad deberán regirse por el Capítulo VII sobre probidad administrativa y transparencia en la contratación pública y pueden adherirse voluntariamente al Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Posteriormente, y teniendo en consideración la lámina número 25, titulada "IX. Promoción de las MiPymes y Cooperativas", el **Honorable Senador señor Coloma** consultó sobre los efectos de que la exclusividad del mecanismo de compra ágil para las MiPymes y Cooperativas represente un aumento de compra cercano a los US\$ 300 millones al año. En específico, inquirió si desde el Ejecutivo, al establecer un mercado excluyente, han estudiado escenarios o posibilidades donde, bajo este nuevo contexto, el precio de los bienes o servicios pudiesen ser más altos o, por el contrario, se pueda generar una mayor competencia.

El **señor Ministro** respondió que no se elimina la competencia, la cual seguirá existiendo, pero dentro de un grupo de oferentes más acotado, lo que igualmente debiese permitir el acceder a buenos precios.

La **señora Subsecretaria** agregó que las Pymes han hecho presente que no había una reajustabilidad en los precios de los bienes y servicios que adquiere el Estado. Sostuvo que el mecanismo de compra ágil, que actualmente está fijada hasta 30 unidades tributarias mensuales, opera bajo una lógica distinta del convenio marco.

Refirió que en este último procedimiento de contratación la Dirección de Compras y Contratación Pública realiza una gran licitación para cierto tipo de bienes y servicios, de manera tal que los proveedores que logran acceder a estos convenios marco cuentan con un mecanismo de reajustabilidad que el propio convenio marco considera.

Observó que, en el caso de la compra ágil, el órgano del Estado requerirá de tres cotizaciones antes de adquirir el bien o servicio, dando cuenta de los precios vigentes en el mercado al momento de la compra.

El **Honorable Senador señor Coloma** expresó que debe reflexionarse sobre cómo el mayor mercado de US\$ 300 millones generará una mayor competencia en las Pymes, por lo que no necesariamente se traducirá en un alza de precios. Consultó al Ejecutivo si acaso existía un estudio sobre esta materia.

Enseguida, recogiendo la respuesta de la señora Subsecretaria, preguntó si el requerimiento de tres cotizaciones en el mecanismo de compra ágil se publica en alguna plataforma, de manera tal que posibles oferentes puedan estar al tanto del requerimiento.

El **señor Ministro**, en respuesta a la intervención del Senador Coloma, señaló compartir su reflexión sobre el mayor mercado que se le entrega a las Pymes, facilitando que se puedan desarrollar y tener un mayor espacio, lo que derivará en una mayor competencia y en un posible efecto en reducción de precios.

Resaltó que en este ámbito el proyecto de ley es prudente, pues define un tope de compras de 100 unidades tributarias mensuales para un mercado que, salvo excepciones, esté enfocado en las MiPymes y las cooperativas. Con todo, precisó que este máximo fijado por ley sigue siendo relativamente bajo en los procesos de compra.

El **Honorable Senador señor Edwards**, a propósito de la informado en la lámina número 30, titulada “Soluciones innovadoras y compra pública de innovación”, y específicamente en lo que dice relación con los contratos para la innovación como procedimiento especial de compra, consultó al señor Ministro sobre la razón que justifique su inclusión en la ley N° 19.886 y no en otro cuerpo legal. Agregó que podría pensarse que es Corfo la entidad indicada para solicitar un estudio más acabado de quién tiene la capacidad para generar una innovación que solucione un problema público.

El **señor Ministro** respondió que la pertinencia de esta figura en la ley N° 19.886 obedece a que se trata de una materia de compras públicas, que el proyecto de ley objeto de estudio de la Comisión busca actualizar y modernizar. Puso de relieve que los contratos para la innovación ya estaban recogidos en la iniciativa legal presentada por el Gobierno anterior, sin perjuicio de algunos cambios que como actual Ejecutivo introdujeron, por lo que resaltó que no se trata de una figura que recién ahora estén considerando.

A continuación, puntualizó que el uso de los contratos para la innovación tendrá un espacio bien acotado dentro de las compras públicas. Sostuvo que en su totalidad las compras públicas representan cerca de US\$ 15.000 millones al año, sin embargo, precisó que para el caso particular de innovación no debiesen superarse los US\$ 100 o US\$ 200 millones en régimen.

Enseguida, explicó que los contratos para la innovación que se proponen no son asumidos por Corfo, ya que en uno u otro caso se responde a lógicas distintas. Refirió que Corfo financia innovaciones de empresas, pero para un problema o desafío de la misma empresa, sumado a que los recursos que destina son bastante acotados. En cambio, en lo que respecta a los contratos para la innovación, señaló que el desafío o problema surge desde el sector público, el que carece de las capacidades o conocimientos para resolver esa innovación. Acotó que este procedimiento especial de compra viene a reconocer que el proceso de innovación tiene que surgir desde el sector privado, pero financiado por el Estado.

El Honorable Senador señor Edwards solicitó aclarar cuál es el producto final del contrato para la innovación.

El **señor Ministro** apuntó que si existe un problema lo suficientemente amplio es difícil definir una compra pública estándar, las que se caracterizan por tener muy claro para el órgano requirente el bien o servicio que necesita comprar. Continuó señalando que, al no estar identificada la solución al problema o desafío que se busca abordar, se requiere de una innovación para lograrlo, por lo que el órgano del Estado correspondiente debe definir un desafío el cual, si bien será amplio, podrá entrar a conocer las distintas innovaciones propuestas por los privados para solucionarlo.

Observó que se pasan a financiar las investigaciones y desarrollo para elaborar nuevos productos y servicios que permitan resolver el problema planteado, aun cuando lleguen o no a concretarse. Resaltó que lo anterior es parte de lo que significa invertir en innovaciones, pues no necesariamente todas ellas llegarán a dar resultados.

Puntualizó que una vez terminada esas innovaciones, si el Estado quiere proceder a la compra del producto, aquello se formalizará a través de otro proceso de compra, ya que este tipo de contratos que se proponen culmina con una o más innovaciones que hayan resultado.

El Honorable Senador señor Lagos consultó al señor Ministro sobre quién queda como dueño de la innovación generada, en orden a saber si es el Estado o el privado que la elaboró. Asimismo, inquirió

si este procedimiento especial de compra estaba limitado a cierto tamaño de empresa.

El **señor Ministro** contestó que es probable que parte importante de la innovación vaya a ocurrir en la gran empresa, pero precisó que lo que se hace es un proceso competitivo en el que pueden participar todas las empresas, sin importar su tamaño.

Enseguida, respondiendo a lo consultado por el Senador Lagos sobre quién se hace dueño de la innovación, señaló que es algo que debiese quedar especificado al comienzo del llamado respectivo. Agregó que, sin perjuicio de lo que pueda definirse al respecto en el reglamento, el dominio de la innovación generalmente quedará en el privado, pero el Estado tendrá la posibilidad de hacer una compra preferente.

La **señora Subsecretaria** apuntó que actualmente existe la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo (ANID), la cual forma parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que cuenta con un programa de Desafío de Innovación Pública. Informó que la ANID convoca al sector público para que le planteen cuáles son sus problemas que no han podido solucionar con un producto o servicio que exista en el mercado.

Citó, a modo de ejemplo, los problemas que podría tener la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) sobre el otorgamiento de licencias médicas y la posibilidad de contar con un modelo que pudiese entregar alertas sobre licencias médicas que puedan llegar a ser fraudulentas, de manera tal de descomprimir el trabajo actual que tiene la Suseso sobre esta materia.

Relató que la ANID, junto con el Laboratorio de Gobierno, ante estos desafíos planteados por las instituciones públicas, seleccionan aquellos que efectivamente no pueden ser abordados mediante un producto o servicio en el mercado, ni tampoco otros similares que se puedan adaptar, justificándose, por tanto, una innovación. Agregó que respecto a los servicios públicos seleccionados la ANID procede a realizar una licitación al sector privado para que sean convocados a un proceso de innovación que buscará resolver el problema detectado, lo cual se irá plasmando en etapas.

Precisó que con esta modificación legal ya no se requerirá de la ANID, sino que quedará radicado en una nueva institucionalidad la política de compra pública de innovación, pues será el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad el que canalice los problemas que requieran de innovación a través de un procedimiento específico, según determine su reglamento.

Al término de la presentación, el **Honorable Senador señor Lagos** manifestó que el proyecto de ley moderniza y hace más transparente las normas generales sobre la contratación pública en Chile. En segundo término, refirió que a partir del mercado de compras públicas se aprovecha la instancia para tener una política pública destinada no solamente a velar por la eficiencia del gasto público, sino que también para fomentar el desarrollo económico de empresas de menor tamaño y para generar innovación.

Declaró que eventualmente para estos otros fines públicos puede verse comprometida la eficiencia del gasto público en la adquisición de bienes y servicios, pero recordó que en casi ningún país se opera 100% desde la óptica de la eficiencia, ya que a nivel comparado también existen medidas proteccionistas a objeto de limitar las compras públicas solamente a proveedores nacionales.

Valoró el esfuerzo detrás del proyecto de ley para poder ayudar a la pequeña y mediana empresa. Sobre la lógica detrás de las soluciones de innovación, consultó si su operatoria está en línea con las obligaciones internacionales de Chile en materia de compras pues, según entiende, siempre se hacen reservas tratándose de fomento de pequeñas y medianas empresas, minorías, etc.

El **señor Ministro** aclaró que en los acuerdos comerciales los países firmantes están limitados por el tamaño de la compra, pero los límites que se están proponiendo en el proyecto de ley están lejos de esos límites.

Sobre la eficiencia, recalcó que el grueso de la lógica del proyecto de ley es justamente promover la eficiencia en materia de recursos públicos, no obstante, reconoció que en un espacio acotado han resuelto promover dos fines distintos entre sí: entregar más acceso al mercado para las MiPymes e invertir en innovación.

El **Honorable Senador señor Lagos** observó que debiese existir un seguimiento adecuado de los procesos de innovación, para evitar que los proveedores sigan siendo los mismos, lo que puede entorpecer el grado de éxito de las innovaciones.

La **señora Subsecretaria** enfatizó que en el proyecto de ley el objetivo de eficiencia en las compras públicas es el que predomina. Apuntó que por el hecho de fortalecer a las empresas de menor tamaño en compras menores a 100 unidades tributarias mensuales no quiere decir que se esté renunciando a la eficiencia. Por lo anterior, recalcó que en este mercado puede generarse más competencia, a diferencia de lo que actualmente puede ocurrir en un convenio marco.

En cuanto a los procesos de innovación, reforzó la idea que igualmente se sigue velando por la eficiencia de los recursos públicos, pues se trata de procesos que hacen competir al sector privado para buscar la mejor solución al menor precio posible. En lo que respecta al seguimiento de la innovación, agregó que en la nueva institucionalidad que se crea mediante el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad existen lineamientos claros sobre los resultados, procesos y estándares, que facilitarán la evaluación de su implementación.

En **sesión de 31 de mayo de 2023**, la Comisión de Hacienda escuchó al **Juez Titular del Tribunal de Contratación Pública, señor Álvaro Arévalo**, quien partió haciendo presente que el sistema de compras públicas está estructurado sobre tres puntos: el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas; la Dirección de Compras y Contratación Pública, y el Tribunal de Contratación Pública, que es el que conoce de las demandas una vez que existen conflictos entre los proveedores y el Estado.

A continuación, procedió a efectuar una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY

N°19.886

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

LEY 19.886	PROYECTO DE LEY
<p>•2005.- 2015.- TCP sesiona 12 días en el mes en una sala compuesta por 3 jueces titulares sin dedicación exclusiva. Los 3 jueces suplentes sólo integran en caso de ausencia de juez titular. El número de causas se incrementa de 46 en 2005 a 351 en 2015</p> <p>•2016.-2023.- TCP sesiona 21 días en el mes en una sala compuesta por jueces titulares y/o suplentes sin dedicación exclusiva. Los jueces suplentes integran 8 ó 9 veces en el mes. Sin embargo, de 2016 a 2022 nunca se alcanza dotación completa de magistrados.</p>	<p>TCP sesionará todos los días en 2 salas compuestas por 6 jueces titulares (3 en cada una) con dedicación exclusiva. Los 2 jueces suplentes integran en caso de ausencia del titular. Se estima que el número de casos se elevará a lo menos al doble</p>

INCREMENTO DE COMPETENCIA

Actual Competencia	Nuevo Art.24 PDL (Incremento de Competencia)
(Art.24 Ley N°19.886) La competencia del Tribunal comprende los actos u omisiones ilegales o arbitrarios de la Administración ocurridos en procedimientos de licitación pública y privada entre la aprobación de las bases y la adjudicación	La jurisdicción del TCP comprende la actual competencia, a la que se agrega, además: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nuevos Procedimientos Administrativos de Contratación (Trato Directo, Convenio Marco, Dialogo Competitivo) 2) Ejecución del Contrato; 3) Acción de Nulidad de Contratos Celebrados con Infracción del Principio de Probidad 4) Nuevos organismos públicos justiciables (Congreso Nacional, Poder Judicial, Corporaciones municipales, entre otros)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA

INDICACIÓN DEL EJECUTIVO VISTA EL 16 DE MAYO	INDICACIÓN DEL EJECUTIVO APROBADA EN SESIÓN DE 17 DE MAYO.
Los jueces o juezas del Tribunal de Contratación Pública que, a la fecha de publicación de esta ley, se encuentren ejerciendo sus cargos, permanecerán en ellos por un período de 6 años desde la fecha que hubieren sido designados, sin perjuicio de las normas establecidas en la presente ley.	Los jueces o juezas del Tribunal de Contratación Pública que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren ejerciendo sus cargos, permanecerán en ellos por un período de cinco años desde la fecha que hubieren asumido en su cargo.
Los jueces que estuvieran ejerciendo su cargo en calidad de suplentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por el solo ministerio de esta, pasarán a tener la calidad de titulares, por un período de seis años.	Los jueces o juezas que estuvieran ejerciendo su cargo en calidad de suplentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por el solo ministerio de esta, pasarán a tener la calidad de titulares y mantendrán tal carácter por el período remanente hasta el cumplimiento de los cinco años desde la fecha que hubieren asumido como suplentes.

INDICACIÓN DEL EJECUTIVO VISTA EL 16 DE MAYO	INDICACIÓN DEL EJECUTIVO APROBADA EN SESIÓN DE 17 DE MAYO.
Pasados los plazos señalados en los incisos anteriores, las vacantes de jueces o juezas titulares deberán proveerse según lo dispuesto en el Capítulo V de la ley N° 19.886.	Pasados los plazos señalados en los incisos anteriores, las vacantes de jueces o juezas titulares deberán proveerse según lo dispuesto en el Capítulo V de la ley N° 19.886. Los jueces y juezas que estuvieran ejerciendo en un segundo período o posterior, cualquier fuera la calidad con que fueron nombrados, no podrán ser designados nuevamente. Aquellos que estuvieran ejerciendo en razón de su primer nombramiento, cualquiera fuera su calidad, estarán sujetos a los requisitos y procedimiento establecidos en esta ley.
Las disposiciones de esta ley referidas a las remuneraciones de las y los jueces titulares, su dedicación exclusiva y su jornada laboral comenzarán a regir el primer día del mes siguiente de la entrada en vigencia a que se refiere el artículo primero transitorio."	El procedimiento de designación de los cargos de jueces o juezas suplentes deberá iniciarse dentro del plazo de 30 días desde la publicación de la ley. Las disposiciones de esta ley referidas a las remuneraciones de las y los jueces titulares, su dedicación exclusiva y su jornada laboral comenzarán a regir el primer día del mes siguiente de la entrada en vigencia a que se refiere el artículo primero transitorio."

INDICACIÓN TRANSITORIA 8° INCISO TERCERO

INDICACIÓN DEL EJECUTIVO APROBADA EN SESIÓN DE 17 DE MAYO.	MODIFICACIÓN PROPUESTA:
<p>Pasados los plazos señalados en los incisos anteriores, las vacantes de jueces o juezas titulares deberán proveerse según lo dispuesto en el Capítulo V de la ley N° 19.886. Los jueces y juezas que estuvieran ejerciendo en un segundo período o posterior, cualquier fuera la calidad con que fueron nombrados, no podrán ser designados nuevamente. Aquellos que estuvieran ejerciendo en razón de su primer nombramiento, cualquiera fuera su calidad, estarán sujetos a los requisitos y procedimiento establecidos en esta ley.</p>	<p>“Pasados los plazos señalados en los incisos anteriores, las vacantes de jueces o juezas titulares deberán proveerse según lo dispuesto en el Capítulo V de la ley N° 19.886. Los jueces y juezas que estuvieran ejerciendo en un tercer período o posterior, cualquier fuera la calidad con que fueron nombrados, no podrán ser designados nuevamente. Aquellos que estuvieran ejerciendo en razón de su primer o segundo nombramiento, cualquiera fuera su calidad, estarán sujetos a los requisitos y procedimiento establecidos en esta ley.”</p>

INDICACIÓN TRANSITORIA 8° INCISO PRIMERO Y SEGUNDO

INDICACIÓN APROBADA EN SESIÓN DE 17 DE MAYO.	MODIFICACIÓN PROPUESTA:
<p>Los jueces o juezas del Tribunal de Contratación Pública que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren ejerciendo sus cargos, permanecerán en ellos por un período de cinco años desde la fecha que hubieren asumido en su cargo.</p>	<p>Los jueces o juezas del Tribunal de Contratación Pública que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren ejerciendo sus cargos, permanecerán en ellos por un período de seis años desde la fecha que hubieren asumido en su cargo.</p>
<p>Los jueces o juezas que estuvieran ejerciendo su cargo en calidad de suplentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por el solo ministerio de esta, pasarán a tener la calidad de titulares y mantendrán tal carácter por el período remanente hasta el cumplimiento de los cinco años desde la fecha que hubieren asumido como suplentes.</p>	<p>Los jueces o juezas que estuvieran ejerciendo su cargo en calidad de suplentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por el solo ministerio de esta, pasarán a tener la calidad de titulares y mantendrán tal carácter por el período remanente hasta el cumplimiento de los seis años desde la fecha que hubieren asumido como suplentes.</p>

JUSTIFICACIÓN

- NECESIDAD DE EXPERIENCIA DE LOS JUECES QUE ASUMIRÁN UNA NUEVA Y MAYOR COMPETENCIA

- FALTA DE INTERESADOS Y DIFICULTAD HISTÓRICA PARA ELABORAR TERNAS

- NORMA DISCRIMINATORIA RESPECTO DE OTROS TRIBUNALES ESPECIALES

FALTA HISTÓRICA DE INTERESADOS (EJEMPLO.- ÚLTIMOS CONCURSOS)

- CONCURSO JUEZ SUPLENTE 2018 (VACANTE.- Sr. Ortiz).- 4 POSTULANTES

- CONCURSO JUEZ TITULAR 2020 (VACANTE.- Sr. Arévalo).- 7 POSTULANTES

- CONCURSO JUEZ TITULAR 2020 (VACANTE.- Sra. Borgeaud).- 7 POSTULANTES

- CONCURSO JUEZ TITULAR 2020 (VACANTE.- Sr. Alsina).- 6 POSTULANTES

- CONCURSO JUEZ SUPLENTE 2020 (VACANTE.- Sr. Medina).- 4 POSTULANTES

- CONCURSO JUEZ SUPLENTE 2022 (VACANTE.- Sr. Alarcón).- 4 POSTULANTES

REELECCIÓN EN TRIBUNALES ESPECIALES

- Tribunales Tributarios y Aduaneros.- Inamovilidad. Los jueces permanecen en el cargo hasta los 75 años durante su buen comportamiento (Art.8 Ley N°20.322)

- Tribunal de Propiedad Industrial.- Designación sucesiva ilimitada (Art.17 bis F Ley N°19.039)

- Tribunales Ambientales.- Reelección hasta por 2 períodos sucesivos (Art. 2 Ley N°20.600)

- Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.- Reelección por 1 período sucesivo (Art.7 DL N°211, de 1973)

Enseguida, la Comisión escuchó a la **Presidenta de la Asociación de Funcionarios de ChileCompra, señora María Cristina Alcántara**, quien procedió a efectuar una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Proyecto de ley que moderniza Ley N°19.886 y otras leyes, para mejora la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

Quiénes somos: Asociación de funcionarios de ChileCompra

Diego Miranda
Secretario AFUCH
Director FTH y
Repr. ANEF
Profesional Dpto.
Adopción de
Servicios
DIVISIÓN
ADOPCIÓN

María Cristina Alcántara
Presidenta AFUCH
Profesional
Dpto. Adopción
de Servicios
DIVISIÓN ADOPCIÓN

Lisette
Millavil
Tesorera
AFUCH
Analista Gestión
Comercial Dpto.
Gestión
Comercial
DIVISIÓN
COMPRAS
COLABORATIVAS

Asociación de funcionarios ChileCompra
#ChileCompralNoEsUnPortalSomosPersonas

AVANCES RELEVANTES DEL PROYECTO



Asociación de funcionarios ChileCompra
#ChileCompralNoEsUnPortalSomosPersonas



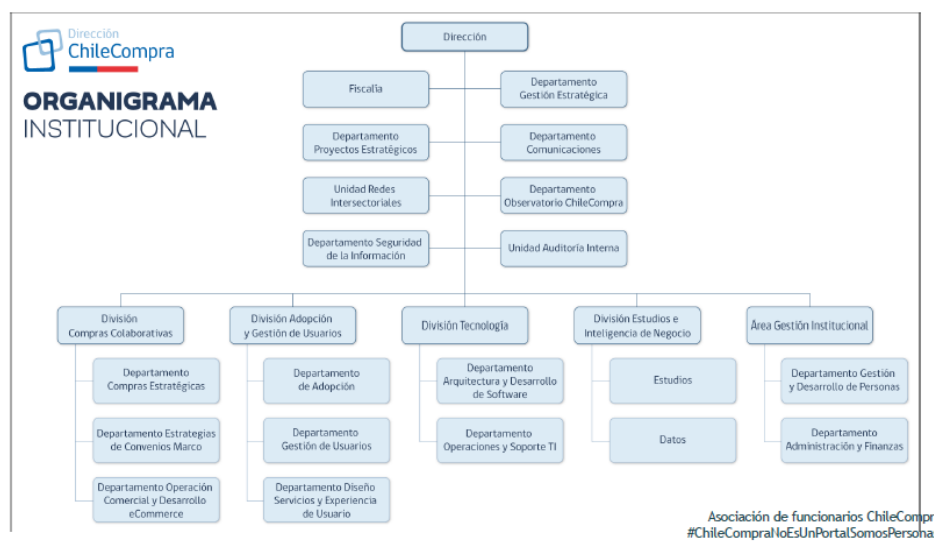
Proyecto de Ley aumenta las facultades y funciones de ChileCompra, crea nuevos mecanismos de compra y una serie de nuevos elementos que regirán las compras públicas pasando de tener 39 a 103 artículos.

Inviabilidad de implementación

Estructura organizacional insuficiente para sostener el sistema de compras públicas y financiamiento subestimado para el cumplimiento de las obligaciones que trae el Proyecto de Ley.

Asociación de funcionarios ChileCompra
#ChileCompralNoEsUnPortalSomosPersonas

Estructura ChileCompra



Viabilidad de implementación

¿Tiene ChileCompra, como institución, la capacidad para cumplir estas nuevas facultades?

Jornadas extraordinarias:
Encuesta Percepción de la Jornada Laboral en Trabajo Remoto 2021.



- 50% declara extender su jornada laboral.
- 10% trabajo nocturno.

Asociación de funcionarios ChileCompra #ChileCompraloesUnPortalSomosPersonas

Impactos esperados Proyecto de Ley

- **20% más de transacciones** producto de entrada en vigencia de la ley, llegando a triplicarse en 10 años.

- 24 proyectos tecnológicos a implementar, en los cuales el 71% de los desarrollos son medianos, grandes y muy grandes.

- **100% de los procesos de negocio** son impactados (Plataforma, Convenios Marco, Monitoreo, Gestión de Usuarios, entre otros).

- 5 nuevos procesos a implementar (nuevas funciones de ChileCompra como promoción de Empresas de Menor Tamaño, impartir instrucciones vinculantes, proponer políticas públicas, entre otras).

- 20% más de proveedores transando, pasando de 96.000 a 115.000 más de entidades compradoras, pasando de 850 a 1.150 entidades (corporaciones municipales, poder judicial, entre otras) y de 20 mil a 27 mil usuarios activos a 118.000.

- **22% más de usuarios concurrentes**, pasando de 6.000 a 7.300 en promedio y 10.000 usuarios peak a 12.200 usuarios.

Recursos Necesarios Proyecto de Ley



USD \$ 12.000.000.000 presupuesto estimado para desarrollos tecnológicos

50 personas transitorias para las distintos proyectos y funciones que se deben realizar.

Fuente: estudios realizados por el BID 2023*

Asociación de funcionarios ChileCompra
#ChileCompraNoEsUnPortalSomosPersonas

Informe Financiero PDL

Efecto Fiscal

De acuerdo a los informes financieros que han acompañado a este PDL y sus indicaciones, se consideran las siguientes fuentes de gasto fiscal:

	Año 1 (\$M)	Año 2 (\$M)	Año 3 (\$M) (régimen)
Ampliación de órganos afectos a la ley (61 nuevos órganos):	\$31.412		
Personal y mobiliario Tribunal de Contratación Pública (IF 30)		\$254.339	\$189.339
Plataforma de Economía Circular	\$52.316		
Segunda Sala Tribunal de Contratación Pública (IF 36)	\$188.004	\$188.004	\$188.004
Pianta Chile Compra (técnico informático grado 13)	\$23.520	\$23.520	\$23.520
Instalación Compra Agil (plataforma)	\$100.000		
Cambio de Régimen Tribunal de Contratación Pública (dedicación exclusiva y jornada completa, sólo se considera adicional a IF 36) (IF 178)	\$81.317	\$81.317	\$81.317
Selección ADP jueces	\$15.800		
TOTAL	\$476.569	\$547.180	\$482.180

COMISIÓN DE HACIENDA 35 30 DE MAYO DE 2023

Asociación de funcionarios ChileCompra
#ChileCompraNoEsUnPortalSomosPersonas

Propuesta

- Aumento de dotación áreas estratégicas
- Fortalecimiento Estructura Organizacional.
- Incorporar servicios externos estratégicos a la Institución.
- Aumento de presupuesto institucional subtítulo 21, 22 y 29

Asociación de funcionarios ChileCompra
#ChileCompraNoEsUnPortalSomosPersonas

Al término de la presentación, el **Honorable Senador señor García** manifestó a la señora Alcántara que, según entiende, los recursos estimados para desarrollos tecnológicos asociados al proyecto de ley, de acuerdo a los estudios realizados por el BID no serían de US\$ 12 mil millones, sino que sólo de US\$ 12 millones.

Enseguida, la **señora Subsecretaria** abordó los planteamientos formulados en la exposición del Tribunal de Contratación Pública y de la Asociación de Funcionarios de ChileCompra. En lo que respecta a los planteamientos del señor Arévalo, precisó que las modificaciones propuestas en su presentación fueron latamente discutidas en la Comisión de Economía del Senado. Reconoció que en la norma transitoria originalmente se señalaba que los jueces del Tribunal de Contratación Pública permanecerían en sus cargos por un periodo de seis

años desde la fecha en que hubieren sido designados, pero los señores Senadores de la referida Comisión de Economía resolvieron que lo que correspondía era que permanecieran cinco años desde la fecha que hubieren asumido su cargo, tal como lo considera la ley N° 19.886 actualmente, teniendo en cuenta además que son las mismas reglas a través de las cuales asumieron su cargo en su oportunidad.

Asimismo, señaló que los jueces que estuvieran ejerciendo su cargo en calidad de suplentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, por el solo ministerio de la ley, pasarán a tener la calidad de titulares.

A continuación, informó que para el primer juez respecto del cual se cumple el periodo de cinco años, aquello ocurrirá en el mes de noviembre de 2025, mientras que los siguientes cumplen su periodo en febrero y junio de 2026, y los restantes en febrero, marzo y diciembre de 2027. Declaró que, en consecuencia, existe suficiente espacio de tiempo para que vaya teniendo lugar el proceso de renovación.

Observó que parte de la discusión suscitada en la Comisión de Economía del Senado versó sobre la posibilidad de que los jueces volviesen a ser nombrados en su cargo una vez terminado su periodo, determinándose que aquellos que hubiesen cumplido dos periodos no puedan volver a postular a un tercer periodo. Apuntó que tal decisión es concordante con la forma que se ha legislado en otras materias.

Resaltó que para que no existiera un problema de continuidad del servicio se estableció que el procedimiento para la designación de los cargos de jueces o juezas suplentes se inicie dentro del plazo de 30 días desde la publicación en el Diario Oficial de la ley.

Apuntó que parte del problema de la falta de interesados en la convocatoria de los concursos de jueces titulares y suplentes que hizo presente el señor Arévalo debiese superarse con las mejoras en las remuneraciones y el establecimiento de una jornada laboral completa.

De igual manera hizo presente que actualmente es ChileCompra la que se encarga de administrar a los jueces y sus tribunales, sin embargo, mediante la presente modificación legal dicha administración pasa a ser asumida por la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Enfatizó que la manera en que están redactados los artículos transitorios del proyecto de ley le entregan resguardos a la institucionalidad propuesta y da el espacio suficiente para que se pueda llamar a concursos respecto a los nuevos cargos.

En respuesta a los planteamientos formuladas por la señora Alcántara, concordó con la expositora en que se trata de un cambio importante en materia de compras públicas. Relató que efectivamente existen un conjunto de proyectos tecnológicos que se han ido trabajando desde el mes de noviembre de 2022 en conjunto con el BID, para que a través de distintas asistencias técnicas se adelante el trabajo requerido para la implementación de la ley.

Explicó que existe un conjunto de normativa que empieza a regir una vez publicada la ley en el Diario Oficial, pero subrayó que los cambios tecnológicos asociados a esa normativa ya se encuentran listos y financiados producto del trabajo anticipado con el BID.

Con todo, se mostró disponible para que una vez aprobada y publicada la ley, como Ministerio de Hacienda trabajen en conjunto con la Dirección de Presupuestos para revisar la forma de implementación de cada uno de los cambios tecnológicos.

Agregó que en algunas temáticas de este proyecto de ley se extendieron los plazos de la entrada en vigencia de aquellos temas más difíciles, que además requieren de un reglamento para su implementación, como ocurre con la ley sobre economía circular, los diálogos competitivos o los contratos para la innovación.

El Honorable Senador señor Lagos, junto con agradecer las presentaciones del Tribunal de Contratación Pública y de la Asociación de Funcionarios de ChileCompra, puntualizó que, sin perjuicio de las inquietudes formuladas por los expositores, como Comisión de Hacienda deben pronunciarse sobre aquellas normas de su competencia, no encontrándose comprendidos aquellos incisos del artículo séptimo transitorio respecto de los cuales el señor Arévalo propone hacer ajustes.

El Honorable Senador señor García consultó a la señora Subsecretaria sobre la presentación realizada en la sesión anterior, particularmente en lo que dice relación con la Unión Temporal de Proveedores. Pidió mayores antecedentes sobre esta figura y preguntó si actualmente ya existe en la normativa de compras.

La **señora Subsecretaria** respondió que a la fecha la normativa de compras reconoce la figura de la Unión Temporal de Proveedores, permitiendo una asociación provisoria de oferentes para presentarse a una licitación, que puede justificarse, a modo de ejemplo, por el tipo de competencia que se requiere por parte del Estado. A continuación, precisó que lo propuesto en el presente proyecto de ley es que este tipo de asociaciones sea sólo respecto de empresas de menor tamaño. Acotó que

es parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para promover a las empresas de estas características.

- - -

Como se señaló con anterioridad, de conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: artículo primero, número 1, en el artículo 1° propuesto, sus incisos segundo, tercero y quinto; número 9, en la letra a), numeral iv, literal d), número 4, su párrafo segundo, y en la letra b), su numeral ii; número 11, en el artículo 8° bis propuesto, el párrafo quinto de su letra c) y el párrafo sexto de su letra e); número 23, en el artículo 16 propuesto, sus incisos primero, segundo, octavo, undécimo y décimo tercero; número 31, en el artículo 22 propuesto, su inciso primero; número 32, los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quinquies y 22 sexies inciso final propuestos; número 33, en el artículo 23 propuesto, sus incisos primero, segundo y final; número 34, el artículo 23 bis propuesto; número 35, el artículo 23 ter propuesto; número 39, en el artículo 25 quáter propuesto, su inciso quinto; número 45; número 48, en el artículo 35 decies propuesto, su inciso tercero, y número 50, en el artículo 56 propuesto, sus incisos primero y segundo; artículo segundo, en el artículo 1 propuesto, su inciso primero, y el artículo 7 propuesto, permanentes; y los artículos segundo, tercero y séptimo inciso final transitorios.

A continuación, se describen o reproducen, según el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo primero

Modifica la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Numero 1

Reemplaza el artículo 1°.

En su inciso segundo dispone que la ley se aplicará a los organismos de la Administración del Estado señalados en el inciso segundo del artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Añade que se aplicará de la misma forma a las corporaciones, fundaciones y asociaciones de participación municipal o regional. Precisa que, a las empresas públicas creadas por ley, a la Contraloría General de la República

y al Banco Central se les aplicará la ley en los términos señalados en los incisos siguientes.

En su inciso tercero preceptúa que, igualmente, se aplicará la ley a las fundaciones en las que participe la Presidencia de la República y a las corporaciones, fundaciones y asociaciones no señaladas anteriormente en las que participe de su administración o dirección un organismo de la Administración del Estado, y que reciban transferencias de fondos públicos que, en su conjunto, asciendan a una cantidad igual o superior a 1.500 unidades tributarias mensuales en un año calendario. Agrega que en enero de cada año, mediante un decreto exento, el Ministerio de Hacienda identificará estas entidades.

En su inciso quinto señala que la ley se aplicará asimismo al Consejo Nacional de Televisión, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, a los Tribunales Ambientales, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al Tribunal Calificador de Elecciones, a los Tribunales Electorales Regionales, al Servicio Electoral y al Tribunal Constitucional. Refiere que, en estos casos, las referencias hechas por esta ley al reglamento o a las instrucciones obligatorias emitidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública se entenderán realizadas a la normativa interna que cada organismo dicte para estos efectos.

El Honorable Senador señor Coloma resaltó la importancia de las modificaciones en el artículo 1° de la ley N° 19.886, considerando las nuevas instituciones a las que se le aplicará la mencionada ley.

Tras dar lectura de su inciso tercero, consultó a la señora Subsecretaria si en las fundaciones en las que participe la Presidencia de la República, debe distinguirse para la aplicación de la ley N° 19.886, si recibe o no transferencias de fondos públicos que, en su conjunto, asciendan a una cantidad igual o superior a 1.500 unidades tributarias mensuales en un año calendario.

La **señora Subsecretaria** contestó que a estas fundaciones se le aplica la ley, sin distinguir si hay aportes mayores o menores a 1.500 unidades tributarias mensuales.

Enseguida, el **Honorable Senador señor Coloma** manifestó interés en saber si se aplica o no la ley N° 19.886 a las corporaciones municipales, en orden a si una transferencia del mismo municipio a la corporación municipal condiciona la aplicación de la mencionada ley, dependiendo si la transferencia llega a ser mayor o menos a 1.500 unidades tributarias mensuales.

Recordó que las corporaciones municipales muchas veces reciben recursos desde el área privada, pero también pueden percibirlos desde el propio municipio.

El **Honorable Senador señor García** acotó que en el área de la educación reciben aportes a través de las subvenciones o en materia de salud por el aporte per cápita, sin perjuicio de los fondos de privados o del propio municipio.

La **señora Subsecretaria** mencionó que estas corporaciones no solamente perciben transferencias de recursos de los municipios, sino que también puede darse el caso que sea desde el propio Nivel Central.

Numero 9

Modifica el artículo 7°.

En el numeral iv de su letra a), reemplaza su literal d). En el párrafo segundo de su número 4 dispone que para efectos del procedimiento especial de contratación de Contratos para la Innovación, el desarrollo de prototipos u otros gastos de investigación y desarrollo serán costeados por la entidad licitante, aun cuando los proveedores beneficiarios de dicho costeo no sean los adjudicatarios finales del procedimiento de contratación. Excepcionalmente, y de manera fundada, la entidad licitante podrá no costear total o parcialmente estos gastos.

En el numeral ii de su letra b), agrega la siguiente oración final: “La infracción de esta disposición tendrá como sanción la señalada en el párrafo quinto del literal c) del artículo 8° bis, y será aplicada en virtud del procedimiento señalado en dicha norma.”.

Número 11

Intercala un artículo 8° bis.

El párrafo quinto de su letra c) prescribe textualmente lo siguiente:

“Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, la jefatura superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será

compatible con las demás sanciones administrativas que pueda corresponderle de acuerdo con la legislación vigente, y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley N° 1.263, de 1975.”.

El párrafo sexto de su letra e) es del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de la validez del contrato, la jefatura superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación como constitutiva de la presente causal será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será aplicada conforme al artículo 35 decies de la presente ley y será compatible con las demás sanciones administrativas que pueda corresponderle de acuerdo con la legislación vigente. El cumplimiento de la presente multa se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el Título III, del régimen de recaudación, pago y reintegro, del decreto ley N° 1.263, de 1975.”.

Número 23

Reemplaza el artículo 16.

En su inciso primero dispone que existirá un registro electrónico oficial de proveedores del Estado, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Su inciso segundo es del siguiente tenor literal:

“En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. Asimismo, este registro deberá individualizar a los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas, y contener información sobre los contratos adjudicados, ejecutados o terminados anticipadamente, de cada miembro del registro con algún organismo del Estado, las multas o sanciones respecto de los contratos en ejecución, e inhabilidades que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 septies.”.

En su inciso octavo refiere que la Dirección de Compras y Contratación Pública podrá fijar las tarifas semestrales o anuales de incorporación que deberán pagar los proveedores, con el objeto de poder financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las mismas no impidan o limiten el libre e igualitario acceso de los proveedores al registro.

En su inciso undécimo prescribe que la evaluación económica, financiera y legal de los proveedores podrá ser encomendada por la Dirección de Compras y Contratación Pública a profesionales y técnicos, personas naturales o jurídicas, previa licitación pública.

Su inciso décimo tercero señala, textualmente, lo siguiente:

“Podrán, asimismo, existir otros registros oficiales de contratistas para órganos o servicios determinados, o para categorías de contratación que así lo requieran, los que serán exigibles para celebrar tales contratos. Dichos registros, que deberán ser siempre electrónicos, serán regulados por decreto supremo expedido por el Ministerio respectivo. Estos registros deberán ser interoperables con el formato y las características del Registro a que se refiere el inciso primero. Estos registros deberán contener la información señalada en el inciso segundo y tercero, la que será siempre pública. Los registros del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se registrarán por su normativa especial contenida en su ley orgánica y reglamentos respectivos, sin perjuicio de serles aplicables lo establecido en este inciso.”.

Número 31

Reemplaza el artículo 22.

En su inciso primero se dispone la creación de tribunal, denominado "Tribunal de Contratación Pública", que tendrá su asiento en Santiago.

Número 32

Agrega los siguientes artículos 22 bis, 22 ter, 22 quinquies y 22 sexies.

Su artículo 22 bis es del siguiente tenor literal:

“Artículo 22 bis.- El Tribunal de Contratación Pública estará integrado por seis jueces o juezas titulares y dos suplentes.

Cada integrante será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República, de una nómina de tres personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema. La Corte formará la nómina correspondiente de una lista que contendrá un mínimo de cinco y un máximo de siete nombres que, para cada cargo, le propondrá el Consejo de Alta

Dirección Pública con sujeción al procedimiento establecido para el nombramiento de altos directivos públicos del primer nivel jerárquico, contenido en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, con las siguientes modificaciones:

a) El Presidente del Tribunal de Contratación Pública deberá informar al Consejo de Alta Dirección Pública las vacantes que se produzcan antes del término del período de nombramiento.

b) El perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo concursado será propuesto por la Corte Suprema y aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública, con las adecuaciones que estime pertinente.

c) De no haber a lo menos cinco personas candidatas al cargo que cumplan con el nivel de idoneidad suficiente para ingresar en la nómina, el Consejo de Alta Dirección Pública ordenará que se efectúe un nuevo concurso para conformar o complementar la lista, según corresponda.

La Corte Suprema podrá rechazar todos o algunos de los nombres contenidos en la lista que se le presente. Si el número de nombres restantes fuere inferior a tres, la Corte comunicará el hecho al Consejo de Alta Dirección Pública, para que complete la nómina llamando a un nuevo concurso, en el cual no podrán participar las personas que fueron rechazadas por la Corte Suprema.

Para conformar la nómina, los y las postulantes deberán ser recibidos por el pleno de la Corte Suprema en una audiencia pública citada especialmente al efecto. La Corte establecerá la forma en que se desarrollará esta audiencia.

Los y las integrantes titulares del Tribunal de Contratación Pública deberán contar con el título de abogado o abogada otorgado por la Corte Suprema, haber ejercido la profesión por a lo menos ocho años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Contratación Pública o Derecho Administrativo.

Los y las integrantes suplentes serán designados de la misma forma que los y las titulares. Deberán contar con el título de abogado o abogada otorgado por la Corte Suprema, haber ejercido la profesión a lo menos cinco años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Contratación Pública o Derecho Administrativo.”.

Su artículo 22 ter preceptúa lo siguiente:

“Artículo 22 ter.- Una vez nombrados los seis jueces o juezas integrantes del Tribunal y los o las dos suplentes, todos ellos prestarán, ante el Presidente o Presidenta de la Corte Suprema, juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República en el ejercicio de sus ministerios, en audiencia especialmente celebrada para tal efecto, en la que actuará como ministro de fe el Secretario de dicha Corte.

Los jueces y las juezas del Tribunal permanecerán en el ejercicio de sus cargos por un plazo de seis años, pudiendo ser nuevamente designados, previo concurso y por un nuevo período, de la misma forma establecida en el artículo anterior. Este plazo se contará desde la fecha en que los jueces y las juezas del Tribunal presten el juramento o promesa a que se refiere el inciso anterior.

El nombramiento de los integrantes se hará por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo suscrito por los Ministros o Ministras de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos.”.

Su artículo 22 quinquies es del siguiente tenor:

“Artículo 22 quinquies.- La remuneración mensual de los y las integrantes titulares del Tribunal será la suma equivalente a la remuneración bruta mensualizada de carácter permanente de la renta del Grado VI del Escalafón Superior del Poder Judicial.

Los y las integrantes suplentes, en su caso, recibirán la suma equivalente a un treintavo de la renta del Grado IV, correspondiente a Ministros de Corte de Apelaciones, por cada sesión a la que asistan.”.

El inciso final del artículo 22 sexies señala que la causal invocada de inhabilidad podrá ser acogida de inmediato por el juez o jueza afectada. Agrega que en caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión del o jueza implicada, aplicándose una multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales al incidentista si la implicancia, recusación, o inhabilidad fuere desestimada, por manifiesta falta de fundamento, en forma unánime.

Número 33

Reemplaza el artículo 23.

Sus incisos primero y segundo son del siguiente tenor:

“Artículo 23.- El personal del Tribunal de Contratación Pública se regirá por el derecho laboral común. Con todo, tendrá el mismo régimen remuneratorio, de dedicación e incompatibilidades del personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Asimismo, estos trabajadores estarán sujetos a las normas establecidas en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y al Título III de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo consignarse en los contratos respectivos una cláusula que así lo disponga. La infracción de las normas de probidad será causal del término del contrato de trabajo.

El Tribunal contratará mediante concurso público a un abogado o abogada, de su exclusiva confianza y subordinación, como Secretario Abogado o Secretaria Abogada. El o la titular de ese cargo será la jefatura administrativa y la autoridad directa del personal, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne el Tribunal. Además, tendrá el carácter de Ministro o Ministra de fe del Tribunal.”.

Su inciso final refiere que la dotación máxima del personal del Tribunal de Contratación Pública será de diecinueve cupos.

Número 34

Agrega un artículo 23 bis, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 23 bis.- Corresponderá a la Unidad Administradora establecida en el artículo 18 de la ley N°20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, la gestión administrativa del Tribunal de Contratación Pública.

Respecto de éste, tendrá las siguientes funciones:

1. Pago de servicios y de las remuneraciones de su personal.
2. Provisión del inmueble en que deba funcionar.
3. Abastecimiento de materiales de trabajo y mobiliario.
4. Suministro y soporte de los medios informáticos,

red computacional y del sitio web correspondiente.

5. Ejecución de la administración financiera del Tribunal. A este efecto, cuando así se le requiera, podrá poner fondos a su disposición. El Tribunal deberá rendir cuenta detallada de la inversión de estos fondos ante el Jefe de la Unidad, y la Unidad deberá llevar una cuenta para este fin.

6 La organización de cursos y conferencias destinados al perfeccionamiento de los jueces y personal del Tribunal.

7. Todas las demás necesarias para su correcto funcionamiento administrativo.”.

Número 35

Agrega un artículo 23 ter, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 23 ter.- Para efectos de la administración del Tribunal de Contratación Pública, la Unidad Administradora mantendrá dos cuentas bancarias a su nombre. Una de éstas se utilizará para los fines propios de la administración operativa del Tribunal de Contratación Pública, y la otra se empleará para todos los fines judiciales. La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública. Para estos efectos, el Jefe de la Unidad Administradora comunicará a la Subsecretaría de Hacienda las necesidades presupuestarias, dentro de los plazos y de acuerdo a las modalidades establecidas para los organismos de la Administración del Estado.”.

Número 39

Agrega un artículo 25 quáter.

En su inciso quinto prescribe que cuando el acuerdo alcanzado en la conciliación afecte el patrimonio fiscal, los organismos del Estado regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, además, requerirán autorización previa de la Dirección de Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria, y deberán cumplir con las demás condiciones señaladas en el reglamento. Agrega que dicha autorización deberá resolverse en el plazo de quince días hábiles después de recibida la solicitud por el organismo correspondiente. Para efectos de lo anterior, la renuncia expresa a las costas del juicio en la conciliación no será considerada como una afectación al patrimonio fiscal.

Número 45

Crea 1 cargo, Técnico Informático, grado 13 de la Escala de Fiscalizadores, en la planta de Técnicos de la Dirección de Compras y Contratación Pública, contenida en el artículo 33 de la ley N° 19.886.

Número 48

Agrega un artículo 35 decies.

En su inciso tercero refiere que el acto administrativo que imponga la sanción deberá dictarse dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde que se hubiere tomado conocimiento del acto dictado por la Contraloría que aprueba el sumario y propone a la autoridad competente las respectivas sanciones que estime procedentes. Agrega que la infracción del Jefe de Servicio a lo dispuesto en este inciso será sancionada con censura o multa de hasta el 50 por ciento de su remuneración, la que será aplicada por la Contraloría, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo.

Número 50

Incorpora un artículo 56.

En su inciso primero dispone que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, literal d) del artículo 7 de la presente ley, el procedimiento de Compra Ágil se realizará con empresas de menor tamaño y proveedores locales.

En su inciso segundo señala que, para garantizar la selección de empresas de menor tamaño y proveedores locales por parte de los organismos públicos en los procesos de compra, el reglamento establecerá las condiciones en que operará la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

--Puestas en votación las disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda contenidas en el artículo primero, precedentemente descritas, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos y Núñez.

Artículo segundo

Aprueba la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.

Artículo 1

En su inciso primero refiere que la ley tiene por objeto regular el mecanismo a través del cual los organismos del Estado podrán transferir el uso, goce o disposición de bienes muebles en desuso, a otros organismos del Estado o al público, y la utilización de medios y servicios compartidos en la Administración del Estado. Agrega que tales organismos deberán procurar un uso eficiente de ellos, y cautelar el buen uso de los recursos públicos y el cuidado del medio ambiente a través de la aplicación de principios de economía circular.

El Honorable Senador señor Coloma, teniendo a la vista el objeto de la ley propuesta, consultó sobre la razón de que se exceptúen de su aplicación los vehículos motorizados.

La **señora Subsecretaria** contestó que en lo que concierne a la normativa de vehículos motorizados debe estarse a los procedimientos de la Dirección General del Crédito Prendario, continuando por tanto con la aplicación de las disposiciones legales vigentes.

El Honorable Senador señor Coloma acotó que, en consecuencia, no se quiso cambiar la normativa general.

La **señora Subsecretaria** respondió que igualmente debe subastarse el vehículo, por lo que sigue la misma línea de economía circular.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó que los bienes muebles en desuso que se encuentren en las dependencias de las instituciones públicas puedan contar con la suficiente publicidad al momento de operar las lógicas de economía circular.

La **señora Subsecretaria** contestó que aquello quedará recogido en el respectivo reglamento.

Artículo 7

Es del siguiente tenor literal:

“Artículo 7.- La Dirección de Compras y Contratación Pública dispondrá de los medios para enajenar los bienes muebles señalados en el presente título, a través de un catálogo electrónico, entre los organismos señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 1 de esta ley.”.

--Puestas en votación las disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda contenidas en el artículo segundo, precedentemente descritas, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Lagos y Núñez.

Disposiciones transitorias

Artículo segundo

Su contenido es el que a continuación se transcribe:

“Artículo segundo transitorio.- Traspásanse al Tribunal de Contratación Pública diez funcionarios de la Dirección de Compras y Contratación Pública que, a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones al Capítulo V de la ley N° 19.886, prestan el apoyo técnico necesario para el adecuado funcionamiento de dicho tribunal dispuesto por el artículo 23 vigente antes de la publicación de esta ley. El traspaso se realizará a contar de la entrada en vigencia del referido Capítulo V. Asimismo, se traspasarán los recursos y bienes muebles que correspondan a dicho personal desde la Dirección de Compras y Contratación Pública al Tribunal de Contratación Pública. Del mismo modo, la dotación máxima de personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública se disminuirá en el número de funcionarios traspasados.

Los funcionarios que se traspasen conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, cualquiera sea su calidad jurídica, continuarán desempeñándose sin solución de continuidad en el Tribunal de Contratación Pública.

Los contratos de trabajo que corresponda celebrar entre la Unidad Administradora a la cual se refiere el artículo 23 bis y los funcionarios traspasados conforme al inciso primero de este artículo deberán constar por escrito dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigencia de las modificaciones al Capítulo V de la ley N° 19.886. El traspaso del personal deberá realizarse al mismo grado de remuneraciones al cual estaban asimilados en la Dirección de Compras y Contratación Pública.

El personal a que se refiere el inciso primero de este artículo tendrá derecho a las indemnizaciones que les correspondan por término de la relación laboral, de conformidad al Código del Trabajo. Para tal efecto, se considerarán sólo los años de servicios prestados a contar de la fecha de su traspaso al Tribunal de Contratación Pública dispuesto de conformidad al inciso primero de este artículo.

El traspaso del personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública al Tribunal de Contratación Pública a que se refiere el inciso primero quedará sujeto a las siguientes restricciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios o trabajadores fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.”.

--En votación el artículo segundo transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Lagos y Núñez.

Artículo tercero

Refiere que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

--En votación el artículo tercero transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Lagos y Núñez.

Artículo séptimo

En su inciso final dispone que las disposiciones de esta ley referidas a las remuneraciones de las y los jueces titulares, su dedicación exclusiva y su jornada laboral comenzarán a regir el primer día del mes siguiente de la entrada en vigencia a que se refiere el artículo primero transitorio.

--En votación el inciso final del artículo séptimo transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Lagos y Núñez.

- - -

FINANCIAMIENTO

- El informe financiero N° 30 elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 15 de marzo de 2021, señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

El presente proyecto de ley establece modificaciones a la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y crea una ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.

Los principales aspectos que aborda la iniciativa son:

A. Modificaciones a la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Se realizan las siguientes modificaciones:

1. Ampliación de los organismos afectos a la ley N° 19.886.

2. Ampliación de los actos sometidos a las normas de la ley N° 19.886: se establece que los contratos relacionados con la concesión y ejecución de obras públicas administrados por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deben adjudicarse y ejecutarse a través de los sistemas de información provistos por la Dirección

de Compras y Contratación Pública, manteniéndose vigentes sus propias normas y procedimientos para los demás aspectos sustantivos.

3. Modificación de los requisitos para contratar con el Estado: se establece como requisito obligatorio para contratar con el Estado, encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.

4. Modificación a los procedimientos de contratación: se incorporan 3 tipos de procedimiento de contratación: la Compra Ágil, la Compra por Cotización y el Convenio Marco. Asimismo, se crean 4 nuevos tipos de procedimientos de contratación: el acuerdo dinámico de compras, los contratos para la innovación, el diálogo competitivo y la subasta electrónica.

5. Inclusión de principios de economía circular en las compras públicas: se establece que, previo a realizar un procedimiento de adquisición de bienes muebles o servicios, los órganos de la Administración del Estado deberán consultar en una plataforma si existen otros bienes dentro de la Administración del Estado, o servicios compartidos, que le permitan satisfacer la necesidad requerida.

6. Se establece una nueva regulación de las causales de aplicación de los procedimientos de contratación.

7. Nuevos aspectos a considerar en los procedimientos de contratación: se agregan como aspecto a considerar en los procedimientos de licitación el ciclo de vida del bien y la sustentabilidad ambiental.

8. Reforzamiento del principio de estricta sujeción a las Bases de Licitación: se refuerza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, estableciendo que las ofertas no serán admisibles cuando estas no se ajusten a los requerimientos señalados en las bases de licitación.

9. Racionalización de la exigencia de contar con una garantía de seriedad de la oferta, y/o de fiel cumplimiento del contrato: se establece que será una instrucción de carácter general emitida por la Dirección de Compras y Contratación Pública, suscrita además por el Director de Presupuestos, que determinará respecto de qué bienes o servicios una entidad debe solicitar una o más garantías, y su monto o fórmula de cálculo, en función de los criterios objetivos tales como el valor comercial del bien o servicio, los efectos que normalmente genera el incumplimiento de la obligación de suministrar un bien o servicio determinado para el órgano respectivo y/o para las personas, y el costo que implica para los proveedores la adquisición de una garantía.

10. Facilitación del comercio electrónico por parte de organismos de la Administración: se permite omitir la obligación establecida para los proveedores de garantizar el 100% de los pagos anticipados, cuando se trate contrataciones por montos menores a 1.000 UTM, celebradas a través de medios electrónicos, y utilizando tarjetas de crédito u otros medios similares.

11. Reforzamiento del Plan Anual de Compras y mayor uniformidad en la metodología de evaluación de los resultados de los contratos: el Plan Anual de Compras deberá elaborarse considerando las necesidades públicas a satisfacer, y la utilización de procedimientos de compra que propendan al ahorro, la eficiencia y la competencia. Además, se establece que, a través de una resolución del Ministerio de Hacienda, se establecerán los criterios para evaluar los resultados de los contratos celebrados, y el rendimiento de los bienes y servicios adquiridos, con la finalidad de obtener información más precisa sobre el uso que se les da a los recursos públicos.

12. Perfeccionamiento al Registro de Proveedores: se propone establecer que el Registro de Proveedores deba contener información sobre los administradores, socios, y accionistas principales, así como también de los beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas. Asimismo, se propone agregar al Registro información sobre los contratos adjudicados, ejecutados, o terminados anticipadamente de cada miembro del Registro con algún organismo del Estado. También señalar las multas o sanciones aplicadas sobre ellos, cuando corresponda. Además, se establece que la información contenida en el Registro de Proveedores será pública.

13. Perfeccionamiento del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública: los organismos de la Administración deberán efectuar sus procedimientos de contratación, y también la gestión de sus contratos a través del Sistema de Información, administrado por ChileCompra, incorporando allí toda la información sobre la ejecución contractual, incluyendo las fechas de los pagos, la emisión de las órdenes de compra, las recepciones conformes, las modificaciones a los contratos, las sanciones por incumplimientos y las terminaciones anticipadas de los contratos.

14. Garantizar el acceso a la información entregada por el sistema de información: se propone incorporar la obligación de disponibilizar la información del Sistema de Información en formato de datos abiertos. Asimismo, se establece que el funcionario que publique información manifiestamente errónea u omite publicar aquella información que en virtud de lo señalado en la Ley de Compras Públicas o el Reglamento deba publicarse, incurrirá en una infracción administrativa. Además, se establece que en el Sistema de Información se deberán clasificar y codificar los bienes y servicios transados a través de este, permitiendo el acceso a la

información que señale el reglamento respecto de la adquisición de cada tipo de bien o servicio, en formato de datos abiertos.

15. Modificaciones a las normas del Tribunal de Contratación Pública:

15.1 Se aumenta la capacidad del Tribunal ampliando su número de funcionarios de 10 a 19.

15.2 Se establece como límite de edad para ejercer en el Tribunal, los 75 años.

15.3 Se modifica la dependencia de los funcionarios del Tribunal, desde la Dirección de Compras y Contratación Pública al mismo Tribunal, pasando además la administración del Tribunal a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

15.4 Se amplía la competencia del Tribunal para conocer de las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias cometidas por los órganos del Estado durante la ejecución de los contratos, así como de las acciones por infracción a las normas de probidad y transparencia del capítulo VII de la Ley de Compras Públicas, y los requerimientos efectuados por la Dirección de Compras y Contratación Pública para que declare la ilegalidad de acciones u omisión realizados por órganos de la Administración durante un procedimiento de contratación pública.

15.5 Se regula la tramitación electrónica del procedimiento judicial seguido ante el Tribunal de Contratación Pública.

15.6 Se agrega, dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal de Contratación Pública, el trámite de la conciliación, de manera de entregar a las partes una nueva herramienta para resolver con mayor agilidad un litigio pendiente, sin necesidad esperar la sentencia definitiva.

15.7 Se crea una acción especial, que puede ser interpuesta por el interesado ante los Tribunales Ordinarios, cuando un demandante obtenga una sentencia favorable, firme y ejecutoriada, del Tribunal de Contratación Pública, para demandar a través de un procedimiento sumario, la indemnización de perjuicios que procediera de parte de los órganos del Estado, por su actuar arbitrario o ilegal, dando así mayor eficacia a las sentencias del Tribunal de Contratación Pública, y reduciendo el tiempo de tramitación de la acción indemnizatoria, ya que actualmente esta debe tramitarse a través de un juicio ordinario.

16. Perfeccionamiento de las facultades de la Dirección de Compras y Contratación Pública: agregándose las siguientes:

16.1 Autorizar a que organismos que no pertenezcan a la Administración del Estado puedan realizar transacciones a través del Sistema de Compras Públicas.

16.2 Proponer al Ministerio de Hacienda el desarrollo de Políticas Públicas sobre compra y contratación pública.

16.3 Impartir instrucciones obligatorias, de general aplicación, conducentes a fortalecer la probidad, la transparencia, la eficiencia y la competitividad en los procesos de contratación pública de los organismos de la Administración del Estado.

16.4 Solicitar información a los organismos regidos por esta ley, sobre sus compras públicas.

16.5 Apoyar la participación de pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública.

16.6 Establecer los medios que permitan la enajenación y traspaso de bienes muebles entre organismos de la Administración del Estado.

16.7 Solicitar a la Fiscalía Nacional Económica, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o a otros organismos públicos o privados, la información que considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones.

16.8 Recibir reclamos, denuncias u observaciones del público, a través del Sistema de Información, respecto de los procedimientos de contratación pública que se lleven a cabo en virtud de las normas de la presente ley.

16.9 Hacer seguimiento del desarrollo y ejecución de los procesos de contratación pública señalados en el Reglamento, hasta la extinción de las obligaciones que generen las mismas, con el objeto de promover mejoras en el sistema de contratación pública.

16.10 Crear contratos tipo, contratos modulares, elaborar cláusulas de común aplicación contractual, y en general, realizar acciones que tengan por objeto facilitar la elaboración, suscripción e interpretación de los contratos de adquisición bienes y prestación de servicios que deben suscribir los órganos del Estado.

16.11 Hacer seguimiento de los procedimientos de contratación llevados a cabo a través del Sistema de Información señalados en el Reglamento, para verificar el cumplimiento de las normas legales

aplicables a las compras públicas.

16.12 Solicitar al Tribunal de Compras y Contratación Pública que declare la ilegalidad de una acción u omisión de una entidad compradora de la Administración.

16.13 Oficiar a los órganos del Estado que corresponda, cuando tomare conocimiento de la eventual infracción a la normativa de la presente ley.

17. Nueva obligación de realizar declaración de patrimonio e Intereses, por parte de los funcionarios de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

18. Nuevas normas sobre probidad y transparencia en las compras públicas.

19. Consejo asesor: se agrega un nuevo capítulo VIII en la Ley de Compras Públicas, en virtud del cual se crea el Consejo Asesor de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que tendrá como función asesorar a dicha Dirección en la dictación de normas aplicables a las compras públicas.

B. Ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.

A través del artículo segundo, se crea una nueva ley, con el objeto de regular el tratamiento de los bienes muebles en desuso de los organismos del Estado, así como la utilización de servicios compartidos, de manera de poder insertar a la economía circular en el proceso de compra pública.

Dicha norma será aplicable sólo a los organismos de la Administración del Estado, sin perjuicio de que otros organismos del Estado podrán adscribir a ella.

C. Modificación de otros cuerpos legales.

- Modificación a la ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central: se agrega un nuevo artículo 57 bis, para hacer compatibles las normas del título VII de la Ley de Compras Públicas, sobre probidad y transparencia en las Compras Públicas, con las normas propias de administración de bienes muebles del Banco Central.

- Modificación a la ley N° 18.803: esta ley permite a los servicios públicos regidos por el título II de la ley N° 18.575 orgánica constitucional de bases de la administración del Estado, contratar con

municipios o con terceros, acciones de apoyo, tales como recepción, recopilación, preparación, revisión y evaluación de antecedentes; cobranzas y percepción de pagos; conservación y reparación de bienes muebles; aseo y otros servicios auxiliares, sin utilizar los procedimientos de contratación establecidos por la Ley de Compras Públicas. Se establece expresamente que, en caso de que dichas contrataciones deban realizarse con entidades de derecho privado, deberán aplicarse los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Compras Públicas.

- Modificación al decreto ley N° 1.608. de 1976, que dicta normas para implantar la segunda etapa de la carrera funcionaria y otras disposiciones: dicha ley permite celebrar convenios para ejecutar trabajos técnicos y jurídicos destinados a regularizar la propiedad raíz, sin sujetarse al procedimiento establecido en la Ley de Compras Públicas, lo que se modifica estableciendo que los convenios para ejecutar dichos trabajos deberán sujetarse a las normas establecidas por la ley N° 19.886.

- Modificación al decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado: dicha ley permite la celebración de contratos de estudios para inversiones, ejecución de obras, y adquisición de materiales, bajo el procedimiento establecido en dicho artículo, a través de llamados a propuestas públicas, y sin sujetarse por tanto a las normas establecidas en la Ley de Compras Públicas. Se modifica señalando expresamente que la adjudicación de los estudios señaladas en dicho artículo se realizará a través de los procedimientos establecidos en la ley N° 19.886.

- Modificaciones a la ley N° 20.322 Que crea los Tribunales Tributarios y Aduaneros: se modifica la denominación actual, pasando a llamarse Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y del Tribunal de Contratación Pública.

- Modificaciones el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006. del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades: se aumenta la probidad y transparencia en las compras realizadas por los municipios.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Existen 3 modificaciones que generan gasto fiscal:

1. Ampliación del universo afecto a la ley: el proyecto de ley aumenta la cobertura en cuanto a los órganos del Estado que estarán afectos al sistema de compras y contratación pública, lo que se traduce en 61 nuevas instituciones. Esto implicará que cada institución deberá adaptar sus

procesos para poder operar bajo la ley de compras públicas, lo que genera un costo fiscal total de una sola vez para las 61 instituciones de \$31.412 miles de pesos.

2. Modificación al Tribunal de Compras Públicas: tanto las modificaciones al tribunal de compras públicas como la ampliación del universo requerirán un aumento en la dotación de 9 funcionarios del tribunal. Así, el gasto en personal de incorporar estos 9 funcionarios asciende a \$203.512 miles de pesos anuales. Por otro lado, se estima un ahorro anual de \$14.173 miles de pesos para el gasto en bienes y servicios de consumo, debido al menor gasto en servicios técnicos y profesionales. Además, se estima un gasto de una sola vez de \$65.000 miles de pesos el año 2, lo que considera la compra de mobiliario, remodelación de oficinas y desarrollo de programa informático.

Por lo tanto, el aumento en la dotación de 9 funcionarios genera un costo fiscal total de \$254.339 miles de pesos el año 2, y de \$189.339 miles de pesos el año 3, período donde se alcanza el régimen (ver Tabla 1).

Tabla 1.
Modificación al tribunal de Compras Públicas.

Gasto en personal	Nº	Año 2 (\$M)	Año 3 (régimen) (\$M)
Profesional grado 8	2	82.865	82.865
Profesional grado 10	1	35.321	35.321
Profesional grado 11	1	30.864	30.864
Profesional grado 16	2	24.034	24.034
Profesional grado 18	3	30.427	30.427
Total ST21	9	203.512	203.512
Gastos por una vez		65.000	0
Remodelación de Oficinas		5.000	0
Mobiliario y otros		30.000	0
Desarrollo de programa informático		30.000	0
Subtotal		268.512	203.512
Diferencia Gastos Operacional Actual v/s Gastos con Proyecto de Ley (*)		-14.173	-14.173
Total		254.339	189.339

Nota: (*) Menor gasto proyectado entre los gastos operacionales actuales del Tribunal y los gastos operacionales con Proyecto de Ley

3. Plataforma Economía Circular: la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado requiere la creación de una plataforma para administrar la disposición de bienes muebles. Esta plataforma genera un costo fiscal de una sola vez de \$52.316 miles de pesos.

Tabla 2.
Plataforma para administrar la disposición de bienes muebles.

	Horas	Costo p/h	Costo (\$M)
3 desarrolladores	1500	30	45.000
1 desarrollador Interno MP	560	31	17.360
Plugins			10.000
Total (USD)			72.360
Total (723 Pesos x Dólar)			52.316

Por lo tanto, **el presente proyecto de ley irrogará un mayor gasto fiscal de \$189.339 miles de pesos en régimen.** El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

Tabla 3.
Mayor gasto del proyecto por año.

	Año 1 (\$M)	Año 2 (\$M)	Año 3 (\$M) (régimen)
Mayor gasto	83.728	254.339	189.339

III. Fuentes de información

- Decreto Ley N° 1.608, de 1976, que dicta normas para implantar la segunda etapa de la carrera funcionarla y otras disposiciones.

- Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.

- Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

- Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020.

- Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

- Ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central.

- Ley N° 18.803, que otorga a los servicios públicos la autorización que indica.

- Ley N° 20.322 que crea los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

- Mensaje 510-368, Proyecto de ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado. 15 de enero del 2020.”.

- A continuación, se presentó el informe financiero **complementario N° 36**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 3 de marzo de 2022, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Los principales aspectos que abordan las indicaciones al proyecto de ley son los siguientes:

1. Modificaciones al Tribunal de Contratación Pública:

a. Creación de una segunda sala, integrada por tres nuevos jueces titulares.

b. Modificación a la duración de cargo jueces, pasando de 5 a 6 años.

c. Disminución de la cantidad de jueces suplentes, pasando de los actuales tres a dos (uno por sala).

d. En caso de convocarse a más de doce sesiones, hasta nueve de las siguientes sesiones se celebrarán preferentemente con la asistencia de los integrantes del Tribunal suplentes.

2. Modificación de la planta de la Dirección de Compras. Se aumenta la planta en 1 Técnico informático grado 13.

3. Ámbito de Aplicación de la Ley de Compras Públicas:

a. Ampliar la aplicación de la Ley de Compras Públicas, de manera obligatoria, a las Corporaciones o Fundaciones Municipales, y a aquellas en las que participen organismos de la Administración del Estado, señaladas en el Reglamento.

b. Fomentar la participación voluntaria en la Ley de Compras Pública de Corporaciones y Fundaciones que reciban fondos públicos.

c. Establecer que los organismos con autonomía constitucional señalados en esta Ley deberán, a la entrada en vigencia de ella, realizar sus compras y adquisiciones a través del Sistema de Compras Públicas, salvo casos fundados.

4. Procedimientos de Compra:

i. Reforzar el carácter de regla general de la licitación pública, eliminando la necesidad de fundamentar su aplicación.

b. Reformular el actual procedimiento de trato directo, de la siguiente forma:

i. Cambiar su denominación a "Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con publicidad".

ii. Limitar sus causales a la contratación de bienes y servicios en situaciones de urgencia o emergencia, cuando se realicen contrataciones en el extranjero, cuando exista un único proveedor del bien o servicio que se requiere adquirir, y aquellas señaladas en el Reglamento.

iii. En el caso de aplicar la causal de proveedor único, el organismo público deberá publicar en el Sistema de Información los antecedentes básicos del bien o servicio a adquirir y la identidad del proveedor. En caso de que la contratación supere el umbral establecido para la utilización del procedimiento de Compra Ágil, previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo deberá publicar su intención de realizar este tipo de contrato, permitiendo que, dentro de un plazo a determinar en el reglamento, otros proveedores puedan solicitar que se realice un proceso competitivo. Bajo el umbral señalado, la publicación será posterior a la emisión de la orden de compra.

iv. Establecer que la causal de proveedor único sólo procederá siempre que no exista otro bien o servicio de carácter "sustituto u otra alternativa razonable" que permita satisfacer de manera similar o equivalente, la necesidad pública requerida.

v. Se precisan los casos que justifican concurrir a trato directo por emergencia o urgencia, determinando como causal los "casos de emergencia, urgencia o imprevisto, en que se requiera satisfacer una necesidad pública urgente de manera impostergable, siempre que se justifique que, en caso de no realizarse en un breve plazo la contratación, se generarían graves perjuicios a la población o en el funcionamiento del Estado".

vi. Establecer que la Dirección de Compra deberá monitorear el desarrollo de este procedimiento de contratación, y dictar circulares vinculantes para los organismos de la Administración, para velar por su correcta aplicación.

c. Modificar las definiciones de procedimientos especiales de contratación, y subasta inversa, señalando sus objetivos.

d. Facultad de la Dirección de Compras de exigir modificación del plan anual de compras cuando este contravenga la ley. También se elimina la obligación de remitir el plan anual de compras a Dipres y otras instituciones, pasando a ser público.

e. Aumentar el umbral establecido para utilizar el procedimiento de Compra Ágil.

5. Normas de probidad y transparencia:

a. Establecer de manera uniforme para la Administración del Estado, los órganos con autonomía constitucional, el Banco Central y las empresas públicas, la prohibición de contratar para sus directivos aquellas sociedades en las que ellos participen directamente o como beneficiarios finales, o sus parientes hasta el 3° grado, con la entidad de la que formen parte, por el período en que trabajen en ella, y hasta 6 meses desde su desvinculación.

b. Establecer la prohibición para contratar con el organismo en el que trabajan, aquellos funcionarios que participen en los procesos de compra, las sociedades de las que estos participen directamente o como beneficiario final, y sus parientes hasta el 2° de consanguinidad o afinidad, por hasta 6 meses después de que abandonan sus funciones. Estos funcionarios deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, y actualizarla semestralmente.

c. Incorporar a los funcionarios señalados en el párrafo anterior, y los funcionarios directivos de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al listado de personas fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero.

d. Ampliar la inhabilidad para contratar con el Estado a los condenados por cohecho, para aquellas empresas condenadas por este delito en el extranjero.

e. Extender a agentes públicos, la obligación de declaración jurada de ausencia de conflictos de interés.

f. Establecer una "ficha de comprador público", que permita a los proveedores conocer información sobre tiempos de pago, y demandas ante el Tribunal de Contratación Pública de cada organismo público.

g. Incorporar el principio de transparencia en el inciso final del art. 6°.

h. Prohibir que dos partes relacionadas puedan hacer ofertas en un mismo procedimiento de contratación.

i. Perfeccionar el Registro de Proveedores, incorporando información sobre sus beneficiarios finales, utilizando la información existente en los demás organismos del Estado.

6. Medidas en favor de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales. Se crea un capítulo VIII, sobre promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales en el Sistema de Compras Públicas, con el siguiente contenido:

a. Establecer como función de la Dirección de Compras, promover la participación de las PYMES, en coordinación con CORFO y el Ministerio de Economía, e impulsar la articulación local de proveedores.

b. Establecer que no solo la Dirección de Compras, sino que todos los órganos del Estado, deberán promover la participación de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales en el mercado público. Además, establecer la desconcentración en montos o cantidades de bienes o servicios a adquirir, en las adjudicaciones que realicen. Lo indicado es sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en los acuerdos comerciales suscritos por Chile que se encuentren vigentes.

c. Facultar a la Dirección de Compras para establecer en el Registro de Proveedores un Sistema de Tarificación Diferenciado para empresas de menor tamaño.

d. Establecer que el procedimiento de Compra Ágil será realizado con preferencia para empresas de menor tamaño y

proveedores locales, salvo que existan menos de 2 ofertas, o el precio ofrecido por los proveedores no sea consistente con los precios de mercado.

e. Para facilitar la incorporación de las empresas de menor tamaño en el Registro de Proveedores, los diversos organismos públicos que mantengan dicha información, incluyendo el Sil, la Dirección del Trabajo, y la Tesorería General de la República, deberán entregar la información necesaria a la Dirección de Compras y Contratación Pública.

f. Con la información anterior, y considerando las categorías de tamaños de empresas establecidas en la Ley N° 20.416, la información entregada por el SU, y sus beneficiarios finales, en el Registro de Proveedores contendrá la información sobre si una empresa es o no de menor tamaño.

g. Realizar una consulta pública de toda instrucción de la Dirección de Compras que pueda afectar a empresas de menor tamaño, para conocer la opinión de estas empresas.

h. Aumentar el umbral para la exigencia de garantías de seriedad y fiel cumplimiento.

i. Regular el pago oportuno a proveedores. Se define que los Órganos del Estado tendrán la obligación de pagar a sus proveedores dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.

7. Se establecen nuevas responsabilidades y funciones para la Dirección de Compras y para los Sistemas de información que están a su cargo. Entre otras, las compras realizadas por corporaciones o fundaciones municipales deberán hacerse a través de su plataforma de manera obligatoria; se establece el deber de publicar diversas resoluciones de los Servicios en el Sistema de Información; el deber de monitorear los procedimientos llevados a cabo a través de las causales que justifican el trato directo con publicidad; la posibilidad de solicitar que los servicios modifiquen sus planes anuales de compra; la obligación de que en el sistema de información respecto de cada servicio exista una ficha pública que contenga información relativa al plan anual de compras; y promover la participación de empresas de menor tamaño.

8. Se establece que para satisfacer "necesidades de gran complejidad" (lo que será definido por reglamento) y aquellas que determine el reglamento, los órganos del Estado deberán obtener y analizar información acerca de las características de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los costos asociados, considerando el ciclo de vida útil del bien.

9. En el marco de la correcta aplicación del Trato Directo y respecto de la correcta elaboración del Plan de Compra, la Dirección de Compras podrá emitir instrucciones a entidades del Estado que son parte de la Administración del Estado y sobre otras que no lo componen.

10. Se define el procedimiento para aplicar medidas en contra del proveedor por incumplimientos del contrato, las que deberán imponerse mediante acto administrativo debidamente fundado y publicado en el Sistema de Información.

También se define en qué consistirán tales medidas.

11. Se crea el Comité de Innovación y Sustentabilidad en las Compras Públicas, y se incorpora el criterio de sustentabilidad como un parámetro dentro de las compras. Se crea el referido Comité, que tendrá como función principal asesorar a la Dirección de Compras y Contratación Pública en la determinación de aquellas necesidades públicas que deberían ser satisfechas a través de bienes o servicios que incorporen innovación o criterios de sustentabilidad. El Comité será presidido por el Subsecretario de Hacienda, y estará integrado por los Subsecretarios de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ciencia Tecnología e Innovación, y Medio Ambiente, o quien los represente; estará conformado, además, por 5 miembros que serán personas calificadas, con conocimientos y/o experiencia en materias de economía, innovación, emprendimiento, sustentabilidad, contratación pública o derecho administrativo, nombrados por el Ministro de Hacienda, a través de un decreto supremo bajo la "por orden del Presidente de la República". Los miembros no tendrán derecho a dieta o remuneración.

12. En el Proyecto de Ley el Ministerio de Hacienda por resolución establecerá una metodología para evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así como el rendimiento de los bienes y servicios que adquiere. Las indicaciones modifican la propuesta original, precisando que la metodología del Ministerio de Hacienda será para que cada institución realice la evaluación.

13. Publicación de la información de compras públicas. Para cada organismo del Estado se publicará en el Sistema de Información una ficha pública que contendrá información relativa a su Plan Anual de Compra, el registro de las adquisiciones realizadas, los días promedio de pago, los reclamos de proveedores a través del Sistema de Información, y las acciones interpuestas en su contra ante el Tribunal de Contratación Pública.

14. Modificación de Contratos Vigentes. Se establece la posibilidad que los contratos de Compra Pública puedan

modificarse durante su vigencia si concurren ciertas causales (así lo hayan previsto las bases, caso fortuito o fuerza mayor, sea necesario realizar una modificación a los bienes o servicios comprometidos que no esté prevista en las bases o el contrato, se aumenten derechos de aduana o impuestos directos que gravan bien o servicio). Se fija como limitaciones que no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes, y el equilibrio financiero del contrato. Tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 % del monto originalmente pactado.

15. Se establece que Contraloría emitirá anualmente un informe en el cual calificará el ejercicio de la facultad de la Dirección de Compras de impartir instrucciones obligatorias a los Servicios Públicos, pudiendo dictar recomendaciones para su correcto ejercicio.

16. Se establece que, si el Contralor General de la República advirtiere inconsistencias o tuviere observaciones respecto de la declaración de patrimonio realizada por Jefes de unidades operativas, informará directamente al Ministro de Estado o al Jefe Superior del Servicio respectivo. Éste, a su vez, deberá requerir un informe al jefe de unidad respectivo, que deberá ser evacuado en un plazo no superior a diez días hábiles. Por otro lado, se establece que cuando Contraloría tome conocimiento de hechos que puedan constituir infracciones a la ley, podrá ordenar a la autoridad dotada de potestad disciplinaria iniciar los procedimientos que correspondan, o iniciar directamente procedimientos disciplinarios, con arreglo a lo establecido en el Título VIII de la ley N° 10.336. Finalmente se determina que la infracción de lo dispuesto en relación con el procedimiento especial que se regula para establecer la responsabilidad del funcionario será sancionada con censura o multa de hasta el 50 por ciento de su remuneración, la que será aplicada por la Contraloría, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo.

17. La Contraloría General de la República administrará un registro de acceso público, actualizado semestralmente, que reunirá información desagregada sobre las sanciones aplicadas en virtud de la presente ley, dando cumplimiento a ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Transcurrido el plazo de cinco años desde la aplicación de la sanción, esta dejará de ser publicada.

18. Se elimina en las indicaciones la disposición que establecía una entrada en vigencia diferida en los municipios, toda vez que la Contraloría, en virtud del dictamen 160.316 de 2021, determinó que a las Corporaciones Municipales ya se les aplica la Ley de Compras Públicas, por lo que no tiene sentido establecer esta transitoriedad.

19. Se suprime el Capítulo VIII que propone el

Proyecto de Ley, sobre el Consejo Asesor de la Dirección de Compras.

II. Efecto de las indicaciones sobre el presupuesto fiscal

1) Modificaciones al Tribunal de Contratación Pública

Las indicaciones crean una segunda sala, integrada por tres nuevos jueces titulares. Con esto, el Tribunal de Contratación Pública pasa a estar integrado por seis jueces titulares. A su vez, disminuye la cantidad de jueces suplentes desde los actuales tres a dos (uno para cada sala). También se define que por sobre las 12 sesiones (se mantiene el máximo de 21 sesiones mensuales por sala, las que deben ser integradas por tres jueces), los jueces suplentes tienen preferencia para integrar dichas sesiones. No se modifica la dieta pagada por sesión, la que se mantiene tanto para jueces titulares como suplentes. Esta corresponde a un treintavo de la renta mensual grado IV de un Ministro de la Corte de Apelaciones (\$ 7.460 miles del 2022).

En este escenario, bajo el supuesto que ambas salas estarán empleadas a su máxima capacidad mensual (21 sesiones mensuales), el mayor gasto corresponde a las 21 sesiones de la segunda sala (que requieren el ejercicio de tres jueces por sesión). La siguiente tabla muestra la estimación del costo asociado a este ítem:

Tabla 1: Distribución Sesiones segunda sala Tribunal de Contratación Pública

Tipo Jueces	(a) Cantidad Jueces	(b) Sesiones que integra cada juez	(c) = (a) * (b) Dietas por pagar	(c)/3 Sesiones realizadas
Titulares	3	18	54	21
Suplentes	1	9	9	
Total	4	-	63	

De esta forma, el mayor gasto por la creación de la segunda sala consiste en el pago de las 63 dietas mensuales para integrar las 21 sesiones, a un costo de \$248 miles, significando un costo mensual de \$15.667 miles y \$188.004 miles anuales. El mayor gasto por modificaciones al Tribunal de Contratación Pública se expresa en la Tabla 2.

Tabla 2: Mayor Gastos por modificaciones al Tribunal de Contratación Pública
(Miles de \$ del 2022)

Ítem Gasto	Año 1	Año 2	Año 3 (en Régimen)
Gasto anual segunda sala	\$188.004	\$188.004	\$188.004

2. Modificación planta Dirección de Compras: Se aumenta la planta en 1 Técnico Informático grado 13.

Las indicaciones aumentan la Planta de la Dirección de Compras en un Técnico informático grado 13, lo que equivale a \$23.520 miles anuales.

De esta manera, el mayor gasto fiscal que implicará la aplicación de las indicaciones es de \$211.524 miles en régimen, de acuerdo al detalle presentado en la tabla 3.

Tabla 3: Mayor gasto por indicaciones al proyecto de ley
(Miles de \$ del 2022)

Ítem Gasto	Año 1	Año 2	Año 3 (Régimen)
Transferencias corrientes	\$188.004	\$188.004	\$188.004
Gasto en personal	\$23.520	\$23.520	\$23.520
Total	\$211.524	\$211.524	\$211.524

De esta manera, las presentes indicaciones implicarán un mayor gasto de \$211.524 en régimen, respecto de lo informado en el IF N°030 de 2021. El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

III. Fuentes de Información

- Ley de presupuestos del sector Público 2021,

Dirección de Presupuestos.

- Mensaje de S.E. El Presidente de la República
Con el que ingresa Indicaciones al Proyecto de Ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

- Proyecto de Ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

- Minuta Comisión Técnica sobre el Proyecto de Ley que moderniza el Sistema de Compras Públicas (Bol. 14.137-05).".

- Luego, se presentó el informe financiero **complementario N° 110**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 15 de julio de 2022, que es del siguiente tenor:

"I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°076-370) retiran las anteriores indicaciones (Mensaje N° 470-369) y modifican el Proyecto de Ley referido, el cual moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El principal contenido de las indicaciones es el siguiente:

i) Se amplía la aplicación de la Ley de Compras Públicas, de manera de que sea obligatoria a todos los organismos del Estado o a quienes sean financiados con fondos públicos.

En esta materia, al Banco Central y a las empresas públicas creadas por ley y a las sociedades en las que el Estado tenga participación accionaria de más del 50%, se les aplicará exclusivamente el Capítulo VII, sobre probidad y transparencia en la contratación

Finalmente, las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (de la ley N° 19.862), respecto de tales fondos, deberán acogerse a las disposiciones de Compras Públicas en los casos definidos en el reglamento.

ii) Sobre el procedimiento de compra, se refuerza el carácter general de regla general de la licitación pública, eliminando la

necesidad de fundamentar su aplicación y se reformula el actual procedimiento de trato directo.

iii) Se perfeccionan las causales de término anticipado de los contratos administrativos, reforzando la certeza jurídica en el tráfico jurídico. Se reconoce la posibilidad de la imposibilidad de ejecutar la prestación.

iv) Se reconoce a nivel legal las sanciones por incumplimiento contractual, expresando las medidas que puede tomar la administración en esta materia.

v) Se introducen mejoras en los procedimientos especiales de contratación.

vi) Se ajustan los "Contratos para la Innovación", según las mejores prácticas internacionales. Por este mecanismo se permite la contratación de servicios de investigación y desarrollo para la eventual adquisición de bienes o la contratación de servicios que, como resultado de este procedimiento concursal, permitan la satisfacción de necesidades o la resolución de problemas, respecto de los cuales no existen productos o servicios adecuados o disponibles en el mercado.

vii) Se introducen mejoras a diálogos competitivos, permitiendo al Estado definir en las bases de licitación una o más necesidades que deban ser satisfechas a partir de un diálogo o debate estructurado que tiene por objeto determinar y definir los medios más idóneos para la satisfacción de dichas necesidades.

viii) Se introduce la inadmisibilidad de una de las ofertas realizadas por "grupos empresariales relacionados", cuando estas sean simultáneas y respecto de un mismo bien o servicio.

ix) Se define la "persona beneficiaría final", para efectos del Registro de Proveedores.

x) Se amplían los aspectos que deben tomarse en consideración para elaborar el "Plan anual de compras", y se establece que el Ministerio de Hacienda establecerá una metodología para su evaluación.

xi) Se especifican las circunstancias en que los organismos del Estado podrán efectuar los procesos de compra o ejecución contractual fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

xii) Se introducen mejoras en las inhabilidades para participar del Registro de Proveedores.

xii) Se establece la prohibición de contratar con el personal del mismo organismo hasta el segundo grado de parentesco.

xiv) Se establece que los funcionarios y las funcionarías, definidos en el reglamento, que participen en procedimientos de contratación, deberán realizar una declaración de intereses y de patrimonio, y actualizarla anualmente.

xv) Se indica que los organismos del Estado deberán publicar en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas el personal que participe del procedimiento de contratación o de ejecución contractual. Asimismo, deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, en la forma dispuesta en la ley N° 20.880.

xvi) Se establece que las jefaturas de las unidades operativas que tengan a su cargo la administración y las finanzas de los organismos del Estado, deberán efectuar una declaración de Intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Debido a que las Indicaciones presentadas introducen principalmente cambios de tipo normativo, estas **no irrogarán mayor gasto fiscal**, respecto de los Informes Financieros antecedentes, N°36 de 2022 y N°30 de 2021.

III. Fuentes de información

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que formula indicaciones al Proyecto de Ley que moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e Introducir principios de economía circular en las compras del estado.

- Minuta Resumen Indicaciones Boletín 14.137-05, Ministerio de Hacienda, Julio 2022.”.

- Enseguida, se presentó el informe financiero **complementario N° 116**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 29 de julio de 2022, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°094-370) modifican el Proyecto de Ley referido, el cual moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes,

para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El principal contenido de las indicaciones es el siguiente:

i) Se ajustan condiciones administrativas referidos a la adjudicación de los contratos referidos en el Proyecto.

ii) Se determina que el Tribunal de Contratación Pública estará integrado por seis jueces o juezas titulares y dos suplentes, designados por el Presidente o la Presidenta de la República, previas propuestas en terna hechas por la Corte Suprema. Este tribunal funcionará en dos salas, con tres jueces o juezas en cada una. También se incorporan causales de inhabilidades para jueces titulares y suplentes.

iii) Se especifican algunas condiciones que debe tener una demanda interpuesta en dicho Tribunal, así como se establece el plazo para subsanar errores en su presentación.

iv) Se ajustan los procedimientos asociados a la suspensión del procedimiento administrativo contractual y de la suscripción o la ejecución del contrato, por parte del Tribunal de Contratación Pública.

v) Se establecen los medios de notificación de las partes intervinientes en causas llevadas por el Tribunal de Contratación Pública.

vi) Dentro de las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, se incorpora la sustentabilidad dentro de las características de las políticas públicas de las compras y contrataciones regidas por el proyecto que debe proponer al Ministerio de Hacienda, así como también fortalecer esta cualidad en el marco de la dictación de instrucciones obligatorias de general aplicación que debe realizar la Dirección. También se determina como función: poner a disposición de los organismos del Estado, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, contratos tipo, contratos modulares, elaborar cláusulas de común aplicación contractual y, en general, realizar acciones que tengan por objeto facilitar la elaboración, suscripción e interpretación de los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios que deben suscribir los órganos del Estado; y, Monitorear las adquisiciones de bienes y servicios, en especial aquellas llevadas a cabo a través del procedimiento de Trato Directo o la Contratación Excepcional Directa con Publicidad, y dictar instrucciones obligatorias para los órganos de la Administración del Estado, con el objeto de velar por su correcta aplicación.

vii) Se regulan los procedimientos y alcances de las reclamaciones realizadas a través del Sistema de Información y Gestión

de Compras Públicas.

viii) Se regulan las acciones y procedimientos en caso de que, a partir del monitoreo de procesos de compra, la Dirección de Compras y Contratación Pública determinare que existen indicios de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias por infracción de las normas durante un procedimiento de contratación administrativa.

ix) Se modifica la planta de la Dirección de Compras y Contratación Pública, incorporándose un cargo de Técnico Informático grado 13.

x) Se suprime el Capítulo del Proyecto que creaba y regulaba un Consejo Asesor de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

xi) Se agrega un Capítulo al Proyecto, nuevo, que crea y regula un Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad. Su función es asesorar al Estado y a la Dirección de Compras y Contratación Pública en las compras públicas de innovación, así como en la determinación de aquellas necesidades públicas que podrían ser satisfechas a través de bienes o servicios que incorporen innovación o criterios de sustentabilidad, y evaluar el funcionamiento y resultado de los procedimientos afines. También velará por la incorporación de sustentabilidad en los bienes y servicios que adquirió el Estado, y el funcionamiento de la Ley sobre la economía circular.

Será presidido por el Subsecretario o la Subsecretaría de Hacienda, y estará integrado también por los Subsecretarios o las Subsecretarías de Economía y Empresas de Menor Tamaño y del Medio Ambiente y, además, por 3 miembros, que serán personas calificadas, con conocimientos y/o experiencia de al menos 5 años, en materias de economía, innovación, emprendimiento, sustentabilidad, contratación pública o derecho administrativo, designados por el Ministro o la Ministra de Hacienda, con acuerdo de los Subsecretarios y las Subsecretarías de Economía y Empresas de Menor Tamaño y de Medio Ambiente. Sus integrantes no percibirán dieta. El Director o la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública actuará como secretario técnico o secretaria técnica del Comité. El Comité celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente o presidenta. Se regulan aspectos de su funcionamiento y alcances de sus funciones asociadas.

El Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo elaborarán, con una periodicidad anual, una Política de Compra Pública de Innovación. Esta política deberá incluir lineamientos sobre las áreas dentro del Estado donde fomentar la compra pública de innovación, objetivos e indicadores de resultados, entre otras

cosas.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Debido a que las indicaciones presentadas reiteran aspectos ya contemplados en los Informes Financieros antecedentes, N°36 de 2022, N°30 de 2021 y N°110 de 2022, además de incluir otros aspectos normativos, estas **no irrogarán mayor gasto fiscal** respecto de los informes antedichos.

III. Fuentes de información

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que formula indicaciones al Proyecto de Ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

- Minuta Resumen Indicaciones Boletín 14.137-05, Ministerio de Hacienda, Julio 2022.

- Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2022.”.

- Posteriormente, se presentó el informe financiero **complementario N° 129**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 12 de agosto de 2022, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N° 110-370) modifican el Proyecto de Ley referido, el cual moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El principal contenido de las indicaciones es la creación de un nuevo Capítulo, sobre la promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el Sistema de Compras Públicas, cuyos esenciales asuntos se detallan a continuación:

i) Se determinan disposiciones generales del Capítulo, estableciéndose que la Dirección de Compras y Contratación Pública tendrá dentro de sus funciones la de apoyar la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública. Además, se determina que los organismos del Estado promoverán la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de

contratación pública con el objeto de asegurar la competitividad y su participación en el sistema de compras públicas y se promoverá la participación de proveedores locales y de empresas de menor tamaño que sean lideradas por mujeres.

Se establece que semestralmente la Dirección de Compras y Contratación Pública elaborará un reporte público que contenga estadísticas acerca de la participación de las empresas de menor tamaño en los distintos procedimientos de contratación contemplados en este Proyecto.

ii) Se definen los alcances y contenidos de la figura de "Unión Temporal de Proveedores". Esta figura se define en las indicaciones con el fin de permitir que un conjunto de empresas de menor tamaño, ya sean personas naturales o jurídicas, se unan para la presentación de una oferta en caso de licitaciones o convenio marco, o para la suscripción de un contrato, en caso de una contratación directa, sin que sea necesario constituir una sociedad.

iii) Se determina que los procesos de Compra Ágil se realizarán con empresas de menor tamaño y proveedores locales y se establece que un reglamento establecerá las condiciones en que operará la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras para garantizar la selección de dichos tipos de empresa en los procesos de compra.

Adicionalmente, se determina que las bases de licitación de los Convenios Marco deberán contener cláusulas de adjudicación por zonas geográficas de los bienes o servicios licitados, a fin de promover la participación de proveedores locales. También se determina que procederá la Contratación Directa con Publicidad cuando se trate de adquisiciones inferiores a 30 UTM, y que privilegien materias de alto impacto social. Finalmente, se establece que, cuando se trate de licitaciones de un valor inferior a 500 UTM, las municipalidades, los gobiernos regionales y los organismos públicos territorialmente descentralizados o desconcentrados, podrán establecer criterios de evaluación que otorguen prioridad o preferencia a los proveedores locales correspondientes a la zona geográfica en que se encuentran ubicadas.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

La instalación del procedimiento de Compra Ágil, indicado en el literal iii) anterior, implicará cambios en la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, cuyos costos ascienden a MM\$100, por una sola vez, por lo que estas indicaciones **irrogarán un mayor gasto fiscal** por esa cuantía.

El mayor gasto que represente la aplicación de

esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

III. Fuentes de información

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que formula indicaciones al Proyecto de Ley que moderniza la ley INI°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

- Minuta Resumen Indicaciones Boletín 14.137-05, Ministerio de Hacienda, Julio 2022.”.

- A continuación, se presentó el informe financiero **complementario N° 178**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 7 de octubre de 2022, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (Mensaje N°154-370) modifican el Proyecto de Ley referido, el cual moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El principal contenido de las indicaciones es el siguiente:

i) Se incorpora que, mediante un decreto exento en enero de cada año, el Ministerio de Hacienda identificará las entidades que sean fundaciones u otras en las que participe la Presidencia de la República, tal que estarán afectas a la ley N° 19.886.

ii) Se precisa que los mecanismos de contratación, según sus características, podrán ser utilizados para promover el acceso a la contratación pública de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social, de aquellas que promueven la igualdad de género, y de grupos subrepresentados en la economía nacional.

iii) Se ajustan elementos que definen los siguientes procedimientos: compra ágil, convenio marco y subasta inversa electrónica.

iv) Respecto del trato directo o contratación directa, se ajustan los criterios que permiten este procedimiento y se ajustan algunas necesidades de respaldos técnicos e informes asociados.

v) Respecto de los criterios que establecen la inadmisibilidad de las ofertas, se ajustan parte de los criterios para determinar cuándo una o más ofertas que se presentaren en un procedimiento de contratación, son parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí.

vi) Se ajustan los artículos referidos a las garantías de seriedad exigidas por las entidades licitantes, y al registro del personal que participa del procedimiento de contratación o de ejecución contractual y las funciones que cumplen en tales procedimientos, donde también se alude a las responsabilidades administrativas en casos de contravención de las normas.

vii) Respecto del Tribunal de Contratación Pública, se modifica su integración, determinándose que estará integrado por seis jueces o juezas titulares, de dedicación exclusiva y jornada completa, y dos suplentes. Se establece que los jueces (titulares y suplentes) serán nombrados por el Presidente de la República, desde una terna propuesta por la Corte Suprema, construida en base a candidatos seleccionados por el Servicio Civil. También se detallan los requisitos e incompatibilidades de los jueces, plazos de duración, remuneraciones, deberes, prohibiciones e inhabilidades afines al cargo según el Código Orgánico de Tribunales, entre otros elementos. Además, se ajustan artículos transitorios para adecuarlos a la entrada en vigencia de lo propuesto para este Tribunal.

viii) Se ajustan artículos referentes a los procedimientos del Tribunal de Contratación Pública.

ix) Se agrega al Subsecretario o Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación como integrante del Comité de Compras Públicas.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Respecto de los cambios en el Tribunal de Contratación Pública, irrogan un mayor gasto fiscal producto del cambio de régimen de los 6 jueces, que pasan a tener dedicación exclusiva y jornada completa, con una remuneración equivalente a un grado VI del Escalafón Superior del Poder Judicial, correspondiente a \$6.352 miles mensuales. Esto implica un gasto fiscal de \$457.326 miles al año en régimen, de los cuales **\$81.317 miles al año resultan adicionales a lo referido en el Informe Financiero N°36 de 2022** para dicho Tribunal.

Así también, el costo de cada proceso de selección de jueces, llevado a cabo por el Servicio Civil, asciende a \$15.800 miles. Por lo tanto, **se irrogará un mayor gasto fiscal por \$15.800 cada vez que se requiera seleccionar un juez**, cuya duración en el cargo es de 6 años.

El resto de las indicaciones no irrogarán un mayor gasto fiscal, debido a que sus alcances son adecuaciones a procesos que ya han reflejado su costo fiscal en Informes Financieros precedentes, o porque su contenido puede ser cubiertos con los recursos vigentes de las entidades involucradas.

III. Fuentes de información

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que formula indicaciones al Proyecto de Ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

- Escalafón del personal superior y escalafón de miembros de los consejos técnicos. Poder Judicial, diciembre de 2021.”.

- Luego, se presentó el informe financiero **complementario N° 63**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 10 de abril de 2023, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°024-371) modifican el Proyecto de Ley referido, el cual moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El principal contenido de las indicaciones es el siguiente:

i) Se aclara que los criterios complementarios a la evaluación técnica y económica del bien o servicio, como privilegiar el acceso de empresas de economía social, que promuevan la igualdad de género o de propiedad y/o liderada por mujeres, no podrán en ningún caso, ser los únicos que se consideren para la adjudicación de la oferta.

ii) Se precisa que los reglamentos de obras públicas establecerán cómo se realiza el uso de Mercado Público.

iii) Se genera una excepción para que ciertos

contratos de licitaciones de obras públicas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, operen parte de sus procesos fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones.

iv) Se realizan ajustes a la definición del proceso de diálogo competitivo de innovación y se establecen sus causales de procedencia.

v) Se establece que en caso de que las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles, procederá primero licitación privada y luego contratación por trato directo.

vi) Se aclara que la prohibición de contratación con empresas o personas relacionadas, debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

vii) Se realizan ajustes en los plazos de entrada en vigencia, ampliando de 12 a 18 meses luego de la publicación de la ley, las disposiciones contenidas en los numerales 4, 5 y 6 del literal d) del artículo 7 del artículo primero, sobre Contratos para la Innovación, Diálogos Competitivos y Subasta Inversa.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Debido a la naturaleza de estas indicaciones, estas no irrogarán mayor gasto fiscal, respecto de los I.F. antecedentes.

III. Fuentes de información

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que formula indicaciones al Proyecto de Ley que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Economía, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Modifícase la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, de la siguiente forma:

1. Reemplázase el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Los contratos que celebren los organismos del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado.

La presente ley se aplicará a los organismos de la Administración del Estado señalados en el inciso segundo del artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Se aplicará de la misma forma a las corporaciones, fundaciones y asociaciones de participación municipal o regional. A las empresas públicas creadas por ley, a la Contraloría General de la República y al Banco Central se les aplicará la presente ley en los términos señalados en los incisos siguientes.

Igualmente, se aplicará la presente ley a las fundaciones en las que participe la Presidencia de la República y a las corporaciones, fundaciones y asociaciones no señaladas anteriormente en las que participe de su administración o dirección un organismo de la Administración del Estado, y que reciban transferencias de fondos públicos que, en su conjunto, asciendan a una cantidad igual o superior a 1.500 unidades tributarias mensuales en un año calendario. En enero de cada año, mediante un decreto exento, el Ministerio de Hacienda

identificará estas entidades.

Las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe de su administración o dirección un organismo de la Administración del Estado, y que reciban transferencias de fondos públicos que, en su conjunto, sean inferiores a 1.500 unidades tributarias mensuales, podrán suscribir convenios con la Dirección de Compras y Contratación pública para adherir voluntariamente a las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de que se les aplicará siempre el Capítulo VII sobre probidad administrativa y transparencia en la contratación pública.

La presente ley se aplicará asimismo al Consejo Nacional de Televisión, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, a los Tribunales Ambientales, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al Tribunal Calificador de Elecciones, a los Tribunales Electorales Regionales, al Servicio Electoral y al Tribunal Constitucional. En estos casos, las referencias hechas por esta ley al reglamento o a las instrucciones obligatorias emitidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública se entenderán realizadas a la normativa interna que cada organismo dicte para estos efectos.

A los organismos del Estado no incluidos en los incisos anteriores, al Banco Central, a las empresas públicas creadas por ley y a las sociedades en las que el Estado tenga participación accionaria de más del 50%, se les aplicará exclusivamente el Capítulo VII de la presente ley, sobre probidad administrativa y transparencia en la contratación pública. Sin embargo, los organismos singularizados en el presente inciso podrán suscribir convenios con la Dirección de Compras y Contratación Pública para acogerse a las demás disposiciones de esta ley y su reglamento en todo aquello que no fuere contrario a lo dispuesto en sus propias leyes orgánicas.

Adicionalmente, a las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según lo establecido en la ley N° 19.862, respecto de tales fondos, se les aplicarán las disposiciones de esta ley en los casos definidos en el reglamento.

2. Agrégase el siguiente artículo 2° bis, nuevo:

“Artículo 2° bis.- La contratación pública persigue satisfacer oportunamente las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y se rige por los principios de libre acceso a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad,

y de valor por dinero, el que consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones, y la mejor relación costo beneficio en las adquisiciones. Asimismo, se promoverá la participación de empresas de menor tamaño y la incorporación de manera transversal de criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental.”.

3. En el artículo 3º, sustitúyase el párrafo tercero del literal e) del inciso primero por el siguiente:

“No obstante las exclusiones a que se refiere esta letra, se les aplicará las disposiciones a las que se refiere el artículo 3º bis.”.

4. Agrégase un nuevo artículo 3 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 3º bis.- No obstante las exclusiones que se señalan en la letra e) del artículo 3º, a los contratos que se señalan a continuación, les serán aplicables las siguientes disposiciones, según se trate:

A los contratos de ejecución de obra pública, a los relacionados con ellos y a los contratos de estudios, proyectos y asesorías relacionados con la concesión de obras públicas, sólo respecto de la etapa de contratación, esto es, desde la publicación de las bases hasta la adjudicación del contrato o selección del contratista o consultor según sea el caso, se les aplicará la normativa contenida en los Capítulos V y VII, a excepción de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 24, y las disposiciones que, a consecuencia de ello no le sean aplicables, el inciso séptimo del artículo 25 bis, y los artículos 35 bis y 35 sexies, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. El artículo 35 octies le será aplicable en la forma en él indicada.

Las etapas de dicho proceso de contratación, mencionadas en el inciso anterior, deberán desarrollarse íntegramente a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas a que se refiere el artículo 19.

Excepcionalmente, en caso de ser necesario por las características de la licitación a efectuar, dichos procesos o parte de ellos se podrán efectuar fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones, mediante un acto administrativo debidamente fundado, emanado de la Dirección correspondiente del

Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus servicios de vivienda y urbanización, sin perjuicio de las causales establecidas en el artículo 21 de la presente ley.

Las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico podrán ser enviados por los proveedores de manera física, de acuerdo con lo que establezcan las bases en cada caso.

A los contratos de concesión de obra pública se les aplicará la normativa contenida en los Capítulos V y VII, a excepción de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 24, y las disposiciones que, a consecuencia de ello no le sean aplicables, el inciso séptimo del artículo 25 bis y los artículos 35 bis y 35 sexies, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. El artículo 35 octies sólo les será aplicable en la forma en él indicada.

Las licitaciones de concesiones de obras públicas podrán desarrollarse a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas según lo establezca el respectivo reglamento del decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del mismo ministerio, Ley de Concesiones de Obras Públicas. El reglamento podrá establecer que, excepcionalmente, ciertas actuaciones del proceso licitatorio se lleven a cabo de forma presencial.

Con todo, respecto de los contratos señalados en la letra e) del artículo 3° y en los incisos anteriores, la presente ley se aplicará supletoriamente sólo y exclusivamente en lo referente al procedimiento de contratación, esto es, hasta la adjudicación o selección del contratista o consultor según sea el caso. En todo lo demás se regirán exclusivamente por su normativa especial para los demás aspectos sustantivos y de procedimiento.

No le serán aplicables al Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas y a los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo las normas del Registro de Proveedores regulado en esta ley, salvo en lo dispuesto por el inciso décimo tercero del artículo 16 y el artículo 35 octies. Con todo, estos registros deberán ser interoperables, con el señalado Registro de Proveedores.”.

5. Reemplázase, en el epígrafe del CAPÍTULO II, la frase “la Administración” por “los organismos”.

6. Modifícase el artículo 4° de la siguiente forma:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la expresión “la Administración” por “los organismos del Estado”.

ii. Intercálase entre la expresión “el reglamento,” y la frase “cumpliendo con los demás”, la oración “y se encuentren inscritas, con su información actualizada, en el Registro de Proveedores establecido en el artículo 16,”.

b) Suprímense los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno.

7. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5.- Los órganos del Estado adjudicarán los contratos que celebren mediante licitación pública. Excepcionalmente y, por un acto debidamente fundado y acreditado en la forma en que señale el reglamento, podrán adjudicar contratos celebrados mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad, o de acuerdo con los procedimientos especiales de contratación.

Dicha autorización podrá dictarse en el mismo acto que aprueba el respectivo contrato. La anotada resolución deberá publicarse en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su dictación.”.

8. Modifícase el artículo 6° de la siguiente forma:

a) En el inciso primero, reemplázase la frase “y en la evaluación de las respectivas propuestas se dará prioridad” por el texto “se establecerán criterios que evalúen favorablemente.

b) Agrégase un inciso noveno, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual noveno a ser décimo:

“En las licitaciones públicas, los organismos públicos afectos a la aplicación de la presente ley podrán seleccionar preferentemente, a empresas de economía social, o que promuevan la

igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional, según lo determine el reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, estos criterios no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica, y no podrán tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otros oferentes.”.

c) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“En todo caso, los organismos del Estado deberán propender a la probidad, eficacia, eficiencia, competencia, **transparencia, sustentabilidad** y ahorro en sus contrataciones.”.

9. Modifícase el artículo 7° de la siguiente forma:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase en el literal a) la expresión “la Administración realiza” por “los organismos del Estado realizan”.

ii. Reemplázase en el literal b) la expresión “la Administración invita” por el texto “los organismos del Estado invitan”.

iii. Reemplázase el literal c), por el siguiente:

“c) **Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad: Procedimiento de contratación en el que, por las circunstancias de su adquisición o por la naturaleza misma del bien o servicio, se realiza un acuerdo entre el organismo comprador y un proveedor en particular, sin la concurrencia de otros proveedores, sujeto a las normas de publicidad establecidas en esta ley. Las circunstancias de la adquisición o la naturaleza del bien o servicio que justifican la utilización de este procedimiento deberán, en todo caso, ser acreditadas según lo determine el reglamento.**”.

iv. Reemplázase el literal d), por el siguiente:

“d) **Procedimientos especiales de contratación: Mecanismos de contratación establecidos para la adquisición de tipos de bienes o servicios específicos, o evaluados en un determinado rango de precio, señalados en la presente ley. Estos procedimientos persiguen objetivos particulares, como son la promoción de las empresas de menor tamaño y proveedores locales, los de probidad, eficacia, eficiencia, innovación, ahorro, competencia, sustentabilidad y acceso. Cada entidad licitante será responsable de acreditar las**

circunstancias que la facultan para aplicar el respectivo procedimiento especial de contratación.

Son procedimientos especiales de contratación:

1. Compra Ágil: es el procedimiento mediante el cual, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, los organismos del Estado de manera simple, dinámica, expedita, competitiva, pública y transparente pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 unidades tributarias mensuales, previa solicitud de al menos tres cotizaciones realizadas a través del referido sistema. Si un organismo no seleccionare el proveedor que haya presentado la oferta de menor precio, deberá fundamentar dicha decisión en la respectiva orden de compra.

Este tipo de compra deberá realizarse con empresas de menor tamaño y proveedores locales, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley.

2. Compra por Cotización: es el procedimiento de contratación en el que, por la naturaleza del tipo de bien o servicio requerido para satisfacer una determinada necesidad pública, se requiere abrir un espacio de negociación con los proveedores, con un mínimo de tres cotizaciones previas, sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública, ni para la propuesta privada, en los casos previstos en el artículo 8 quáter. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según lo determine el reglamento.

3. Convenio Marco: es el procedimiento de contratación competitivo realizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, que persigue la eficiencia y ahorro en los costos de transacción en el suministro directo de bienes o servicios estandarizados a los organismos públicos, con demanda regular y transversal. La Dirección evaluará la oportunidad y conveniencia de llevar a cabo dichos procesos, para lo cual realizará estudios previos de factibilidad, en orden a determinar si los bienes o servicios a licitar cumplen con los requisitos de estandarización, de transversalidad y de regularidad en la demanda que hacen procedente este procedimiento especial de contratación administrativa.

En virtud del procedimiento de Convenio Marco, se establecerán previamente en las bases los términos de provisión y entrega, los precios y descuentos, entre otras posibles condiciones, respecto de dichos bienes y servicios, durante un período de tiempo determinado.

La admisión a estos convenios se realizará mediante licitaciones periódicas abiertas a todos los oferentes de los respectivos bienes o servicios, seleccionándose a múltiples proveedores, bajo las condiciones señaladas en las bases de licitación. Estas condiciones podrán incluir requerimientos técnicos, económicos mínimos y/o número o porcentaje de proveedores a ser seleccionados para un determinado convenio marco, de manera de garantizar la competencia entre los oferentes.

La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá definir criterios obligatorios, para la elección de bienes o servicios determinados, ofertados a través de Convenio Marco, así como también, los requisitos para actualizar las condiciones de los productos ofrecidos, los que deberán ser incluidos en las bases de licitación del respectivo convenio.

El Convenio Marco deberá contemplar adjudicaciones por zonas geográficas de manera de asegurar la participación de proveedores locales, acorde con lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley. De igual forma, se considerarán las ofertas de las empresas de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo IX de la presente ley.

Los Convenios Marco vigentes se traducirán en un catálogo publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras, que contendrá una descripción de los bienes y servicios ofrecidos, sus precios, sus condiciones de contratación, y la individualización de los proveedores a los que se les adjudicó el Convenio Marco. La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá mantener actualizado dicho catálogo.

4. **Contratos para la Innovación:** es el procedimiento competitivo de contratación que tiene por objeto la adquisición de bienes o la contratación de servicios para la satisfacción de necesidades o resolución de problemas respecto de las cuales no existen productos o servicios adecuados o disponibles en el mercado. Para efectos de este procedimiento, en la convocatoria a participar de él, la entidad licitante deberá describir los requisitos que deben cumplir los proveedores y la necesidad que se requiera solucionar o el problema a resolver, junto a las distintas fases que tendrá el procedimiento de contratación. Este procedimiento podrá incluir la contratación de servicios de investigación y desarrollo, los cuales podrán resultar en la adjudicación de uno de los productos o servicios en desarrollo, en la realización de un nuevo proceso de licitación para la contratación de uno de estos por otro proveedor o sin adjudicación.

Para efectos de este procedimiento, el desarrollo de prototipos u otros gastos de investigación y desarrollo serán costeados por la entidad licitante, aun cuando los proveedores beneficiarios de dicho costeo no sean los adjudicatarios finales del procedimiento de contratación. Excepcionalmente, y de manera fundada, la entidad licitante podrá no costear total o parcialmente estos gastos.

5. Diálogo Competitivo de innovación: es el procedimiento competitivo de contratación que opera cuando para dar satisfacción a una necesidad pública compleja es imprescindible realizar un diálogo o debate estructurado que permita conocer con suficiente precisión las especificaciones técnicas de bienes o servicios disímiles disponibles en el mercado y adaptarlas técnicamente para satisfacer la necesidad planteada.

Este procedimiento se desarrolla en fases sucesivas que permiten la reducción progresiva del número de proveedores o soluciones por examinar, además de ir delimitando, de forma progresiva, las condiciones específicas del bien o servicio requerido. Este procedimiento estará exceptuado de la prohibición contemplada en el artículo 35 ter, exclusivamente respecto de la comunicación entre los participantes y las personas que desempeñan funciones en el organismo licitante que participan del proceso de adjudicación.

6. Subasta Inversa Electrónica: procedimiento de compra abierto y competitivo que persigue la generación de ahorros en bienes y servicios estandarizados que no se encuentren disponibles a través de los convenios marco vigentes. Este procedimiento se desarrolla en varias etapas. En la primera de ellas, se determina, en base a los requerimientos previamente efectuados por el órgano comprador, y las propuestas presentadas por los oferentes, a aquellos que califican para participar de las rondas subsecuentes. En la segunda etapa los proveedores calificados deberán presentar en cada ronda sus ofertas sobre aspectos tales como el precio, los tiempos de despacho u otras características objetivas del bien o servicio a contratar. El reglamento indicará las circunstancias bajo las cuales puede emplearse este procedimiento.

7. Otros procedimientos especiales de contratación: son aquellos que establezca el reglamento, cuando las necesidades de compra de las entidades públicas sujetas a esta ley no puedan ser satisfechas mediante alguno de los procedimientos contemplados en el presente artículo. Para su incorporación en el reglamento, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Compras y Contratación Pública, deberán realizar una consulta pública,

de acuerdo a las normas de la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Posterior a ello, se deberá requerir el informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, según el ámbito de su competencia. En todo caso, tales procedimientos especiales de contratación deberán siempre regirse por los principios de transparencia, eficiencia, sustentabilidad, libre acceso, igualdad de los oferentes, competitividad y respeto a las demás normas establecidas en esta ley, así como promover la participación de las empresas de menor tamaño y proveedores locales.

Los procedimientos de contratación señalados en este numeral podrán ser aplicados por los organismos de la Administración del Estado, siempre que concurran los requisitos para ello. Los demás organismos del Estado sujetos a esta ley, que no pertenezcan a la Administración del Estado, podrán utilizar estos procedimientos previa evaluación de la oportunidad y conveniencia, dictando las normas correspondientes para ello.

b) En el inciso final:

i. Reemplázase la expresión “La Administración no podrá” por “Los organismos del Estado no podrán”.

ii. Agrégase la siguiente oración final: “La infracción de esta disposición tendrá como sanción la señalada en el **párrafo quinto del literal c) del artículo 8° bis**, y será aplicada en virtud del procedimiento señalado en dicha norma.”.

10. Reemplázase el artículo 8°, por el siguiente:

“Artículo 8°.- Procederá la licitación privada si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados o las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles. En tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente la contratación por trato directo.”.

11. Intercálanse los siguientes artículos 8° bis, 8° ter y 8° quáter:

Artículo 8° bis.- Procederá el Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad en los casos fundados que a continuación se señalan:

a) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio, siempre que no exista un sustituto u otra alternativa razonable

que permita satisfacer de manera similar o equivalente la necesidad pública requerida.

Para efectos de la aplicación de esta causal, el organismo del Estado deberá publicar en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, los antecedentes básicos del bien o servicio a adquirir y la identidad del proveedor. El reglamento establecerá la forma que se realizará dicha publicación.

En caso que la contratación supere las 1.000 unidades tributarias mensuales, previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo contratante deberá publicar, en una sección especial, de fácil visibilidad, en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, su intención de llevar a cabo este tipo de procedimiento, permitiendo que, dentro de un plazo de cinco días hábiles contado desde la referida publicación, otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación, de acuerdo con las condiciones establecidas en esta ley y en el reglamento. En este caso, el organismo deberá ponderar iniciar otro procedimiento de contratación, o bien, deberá explicitar las circunstancias que justifican la procedencia del referido mecanismo en un acto dictado al efecto o en la resolución que autoriza el Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad y aprueba el contrato. Esta decisión podrá ser reclamada por el proveedor que se considere afectado, a través de los recursos administrativos y/o judiciales que establece la ley, incluyendo la acción establecida en el numeral 1 del artículo 24 de la presente ley.

Bajo el monto señalado en el párrafo anterior, el organismo deberá publicar en la misma sección del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, la resolución fundada que autoriza el Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad, el texto del contrato, si lo hubiere, y la respectiva orden de compra, dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de la resolución que aprueba el contrato, la aceptación de la orden de compra o la total tramitación del contrato, según sea el caso.

b) Si no hubiere interesados para el suministro de bienes muebles o la prestación de servicios, o las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles, siempre que se hubieran concursado previamente a través de una licitación pública y una licitación privada.

c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, en que se requiera satisfacer una necesidad pública de manera impostergable, siempre que se justifique que, en caso de no realizarse la contratación en un breve plazo, se generarían graves perjuicios a las personas o al funcionamiento del Estado, calificados

mediante resolución fundada del jefe superior del organismo contratante, y que, para evitar dichos perjuicios, no pueda utilizarse otro procedimiento de contratación. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente.

En caso que las circunstancias que justifiquen la aplicación de esta causal sean imputables a la entidad pública contratante, deberán adoptarse oportunamente las medidas tendientes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondieren.

En los contratos que se suscriban justificados en esta causal, el plazo para efectuar el suministro o prestación del servicio deberá ser delimitado a los supuestos de hecho que lo fundan.

En el caso señalado en este literal, el organismo del Estado deberá publicar en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, en una sección especial destinada para estos efectos, y en la página web del organismo, la resolución fundada que autoriza el Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad, y que aprueba el contrato, si lo hubiere, y la respectiva orden de compra dentro de las 24 horas desde la dictación de la resolución, la aceptación de la orden de compra o la total tramitación del contrato, según sea el caso.

Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, la jefatura superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que pueda corresponderle de acuerdo con la legislación vigente, y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley N° 1.263, de 1975.

d) Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, determinados por ley.

En este caso, se podrá acceder a entregar la información solicitada en conformidad a las disposiciones establecidas en la ley N° 20.285.

e) Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su

experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, debiendo además estimarse fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.

Para recurrir a la causal contemplada en este literal, el producto o servicio debe ser indispensable y necesario para la continuidad del servicio y fines de la entidad contratante.

Con todo, no resultará motivo suficiente para invocar esa causal la sola circunstancia de que el proveedor a contratar sea o haya sido proveedora de la entidad licitante o que cuente con experiencia en esa entidad. Asimismo, la consideración de la experiencia debe realizarse de manera proporcional al objeto de la contratación, no debiendo en ningún caso suponer una vulneración al principio de libre competencia.

Solo podrá utilizarse esta causal para contrataciones superiores a las 1.000 unidades tributarias mensuales. Siempre previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo público deberá publicar, en una sección especial, de fácil visibilidad, en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, su intención de llevar a cabo este tipo de procedimiento, permitiendo que, dentro de un plazo de cinco días hábiles contado desde la referida publicación, otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación, de acuerdo al procedimiento y las condiciones establecidos en esta ley y el reglamento. En este caso, el organismo deberá ponderar iniciar otro procedimiento de contratación, o bien, deberá explicitar las circunstancias que justifican la procedencia del referido mecanismo en un acto dictado al efecto o en la resolución que autoriza el Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad y aprueba el contrato. Esta decisión podrá ser reclamada por el proveedor que se considere afectado, a través de los recursos administrativos y/o judiciales que establece la ley, incluyendo la acción establecida en el numeral 1 del artículo 24 de la presente ley.

En los contratos que se suscriban justificados en esta causal, el plazo para efectuar el suministro o prestación del servicio deberá ser delimitado a los supuestos de hecho que lo fundan.

Sin perjuicio de la validez del contrato, la jefatura superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación como constitutiva de la presente causal será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será aplicada conforme al artículo 35 decies de la presente ley y será compatible con las demás sanciones administrativas que

pueda corresponderle de acuerdo con la legislación vigente. El cumplimiento de la presente multa se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el Título III, del régimen de recaudación, pago y reintegro, del decreto ley N° 1.263, de 1975.

f) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características excepcionales del contrato que hagan del todo indispensable acudir a este procedimiento de contratación, según las causales establecidas en el reglamento de esta ley, los que deberán respetar siempre el principio de probidad en la contratación y el principio de transparencia y publicidad, en los términos establecidos en la ley.

Con todo, previo al establecimiento de tales causales, éstas deberán ser sometidas a consulta pública, de conformidad con la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, por un plazo no inferior a treinta días.

Las causales establecidas en el reglamento deberán encontrarse en algunas de las siguientes circunstancias:

1° Cuando se requiere la contratación de servicios o equipamiento accesorios necesarios para la ejecución de un contrato previamente adjudicado.

2° Cuando el costo de recurrir a un procedimiento competitivo para la adquisición de servicios resulta desproporcionado desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, según el umbral fijado por reglamento.

3° Cuando se requiera recurrir a un servicio cuyo proveedor requiere un alto grado de especialización en la materia objeto del contrato y siempre que se refieran a aspectos fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública, y que no puedan ser realizados por personal de la propia entidad.

4° Cuando el conocimiento público previo de la contratación pone en riesgo el objeto de esta.

Este procedimiento de contratación no requerirá la solicitud de cotizaciones previas.

En los casos señalados en los literales a), c) y e), cuando la contratación supere las 1.000 unidades tributarias mensuales, el organismo del Estado deberá acompañar a la resolución que autoriza la Contratación Excepcional Directa con Publicidad y aprueba su contrato, un informe donde se consigne efectiva y

documentadamente las circunstancias de hecho que justifican la procedencia de la causal, el que deberá ser suscrito por las unidades técnicas involucradas en el proceso de contratación y que deberá consignar las razones por las que dicha necesidad pública a satisfacer no puede ser cubierta por los bienes y servicios considerados en el plan anual de compras de la institución.

La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá monitorear el desarrollo de los procesos de compra llevados a cabo bajo estas causales, y dictar instrucciones obligatorias para los organismos de la Administración del Estado, con el objeto de velar por su correcta aplicación.

Artículo 8° ter.- En los casos en que corresponda realizar una licitación pública y no existan oferentes interesados **o las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles**, las bases que se fijaron en este procedimiento concursal deberán ser las mismas que luego se utilizarán para adjudicar en licitación privada o realizar una contratación directa. Si las bases son modificadas, deberá realizarse nuevamente una licitación pública, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8°.

Artículo 8° quáter.- El mecanismo de compra por cotización procederá cuando:

1.- Se trate de contratos que correspondan a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supere las 1.000 unidades tributarias mensuales.

2.- Se trate de convenios de prestación de servicios por celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional.

12. Reemplázase el artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°.- El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando determine que estas no se ajustan a los requerimientos señalados en las bases de licitación, la ley o el reglamento.

Asimismo, declarará inadmisibles una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí.

En este caso, el órgano contratante considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública, solo la oferta más conveniente, según se haya establecido en las bases, presentada por el grupo empresarial o las relacionadas entre sí, y declarará inadmisibles las demás.

Para estos efectos, se entenderá que dos o más oferentes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, son del mismo grupo empresarial cuando respecto de estos concurren alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Una sociedad y su controlador;
- b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último.

Para estos efectos es controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones:

1. Asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de los votos en las asambleas o reuniones de sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos, en otro tipo de sociedades,
o

2. Influir decisivamente en la administración de la sociedad. Se entiende que una persona o grupo de personas influye decisivamente en la administración de la sociedad cuando directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controla al menos el 25% del capital con derecho a voto de una sociedad o del capital de ella.

Se entenderá para efectos de la evaluación que dos o más oferentes son empresas o personas relacionadas en los siguientes casos:

- a) Entidades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cualquiera sea su calidad o estructura jurídica.
- b) Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N° 18.046.

c) Una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges, convivientes civiles o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos.

d) Una sociedad y toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones.

e) El cónyuge, conviviente civil y los parientes, ascendientes o descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

f) Todas aquellas empresas que tengan la misma persona beneficiaria final, según los términos señalados en el artículo 16 de la presente ley.

Asimismo, se declarará desierto el procedimiento de contratación, cuando no se presentaren ofertas, o cuando las ofertas presentadas no fueran convenientes a los intereses de la entidad licitante.

En todos los casos señalados en el presente artículo, la resolución del organismo del Estado deberá ser fundada.”.

13. Agrégase los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 10:

“Tratándose de licitaciones superiores a 5.000 U.T.M., la suscripción del contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la presente ley y en virtud del reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción de las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V de esta ley, se entenderán realizadas luego de las 24 horas transcurridas desde que la entidad licitante publique en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas el documento, acto o resolución objeto de la notificación.”.

14. Reemplázase el artículo 11, por el siguiente:

“Artículo 11.- La entidad licitante requerirá, excepcionalmente por razones de interés público y tratándose de licitaciones superiores a las 5.000 unidades tributarias mensuales, la constitución de garantías de seriedad, para asegurar la mantención de la oferta hasta la suscripción del contrato. Dicha garantía no excederá de un tres por ciento del monto de licitación. En los casos en que no resulte posible estimar el monto de la licitación, la garantía deberá fijarse en un monto que no desincentive la participación de oferentes.

La constitución de las garantías para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigirá en las contrataciones superiores a las 1.000 unidades tributarias mensuales y alcanzará, un cinco por ciento del precio final neto ofertado por el adjudicatario, a menos que, según lo establecido en las bases, sean declaradas como ofertas temerarias o se considere una contratación riesgosa, o bien, existan disposiciones legales particulares. En las contrataciones iguales e inferiores a las 1.000 unidades tributarias mensuales, la entidad licitante podrá fundadamente requerir la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en virtud del riesgo involucrado en la contratación, en el porcentaje previamente señalado.

Tratándose de la prestación de servicios, las garantías de cumplimiento del contrato deberán asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 17.322, y permanecerán vigentes hasta 60 días hábiles después de recepcionadas las obras o culminados los contratos.

Las garantías que se estimen necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas, el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, deberán ser fijadas en un monto tal que, sin desmedrar su finalidad, no desincentiven la participación de oferentes al llamado de licitación o propuesta. Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.

Con cargo a estas garantías podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten a los contratistas.

No obstante, atendidas las características del contrato, cuando se considere, fundadamente, que se contemplan suficientes mecanismos para resguardar el cumplimiento contractual, la

entidad licitante podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía de cumplimiento del contrato, en los siguientes casos:

a) Contratos cuyo objeto sea el suministro de bienes consumibles cuyo consumo se produjese íntegramente antes del pago del precio;

b) Contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión de personas o grupos subrepresentados en la economía, y

c) Contratos que se refieran a aspectos claves y estratégicos que busquen satisfacer el interés público o la seguridad nacional, tales como la protección de la salud pública o la defensa de los intereses del Estado de Chile ante los Tribunales Internacionales y Extranjeros.

Esta exención no será aplicable en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras.

Las garantías se constituirán en la forma y por los medios que se indique en el reglamento de la presente ley.

Sólo podrán entregarse anticipos a un contratante, si se cauciona debida e íntegramente su valor.

No obstante, la garantía a la que se refiere el inciso anterior no será necesaria tratándose de las contrataciones cuya cuantía sea inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales, o cuando hayan sido celebradas por medios electrónicos de acuerdo al artículo 12 A de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y utilizando medios de pago señalados en el artículo 1° de la ley N° 20.009 que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.”.

15. Reemplázase en el epígrafe del párrafo 3 la frase “la Administración” por “los organismos del Estado”.

16. Reemplázase el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un Plan Anual de Compras y Contrataciones, al que deberá sujetarse para realizar sus procesos de compra. El reglamento determinará los plazos para elaborar dicho plan, su

contenido mínimo y los procedimientos necesarios para su modificación.

Para elaborar su plan anual, cada institución deberá utilizar los procedimientos de contratación de conformidad al artículo 5° de esta ley y considerar las necesidades públicas a satisfacer, su plan estratégico de desarrollo, sus adquisiciones habituales, el presupuesto asignado, y criterios de sustentabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos, dentro del período presupuestario correspondiente, procurando entregar información suficiente para que los proveedores conozcan sus requerimientos.

La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá exigir la modificación de los planes anuales de compra de los organismos de la Administración del Estado, cuando estos contemplen tipos de procedimiento que contravengan lo dispuesto en la presente ley, las disposiciones del reglamento, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, o las instrucciones que haya emitido la Dirección, sin que ello pueda afectar el mérito, oportunidad y conveniencia de las decisiones de compra correspondientes a cada entidad compradora.

El Ministerio de Hacienda, a través de una resolución, establecerá una metodología para que cada institución evalúe anualmente el cumplimiento de su plan anual de compras. Estos lineamientos considerarán, al menos, los resultados de los contratos celebrados, el rendimiento de los bienes y servicios adquiridos, y el grado de satisfacción de las necesidades públicas respecto de aquellos bienes y servicios en los que se hubiere incorporado innovación.

El Plan Anual y sus modificaciones se publicarán en el Sistema de Información en los formularios electrónicos estandarizados que al efecto disponga la Dirección de Compras y Contratación Pública. Este formulario contendrá información relativa al plan respectivo, el registro de las adquisiciones realizadas, los días promedio de pago, los reclamos de proveedores a través del Sistema de Información y los recursos interpuestos en su contra ante el Tribunal de Contratación Pública.

Asimismo, la información correspondiente a las evaluaciones también deberá ser reflejada en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas y en el Registro de Proveedores, según lo establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública.

En caso de requerir la adquisición de un bien o servicio no contemplado en el Plan Anual de Compras deberá justificar

en el acto administrativo que autoriza la contratación, los motivos por los que contratará fuera de dicho plan, teniendo en consideración criterios de sustentabilidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos, costos y vida útil del bien, según corresponda.”.

17. Agrégase el siguiente artículo 12 bis:

“Artículo 12 bis.- Los organismos del Estado deberán registrar en formularios habilitados en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas una nómina con el personal que participe del procedimiento de contratación o de ejecución contractual y las funciones que cumplen en tales procedimientos. La Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público, tendrán acceso inmediato a dicha información.

El referido personal deberá velar por el correcto desarrollo del respectivo procedimiento y ser responsables de ingresar la información requerida al Sistema de Información en la forma, el formato y la oportunidad señalados por la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dichos funcionarios y funcionarias deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, en la forma dispuesta en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y actualizarla conforme a lo dispuesto en dicha ley.

Las personas contratadas a honorarios que cumplan funciones en los procedimientos de contratación y/o de ejecución contractual tendrán la calidad de agente público, para todos los efectos legales.

Cualquier contravención de las normas de la presente ley cometida por el personal que se refiere el inciso primero, será objeto de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal que puedan corresponder.”.

18. Reemplázase el artículo 13, por el siguiente:

“Artículo 13.- Los contratos regidos por la presente ley solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en las bases de licitación o el contrato.

En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes, y el equilibrio financiero del contrato. Tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 por ciento del monto originalmente pactado, siempre que el organismo del Estado cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

b) Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

El organismo del Estado estará facultado para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la orden de compra mientras dure el impedimento. Asimismo, podrá realizar una modificación a los bienes o servicios comprometidos en el contrato o la orden de compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.

Cualquier modificación de aquellas señaladas en el presente artículo, deberá aprobarse mediante acto administrativo fundado en que se consignen las razones que justifiquen las modificaciones efectuadas al contrato o la orden de compra, y publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Las modificaciones señaladas deberán respetar el equilibrio financiero del contrato y el valor de estas no podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al 30 por ciento del monto originalmente convenido entre el proveedor y el organismo del Estado, siempre que este último cuente con disponibilidad presupuestaria para ello. En ningún caso podrán aprobarse modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato u orden de compra inicial.”.

19. Agréganse los siguientes artículos 13 bis y 13 ter, nuevos, a continuación del artículo 13:

“Artículo 13 bis.- Los contratos administrativos regulados por esta ley podrán terminarse anticipadamente por las siguientes causas:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la

sociedad contratista.

b) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Las bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.

d) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 13. En tal caso, el organismo del Estado sólo pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 13 ter de esta ley.

f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

g) Las demás causales establecidas en la ley, en las respectivas bases de la licitación o en el contrato. Dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.

Los actos administrativos que dispongan tales medidas deberán ser fundados y publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Artículo 13 ter. - En caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, la entidad contratante podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen, las que deberán encontrarse previamente establecidas de forma clara e inequívoca en las bases y en el contrato, y ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento. Tratándose de multas, las bases y el contrato deberán fijar un tope máximo que no podrá

superar hasta el 30 por ciento del precio del contrato.

Las bases y el contrato deberán contemplar un procedimiento para la aplicación de las medidas contempladas, que respete los principios de contradictoriedad e impugnabilidad, debiendo siempre concederse traslado al proveedor para efectuar sus descargos.

La medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Contra la resolución que interpone la medida, el proveedor afectado podrá interponer los recursos que establezca la ley.

Con todo, la entidad contratante no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado en virtud del presente artículo, en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de la multa.

Cuando las medidas aplicadas no cubrieran los daños causados al organismo del Estado por el incumplimiento del contrato, éste estará facultado para demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios.”.

20. Reemplázanse en el inciso primero del artículo 14 los vocablos “una licitación” por la frase “un procedimiento de contratación pública”.

21. Agregáse en el artículo 15 los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“En el caso que se encuentre permitida la ejecución parcial de un contrato por parte de terceros, durante el procedimiento de contratación, dentro del plazo que fijen las bases de licitación o el reglamento, los oferentes deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o razón social del subcontratista, quien deberá ser un proveedor hábil en el registro del artículo 16, y acreditar el cumplimiento de los requisitos que el reglamento o las bases de licitación establezcan.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier modificación en las

prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el contratista principal deberá acreditar que este cumple con los requisitos señalados en el inciso anterior.

La infracción a lo establecido en los incisos precedentes facultará al organismo del Estado para imponer alguna de las medidas establecidas en el artículo 13 ter.”.

22. Reemplázase en el epígrafe del párrafo 5 la palabra “contratistas” por el término “proveedores”.

23. Reemplázase el artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- Existirá un registro electrónico oficial de proveedores del Estado, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. Asimismo, este registro deberá individualizar a los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas, y contener información sobre los contratos adjudicados, ejecutados o terminados anticipadamente, de cada miembro del registro con algún organismo del Estado, las multas o sanciones respecto de los contratos en ejecución, e inhabilidades que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 septies.

Se considera persona beneficiaria final a aquellas personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile, que:

a) Posean, directa o indirectamente, a través de sociedades u otras entidades con o sin personalidad jurídica, una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte, derecho a utilidades, o tengan derecho a voto o veto, respecto de una persona jurídica, un fondo de inversión u otra entidad sin personalidad jurídica, constituida o domiciliada en Chile, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile; o

b) Puedan elegir o hacer elegir, directa o indirectamente, a la mayoría de los directores o administradores de

dichas personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, cambiarlos o removerlos, independiente de su participación en el capital o aporte, el derecho a utilidades o el derecho a voto o veto en los términos de la letra a) de este artículo; o

c) Ejercen el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, entendiéndose por ello cualquier atribución o facultad que les permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades. El Servicio de Impuestos Internos podrá, mediante resolución, determinar casos especiales de control efectivo.

Cuando no sea posible identificar una persona beneficiaria final conforme a las reglas anteriores, se considerará como tal y deberá informarse como persona beneficiaria final a aquella persona natural que directa o indirectamente ejerza funciones de dirección o administración del obligado a reportar.

La información a que se refiere el inciso segundo y tercero del presente artículo deberá periódicamente remitirse desde las empresas que formen parte del Registro de Proveedores, en los términos que fijen la ley y sus reglamentos, con excepción de aquellos documentos que ya se encuentren en poder de la Administración.

El registro a que se refiere este artículo, así como toda la información que ha de incorporarse en él de conformidad a los incisos anteriores, será pública.

Para efectos de obtener la información sobre el cumplimiento de los contratos que se hubieren adjudicado en virtud de esta ley, la Dirección podrá solicitar a cualquier otro organismo público, información que se encuentre en su poder. En caso de tratarse de información sujeta a secreto o reserva, o haberse realizado un procedimiento de contratación en virtud de lo dispuesto en la causal señalada en el literal d) del artículo 8° bis, la Dirección deberá mantener en reserva la información obtenida.

La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá fijar las tarifas semestrales o anuales de incorporación que deberán pagar los proveedores, con el objeto de poder financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las mismas no impidan o limiten el libre e igualitario acceso de los proveedores al registro.

Los organismos públicos contratantes deberán exigir a los proveedores su inscripción en el registro de proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública y encontrarse habilitado para participar en él, para poder participar de cualquier procedimiento de contratación y suscribir los contratos definitivos.

A fin de facilitar la participación de los proveedores extranjeros en los procedimientos de contratación establecidos en la presente ley, el reglamento establecerá los requisitos y la forma de acreditar su habilidad para su incorporación en el Registro de Proveedores y el cumplimiento de las exigencias del presente artículo.

La evaluación económica, financiera y legal de los proveedores podrá ser encomendada por la Dirección de Compras y Contratación Pública a profesionales y técnicos, personas naturales o jurídicas, previa licitación pública.

No obstante lo anterior, la decisión consistente en el rechazo o aprobación de las inscripciones corresponderá a la Dirección de Compras y Contratación Pública y podrá ser reclamable en los términos establecidos en el Capítulo V.

Podrán, asimismo, existir otros registros oficiales de contratistas para órganos o servicios determinados, o para categorías de contratación que así lo requieran, los que serán exigibles para celebrar tales contratos. Dichos registros, que deberán ser siempre electrónicos, serán regulados por decreto supremo expedido por el Ministerio respectivo. Estos registros deberán ser interoperables con el formato y las características del Registro a que se refiere el inciso primero. Estos registros deberán contener la información señalada en el inciso segundo y tercero, la que será siempre pública. Los registros del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se regirán por su normativa especial contenida en su ley orgánica y reglamentos respectivos, sin perjuicio de serles aplicables lo establecido en este inciso.”.

24. Reemplázase en el artículo 17 la palabra “contratistas” por “proveedores”.

25. Reemplázase en el epígrafe del Capítulo IV la frase “de las compras y contrataciones de los organismos públicos” por la expresión “y gestión de Compras Públicas”.

26. Modifícase el artículo 18 de la siguiente forma:

a) En el inciso primero:

i. Intercálase entre el término “adjudicar” y la expresión “, solicitar el despacho” la frase “, generar las órdenes de compra asociadas”.

ii. Intercálase entre la expresión “solicitar el despacho” y el vocablo “y” la expresión “, administrar sus contratos”.

iii. Reemplázase la expresión “y contratación” por la palabra “contractual”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Las órdenes de compra señaladas en el inciso primero deberán ser emitidas por cada proceso de compra, **renovación, prórroga**, aumento de montos de un contrato, o ejecución de una opción de compra, según corresponda.”.

27. Introdúcense en el artículo 19 las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero:

i. Agrégase la expresión “y Gestión”, luego de la frase “Sistema de Información”.

ii. Reemplázase la expresión “de la Administración” por “del Estado”.

iii. Agrégase luego de la expresión “artículo 1º” la frase “, **incisos segundo, tercero y quinto,**”.

b) Agrégase en el inciso segundo, luego de “Sistema de Información”, la expresión “y Gestión”.

28. Introdúcense en el **inciso primero del** artículo 20 las siguientes modificaciones:

i. Reemplázase la frase “órganos de la Administración” por “organismos del Estado”.

ii. Intercálase la expresión “y gestión” luego de “sistemas de información”.

iii. Suprímense los vocablos “y aquella”.

iv. Intercálase, entre las expresiones “construcciones y obras,” y “todo según lo señale” la frase “órdenes de compra,”.

v. Intercálase entre la expresión “señale el reglamento” y el punto y aparte, la frase “y los actos relativos a la ejecución contractual”.

vi. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Toda la información publicada por los órganos del Estado en el sistema deberá encontrarse disponible en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas a través de formatos de datos abiertos y reutilizables. El funcionario que publique información manifiestamente errónea, u omite publicar en el sistema aquella información que, en virtud de la ley, el reglamento o las instrucciones generales de la Dirección de Compras y Contratación Pública deba publicarse, incurrirá en una infracción administrativa.”.

29. Agrégase el siguiente artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis.- En el sistema de información y gestión señalado se deberán clasificar y codificar los bienes y servicios transados a través de él, y permitir el acceso público a la información que señale el reglamento, respecto de la adquisición de cada tipo de bien o servicio, en formato de datos abiertos.”.

30. Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los organismos del Estado podrán excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecución contractual fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas establecido en el artículo 19 de esta ley, en las siguientes circunstancias:

Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al reglamento, lo cual deberá ser justificado por la entidad licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación.

Cuando en razón de caso fortuito o fuerza

mayor no sea posible efectuar, por un período mayor a 24 horas continuas, los procesos de compras a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, hasta las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contado desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.

Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, efectuadas a proveedores extranjeros en que, por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, los organismos del Estado deberán publicar en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas establecido por el Capítulo IV de esta ley todos los antecedentes de los procedimientos de contratación y de la ejecución que lleven a cabo que, de acuerdo con esta ley, el reglamento, o las instrucciones obligatorias emitidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública, deban incorporarse a este, en los plazos que señale el reglamento.

En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la entidad licitante de manera física, de acuerdo con lo que establezcan en cada caso las bases.

La fundamentación de la realización de procedimientos de contratación o ejecución contractual fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas deberá constar en una resolución fundada, sea la misma que autoriza la suscripción del contrato, u otra previa.”.

31. Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- Créase un tribunal, denominado "Tribunal de Contratación Pública", que tendrá su asiento en Santiago.

El Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional especial, que fallará conforme a derecho y estará sometido a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de conformidad con lo que establece el artículo 82 de la Constitución Política de la República.”.

32. Agréganse los siguientes artículos 22 bis, 22 ter, 22 quáter, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies y 22 octies, nuevos, a continuación del artículo 22:

“Artículo 22 bis.- El Tribunal de Contratación Pública estará integrado por seis jueces o juezas titulares y dos suplentes.

Cada integrante será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República, de una nómina de tres personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema. La Corte formará la nómina correspondiente de una lista que contendrá un mínimo de cinco y un máximo de siete nombres que, para cada cargo, le propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública con sujeción al procedimiento establecido para el nombramiento de altos directivos públicos del primer nivel jerárquico, contenido en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, con las siguientes modificaciones:

a) El Presidente del Tribunal de Contratación Pública deberá informar al Consejo de Alta Dirección Pública las vacantes que se produzcan antes del término del período de nombramiento.

b) El perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo concursado será propuesto por la Corte Suprema y aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública, con las adecuaciones que estime pertinente.

c) De no haber a lo menos cinco personas candidatas al cargo que cumplan con el nivel de idoneidad suficiente para ingresar en la nómina, el Consejo de Alta Dirección Pública ordenará que se efectúe un nuevo concurso para conformar o complementar la lista, según corresponda.

La Corte Suprema podrá rechazar todos o algunos de los nombres contenidos en la lista que se le presente. Si el número de nombres restantes fuere inferior a tres, la Corte comunicará el hecho al Consejo de Alta Dirección Pública, para que complete la nómina llamando a un nuevo concurso, en el cual no podrán participar las personas que fueron rechazadas por la Corte Suprema.

Para conformar la nómina, los y las postulantes deberán ser recibidos por el pleno de la Corte Suprema en una audiencia pública citada especialmente al efecto. La Corte establecerá la forma en que se desarrollará esta audiencia.

Los y las integrantes titulares del Tribunal de Contratación Pública deberán contar con el título de abogado o abogada otorgado por la Corte Suprema, haber ejercido la profesión por a lo menos ocho años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Contratación Pública o Derecho Administrativo.

Los y las integrantes suplentes serán designados de la misma forma que los y las titulares. Deberán contar con el título de abogado o abogada otorgado por la Corte Suprema, haber ejercido la profesión a lo menos cinco años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Contratación Pública o Derecho Administrativo.

Artículo 22 ter.- Una vez nombrados los seis jueces o juezas integrantes del Tribunal y los o las dos suplentes, todos ellos prestarán, ante el Presidente o Presidenta de la Corte Suprema, juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República en el ejercicio de sus ministerios, en audiencia especialmente celebrada para tal efecto, en la que actuará como ministro de fe el Secretario de dicha Corte.

Los jueces y las juezas del Tribunal permanecerán en el ejercicio de sus cargos por un plazo de seis años, pudiendo ser nuevamente designados, previo concurso y por un nuevo período, de la misma forma establecida en el artículo anterior. Este plazo se contará desde la fecha en que los jueces y las juezas del Tribunal presten el juramento o promesa a que se refiere el inciso anterior.

El nombramiento de los integrantes se hará por el Presidente o la Presidenta de la República mediante decreto supremo suscrito por los Ministros o Ministras de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 22 quáter.- No podrá ser elegido juez o jueza titular o suplente quien en los dos años anteriores a su nombramiento se haya desempeñado como ministro o ministra de Estado, subsecretario o subsecretaria y/o jefatura superior de un organismo público afecto a la aplicación de la presente ley.

El cargo de juez o jueza titular del Tribunal de Contratación Pública será de jornada completa, con dedicación exclusiva e incompatible con todo otro empleo, cargo, función o comisión, remunerada o no, que se ejerza en entidades privadas o públicas, sean estas últimas fiscales, municipales, fiscales autónomas o semifiscales, en empresas del Estado o en las que éste tenga participación por aportes de capital. Asimismo, será incompatible con todo cargo de elección popular.

Se exceptúan de estas incompatibilidades los empleos docentes hasta un límite máximo de doce horas semanales. Sin embargo, no se considerarán labores docentes las que correspondan a la dirección superior de una entidad académica, respecto de las cuales regirá la incompatibilidad a que se refiere esta norma. En todo caso, los jueces y las juezas deberán prolongar su jornada para compensar el tiempo que hayan restado a su trabajo con ocasión del desempeño de actividades compatibles.

Los jueces o juezas suplentes no tendrán dedicación exclusiva. Sin embargo, no podrán comparecer en ningún juicio seguido ante el Tribunal a nombre propio o como mandatario o representante legal de otra persona

Artículo 22 quinquies.- La remuneración mensual de los y las integrantes titulares del Tribunal será la suma equivalente a la remuneración bruta mensualizada de carácter permanente de la renta del Grado VI del Escalafón Superior del Poder Judicial.

Los y las integrantes suplentes, en su caso, recibirán la suma equivalente a un treintavo de la renta del Grado IV, correspondiente a Ministros de Corte de Apelaciones, por cada sesión a la que asistan.

Artículo 22 sexies.- A los jueces y las juezas titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública les son aplicables los deberes, prohibiciones e inhabilidades a que se refieren los artículos 316 a 323 ter del Párrafo 7 del Título X del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, a los jueces y las juezas suplentes no les serán aplicables las prohibiciones establecidas en los artículos 316 y 317 del mencionado Código.

Serán aplicables a los jueces o juezas titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública las causales de inhabilidad contempladas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que el juez o la jueza titular o suplente, según corresponda, estará inhabilitado cuando:

a) En una causa que deba conocer, tengan interés su cónyuge, su conviviente civil o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a este o esta, o las empresas o sociedades en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, posean directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas un porcentaje del capital de la sociedad superior al diez por ciento, o que les permita elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores, o ejerzan una influencia decisiva en la administración o gestión de la sociedad, según lo dispuesto por el artículo 99 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y

b) Haya asesorado, prestado servicios profesionales o representado judicial o extrajudicialmente a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en un procedimiento ante el Tribunal, en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de la demanda o medida prejudicial.

Igualmente, se producirá esta inhabilidad respecto de las personas naturales o jurídicas que hayan tenido la calidad de contraparte en las situaciones reguladas en el párrafo anterior.

La causal invocada podrá ser acogida de inmediato por el juez o jueza afectada. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión del o jueza implicada, aplicándose una multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales al incidentista si la implicancia, recusación, o inhabilidad fuere desestimada, por manifiesta falta de fundamento, en forma unánime.

Artículo 22 septies.- El Tribunal de Contratación Pública funcionará de forma permanente en dos salas, con tres jueces o juezas en cada una. Los jueces y las juezas titulares tendrán la obligación de asistir a su despacho por 44 horas semanales.

Los y las integrantes del Tribunal elegirán, por mayoría de votos de sus jueces titulares, a uno de sus miembros para que lo presida, por un período de dos años, pudiendo ser reelegido por igual período.

Los y las integrantes designados en calidad de suplentes ejercerán el cargo que les haya sido asignado en aquellos casos en que, por cualquier circunstancia, no sea desempeñado por el titular. Dicha suplencia no podrá extenderse por más de seis meses continuos, al término de los cuales deberá, necesariamente, proveerse el cargo con un o una titular de la manera señalada en el artículo 22 bis de esta ley, por el período de tiempo que reste para el ejercicio del mismo.

El Tribunal dictará las normas necesarias para su adecuado funcionamiento administrativo interno, velando por la eficaz expedición de los asuntos que conozca.

Artículo 22 octies.- Los jueces y las juezas del Tribunal cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación.
- b) Renuncia voluntaria.
- c) Haber cumplido los 75 años de edad.
- d) Remoción acordada por la Corte Suprema en los términos que señala el N° 3 del artículo 332 del Código Orgánico de Tribunales.
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, la que impide al juez o jueza ejercer el cargo por un período de seis meses consecutivos en un año.

Las medidas de las letras d) y e) se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente o Presidenta del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de dicha Corte.

Si la cesación en el cargo se produjere como consecuencia de las causales señaladas en las letras b), c), d) y e) y faltaren más de ciento ochenta días para el término del período de quien origina la vacancia, el reemplazante será elegido conforme al procedimiento señalado en el artículo 22 bis de esta ley, manteniéndose en el cargo por el tiempo que restare del período. Si en el mismo caso señalado, faltaren menos de ciento ochenta días para el término del

período, el reemplazo corresponderá al juez o jueza suplente de mayor antigüedad, por el tiempo que restare del período. En el resto de los casos, se aplicarán las reglas señaladas en el artículo 22 septies de esta ley.”.

33. Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- El personal del **Tribunal de Contratación Pública** se regirá por el derecho laboral común. Con todo, tendrá el mismo régimen remuneratorio, de dedicación e incompatibilidades del personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Asimismo, estos trabajadores estarán sujetos a las normas establecidas en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y al Título III de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo consignarse en los contratos respectivos una cláusula que así lo disponga. La infracción de las normas de probidad será causal del término del contrato de trabajo.

El Tribunal contratará mediante concurso público a un abogado o abogada, de su exclusiva confianza y subordinación, como Secretario Abogado o Secretaria Abogada. El o la titular de ese cargo será la jefatura administrativa y la autoridad directa del personal, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne el Tribunal. Además, tendrá el carácter de Ministro o Ministra de fe del Tribunal.

El Tribunal dictará un **reglamento interno** en base al cual el Secretario Abogado calificará anualmente al personal. En contra de dicha calificación se podrá apelar ante el Tribunal dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la notificación de la calificación.

El nombramiento de los funcionarios se hará por el Tribunal, previo concurso público. El Presidente del Tribunal cursará los nombramientos por resolución que enviará a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro. De la misma manera se procederá con todas las resoluciones relacionadas con el personal.

La dotación máxima del personal del Tribunal de Contratación Pública será de diecinueve cupos.”.

34. Agrégase el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo 23 bis.- Corresponderá a la Unidad Administradora establecida en el artículo 18 de la ley N°20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, la gestión administrativa del Tribunal de Contratación Pública.

Respecto de éste, tendrá las siguientes funciones:

1. Pago de servicios y de las remuneraciones de su personal.

2. Provisión del inmueble en que deba funcionar.

3. Abastecimiento de materiales de trabajo y mobiliario.

4. Suministro y soporte de los medios informáticos, red computacional y del sitio web correspondiente.

5. Ejecución de la administración financiera del Tribunal. A este efecto, cuando así se le requiera, podrá poner fondos a su disposición. El Tribunal deberá rendir cuenta detallada de la inversión de estos fondos ante el Jefe de la Unidad, y la Unidad deberá llevar una cuenta para este fin.

6 La organización de cursos y conferencias destinados al perfeccionamiento de los jueces y personal del Tribunal.

7. Todas las demás necesarias para su correcto funcionamiento administrativo.”.

35. Agrégase el siguiente artículo 23 ter:

“Artículo 23 ter.- Para efectos de la administración del Tribunal de Contratación Pública, la Unidad Administradora mantendrá dos cuentas bancarias a su nombre. Una de éstas se utilizará para los fines propios de la administración operativa del Tribunal de Contratación Pública, y la otra se empleará para todos los fines judiciales. La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente, en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública. Para estos efectos, el Jefe de la Unidad Administradora comunicará a la Subsecretaría de Hacienda las necesidades presupuestarias, dentro de los plazos y de acuerdo a las modalidades establecidas para los organismos de la Administración del Estado.”.

36. Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El Tribunal de Contratación Pública solo será competente para conocer:

1. De la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos durante los procedimientos de contratación con organismos del Estado afectos al régimen señalado en los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 1º.

2. De la acción de impugnación interpuesta contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos durante la ejecución de un contrato administrativo con los organismos del Estado afectos al régimen señalado en los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 1º.

3. De la acción de impugnación contra cualquier acto ilegal o arbitrario cometido por la Dirección de Compras y Contratación Pública, en los procedimientos y acciones relativas al Registro de Proveedores, contemplado en el artículo 16.

4. De la acción de nulidad contra los contratos celebrados por los órganos de la Administración del Estado, con infracción de las normas del Capítulo VII de la presente ley.

El Tribunal de Contratación Pública no será competente para conocer de las acciones civiles que emanen de los incumplimientos de los contratos administrativos suscritos en virtud de esta ley, ni de acciones indemnizatorias de ningún tipo. Notificada la demanda, la parte demandante no podrá deducir la misma pretensión ante otro tribunal.”.

37. Agréganse los siguientes artículos 24 bis y 24 ter:

“Artículo 24 bis.- El procedimiento se desarrollará a través de un sistema de tramitación electrónica, en la forma dispuesta en la ley N°20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, salvo en lo expresamente regulado en la presente ley. El expediente digital estará disponible en el sitio electrónico del Tribunal.

En casos excepcionales, cuando las circunstancias así lo requieran, se trate de una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios, o si el domicilio del interesado se encuentra ubicado fuera de la ciudad de asiento del tribunal, podrán presentarse los escritos materialmente y en soporte papel,

por medio de las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, por conducto del ministro de fe respectivo o del buzón especialmente habilitado al efecto.

Los escritos presentados en formato papel serán digitalizados por el secretario del tribunal, e ingresados a la carpeta electrónica tan pronto como sean recibidos.

Los plazos a que se refiere este título se contabilizarán en la forma dispuesta en el título VII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, salvo aquel establecido en el inciso segundo del artículo siguiente, que se contabilizará de acuerdo a las normas de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 24 ter.- La demanda mediante la cual se ejerzan las acciones señaladas en el artículo 24 podrá ser interpuesta, según corresponda, por cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés directo en el procedimiento administrativo, el contrato administrativo y/o la ejecución de este que se impugna; o en la inscripción en el Registro de Proveedores que se impugna; o en el contrato administrativo cuya nulidad se solicita.

La demanda deberá interponerse en contra del organismo que incurrió en el vicio o en los actos u omisiones ilegales o arbitrarios denunciados y, en el caso de la acción de nulidad, además, deberá interponerse en contra del tercero que se estima resultó beneficiado el vicio que se alega.

La demanda deberá deducirse dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contado desde que la parte demandante haya conocido o debido conocer de la ilegalidad, arbitrariedad o vicio que se alega. En caso de que la parte demandante, previamente, hubiere deducido en contra del mismo acto u omisión, un recurso administrativo o la reclamación administrativa regulada en el artículo 30 bis de esta ley, dicho plazo se contará a partir de la notificación del acto administrativo que puso término a dicho procedimiento administrativo, o desde la certificación de que su reclamación administrativa no ha sido resuelta dentro de plazo.

Con todo, la acción de nulidad no podrá ejercerse después de dos años contados desde que se produjo el vicio que se reclama.

La demanda deberá contener la exposición clara y determinada de las acciones u omisiones que constituyen el fundamento de su acción, las ilegalidades o arbitrariedades o vicios que

se denuncian, los actos administrativos que infringirían la presente ley si los hubiere, la identificación de las normas legales o reglamentarias que le sirven de sustento y las peticiones concretas que se someten al conocimiento del tribunal.

En el evento que la demanda no cumpla con los requisitos exigidos en el inciso anterior, el Tribunal dará un plazo de cinco días hábiles para que la parte demandante subsane dichas omisiones. Vencido el plazo anterior sin haber sido subsanadas las omisiones, el tribunal mediante resolución fundada podrá no admitir a tramitación la demanda. En todo caso, para efectos de calcular los plazos señalados en el inciso primero, la resolución que ordena subsanar las omisiones no alterará la fecha de presentación de la demanda.”.

38. Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- Admitida a tramitación la demanda, el Tribunal oficiará al organismo público demandado y ordenará notificar a los particulares demandados en caso que existieran, acompañando el texto íntegro de la demanda interpuesta, para que, en el plazo fatal de diez días hábiles, contado desde la recepción del oficio o desde la notificación, informen fundadamente sobre la materia objeto de impugnación, e informen sobre las demás materias que les consulte el tribunal, dejándose constancia de ello en el expediente electrónico. Dentro de dicho plazo el demandado podrá pedir, por una sola vez y por razones fundadas, una prórroga del mismo hasta por un máximo de cinco días hábiles.

El Tribunal podrá acceder a los antecedentes del procedimiento de contratación administrativa y/o del contrato administrativo que son objeto del juicio que se encuentren publicados en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. Si el procedimiento administrativo o una parte de este no se encuentren publicado en el referido Sistema, de considerarlo necesario para una acertada resolución del caso, el Tribunal podrá solicitar al organismo demandado que adjunte copia del expediente administrativo completo y debidamente foliado, o de los antecedentes faltantes, si lo tuvieran en su poder. Asimismo, el Tribunal podrá solicitar al organismo demandado que, bajo las mismas condiciones anteriores, adjunte copia de otros procedimientos administrativos que se consideren útiles para la adecuada solución del caso.

Asimismo, el Tribunal podrá solicitar informe a los terceros que, bajo su criterio, pudieran resultar afectados por la sentencia definitiva.

Se oficiará a la Dirección de Compras y Contratación Pública para que ésta dé a conocer, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, que en el procedimiento de contratación correspondiente se ha deducido una acción judicial o una medida prejudicial precautoria en los términos señalados en el artículo 25 bis de esta ley.”.

39. Agréganse los siguientes artículos 25 bis, 25 ter, 25 quáter, 25 quinquies, 25 sexies y 25 septies:

“Artículo 25 bis.- El Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá decretar fundadamente, en cualquier estado del juicio o antes de su iniciación, y por el plazo que estime conveniente, la suspensión del procedimiento administrativo contractual y de la suscripción o la ejecución del contrato que son objeto del juicio, con el fin de resguardar un interés jurídicamente tutelado y para impedir la consolidación de los efectos negativos de los actos, omisiones y/o vicios sometidos a su conocimiento, sin importar si las ilegalidades o vicios denunciados, ocurrieron antes o después de la suscripción del contrato administrativo.

Cuando se solicite esta medida, la parte demandante deberá acompañar antecedentes que constituyan, a lo menos, presunción grave del derecho que se reclama y de los hechos denunciados.

Adicionalmente, se deberá expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos cuando aquella solicitud se efectúe antes del inicio del juicio. Esta solicitud deberá deducirse dentro del plazo fatal de cinco días hábiles, contado desde que la parte interesada haya conocido o debido conocer de la ilegalidad, arbitrariedad o vicio que se alega. Recibida esta solicitud, el Tribunal oficiará al organismo público demandado y ordenará notificar a los particulares demandados en caso de que existieran, para que informen dentro de un plazo de siete días hábiles. Decretada la suspensión, la persona solicitante deberá presentar la demanda en el término de cinco días hábiles y pedir que se mantenga la medida decretada. Si no se deduce demanda oportunamente o no se pide en ella que continúe la suspensión decretada, por ese solo hecho, la medida quedará sin efecto y la persona solicitante será responsable de los perjuicios que la suspensión hubiera causado. La interposición de esta solicitud suspenderá los plazos señalados en el inciso tercero del artículo 24 ter.

En cualquiera de los casos, para decretar la

suspensión, el tribunal deberá ponderar las características del bien o servicio de que se trata, la continuidad de las prestaciones, las necesidades a satisfacer y los eventuales perjuicios y daños que la suspensión puede generar en las personas. La resolución que conceda o deniegue la suspensión deberá notificarse a los demandados o futuros demandados y a los terceros que, a juicio del Tribunal, puedan verse afectados por la medida.

El Tribunal podrá exigir al actor caución suficiente para responder de los perjuicios que podrían originarse. Dicha caución será obligatoria cuando la suspensión sea solicitada antes del inicio del juicio.

Si el Tribunal decreta la suspensión, desde la notificación de la resolución que así lo ordena, el organismo licitante se abstendrá de ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que sean consecuencia o que deban celebrarse con motivo del proceso de licitación. Tratándose de contratos en ejecución, se entenderán suspendidos todos los efectos jurídicos y materiales resultantes de los actos administrativos ejecutados y de las resoluciones dictadas en el desarrollo de las diversas etapas de cumplimiento del contrato sobre las que recae la suspensión.

Decretada la suspensión, el organismo demandado no podrá volver a llamar a un nuevo proceso concursal que tenga el mismo objeto que la materia de la impugnación, hasta que sea levantada esta medida. La infracción a esta prohibición será considerada, además, como una infracción al principio de probidad administrativa de parte de los funcionarios involucrados, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

En contra de la resolución que acoja o rechace una solicitud de suspensión podrá deducirse, dentro de un plazo de tres días, recurso de reposición y recurso de apelación subsidiario. En todo caso, la apelación se concederá en el solo efecto devolutivo y será conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La facultad de suspensión del procedimiento o del contrato no significará en caso alguno prejuzgar el fondo de la controversia.

Artículo 25 ter.- Si la parte demandada opusiere alguna de las excepciones establecidas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en lo no señalado por esta Ley, estas se tramitarán de conformidad a lo establecido en el Título VI del Libro Segundo de dicho Código. En todo caso, el Tribunal deberá tramitarlas y resolverlas a la brevedad posible. Sin perjuicio de lo anterior, si el

tribunal considera que las excepciones interpuestas son de lato conocimiento, podrá mandarlas a contestar y fallarlas en la sentencia definitiva.

En contra de la resolución que se pronuncia sobre las excepciones, procederá el recurso de reposición con apelación en subsidio, para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que deberá interponerse dentro del plazo de tres días. La apelación se otorgará en el solo efecto devolutivo.

Desechadas las excepciones dilatorias o subsanados por la parte demandante los defectos de que adolezca la demanda, la parte demandada tendrá un plazo de diez hábiles para contestarla contado desde la notificación de la resolución que rechaza las excepciones dilatorias o de la resolución que tiene por subsanados los vicios.

Acogidas las excepciones dilatorias, la parte demandante tendrá un plazo de diez días hábiles para subsanar los vicios.

Artículo 25 quáter.- Recibido el informe o transcurrido el plazo fatal de diez días hábiles indicado en el inciso primero del artículo 25, sin que el organismo público haya informado o el particular demandado haya contestado, el tribunal deberá certificarlo y llamar a las partes a conciliación.

La audiencia de conciliación se realizará en la fecha que fije el tribunal, para un día no anterior al quinto ni posterior al decimoquinto contado desde la fecha de notificación de la resolución que cita a la respectiva audiencia. Considerando la mencionada accesibilidad, el tribunal podrá decretar que la audiencia de conciliación se realice a través de una videoconferencia u otro medio tecnológico idóneo.

En la audiencia, el tribunal deberá proponer las bases para un posible acuerdo, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación.

Para estos efectos, los organismos y servicios públicos regidos por esta ley se entenderán facultados para conciliar, de acuerdo a las reglas y procedimientos establecidas en las leyes que los regulan. Para el caso de los organismos y servicios públicos de carácter colegiado, cuyas leyes no regulan la manera en que se ejerce la facultad de conciliar, los términos de la conciliación deberán ser ratificados por el respectivo cuerpo colegiado, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. En cualquier caso, el organismo o

servicio público demandado deberá obtener los acuerdos y/o autorizaciones señaladas en este inciso dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la celebración de la audiencia de conciliación, para lo cual, incluso los órganos colegiados podrán celebrar sesiones extraordinarias. De no obtenerse los acuerdos y/o autorizaciones dentro de los plazos señalados en este inciso, se entenderá fracasada la conciliación.

Cuando el acuerdo alcanzado en la conciliación afecte el patrimonio fiscal, los organismos del Estado regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, además, requerirán autorización previa de la Dirección de Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria, y deberán cumplir con las demás condiciones señaladas en el reglamento. Dicha autorización deberá resolverse en el plazo de quince días hábiles después de recibida la solicitud por el organismo correspondiente. Para efectos de lo anterior, la renuncia expresa a las costas del juicio en la conciliación no será considerada como una afectación al patrimonio fiscal.

Con el objeto de que los órganos públicos involucrados obtengan los acuerdos y autorizaciones mencionadas en los incisos anteriores, el Tribunal podrá ordenar la suspensión de la audiencia de conciliación por el tiempo que estime pertinente. Sin embargo, dicha suspensión no podrá exceder los 30 días hábiles.

Acordada la conciliación, el tribunal se pronunciará sobre ella dándole su aprobación, en todo aquello que no fuere contrario a derecho.

En caso de no producirse la conciliación, el tribunal examinará los autos y, si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial, pertinente y controvertido, recibirá la causa a prueba y fijará, en la misma resolución, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá recaer y las convenciones probatorias que las partes hubieren acordado.

Artículo 25 quinquies.- Una vez que la resolución que recibe la causa a prueba haya sido notificada a todas las partes, se abrirá un término probatorio común de diez días hábiles, y dentro de él deberán solicitar toda diligencia de prueba que no hubieren pedido con anterioridad a su iniciación. Si se ofreciera prueba testimonial, se deberá acompañar la lista de testigos dentro de los tres primeros días hábiles del término probatorio.

El tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica; al hacerlo deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud le asigne valor o la desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Artículo 25 sexies.- Las actuaciones probatorias, trámites, diligencias o notificaciones que por orden del tribunal hayan de practicarse fuera de la ciudad de asiento del tribunal, deberán llevarse a efecto ante el juez de letras en lo civil correspondiente, en virtud de exhorto ordenado remitir a solicitud de parte o de oficio, los cuales deberán ser remitidos, diligenciados y devueltos mediante la utilización del sistema informático.

Artículo 25 septies.- A solicitud de parte o interesado, el tribunal podrá autorizar la comparecencia remota de las partes o de terceros y la celebración por videoconferencia de audiencias judiciales, incluida la absolución de posiciones y la declaración de testigos. Para efectos de lo anterior, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil, en todo lo que sea aplicable al presente procedimiento.”.

40. Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- A partir de la recepción de la causa a prueba, el tribunal podrá decretar de oficio, para mejor resolver, cualquier diligencia probatoria encaminada a comprobar los hechos controvertidos. Estas medidas deberán cumplirse en el plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que las decreta. En todo caso, serán decretadas y cumplidas con anterioridad al vencimiento del término para dictar sentencia.

Vencido el término probatorio, el Tribunal citará a las partes a oír sentencia.”.

41. Agréganse los siguientes artículos 26 bis, 26 ter, 26 quáter, 26 quinquies, 26 sexies y 26 septies:

“Artículo 26 bis.- Los incidentes que se promuevan en el juicio se substanciarán en ramo separado y podrán ser resueltos de plano por el tribunal, a menos que, por razones fundadas, de las cuales dejará constancia, el tribunal estime necesario escuchar

previamente a la parte contraria. En este caso, si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibirá el incidente a prueba la que no será susceptible de recurso alguno. La prueba se propondrá y producirá junto con la de la causa principal, salvo que el tribunal determine convocar a audiencias especiales para recibir la prueba y las alegaciones del incidente.

Artículo 26 ter.- Las resoluciones que dicte el Tribunal se entenderán notificadas a las partes, desde que se incluyan en un estado que deberá formarse electrónicamente, el que estará disponible diariamente en la página web del Tribunal. El estado contendrá las indicaciones que se señalan en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, la resolución que ordena la comparecencia personal de las partes, la que recibe la causa a prueba, las resoluciones que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación y la sentencia definitiva, se notificarán a las partes mediante la remisión por correo electrónico, debiendo el tribunal remitir copia íntegra de estas.

En cualquier caso, la notificación por correo electrónico se entenderá practicada al día hábil siguiente de la fecha de su remisión por parte del tribunal, de lo que se dejará constancia en el referido correo electrónico y en el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.

Para efectos de las notificaciones a que se refieren los incisos anteriores, las partes deberán designar, en su primera gestión, una dirección de correo electrónico válida, y esta designación se considerará subsistente mientras no designen otra. Si se omite efectuar esta designación, el Tribunal dispondrá que ella se realice en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que estas notificaciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero.

La notificación de resoluciones a terceros se realizará por medios electrónicos, previa información de la parte interesada sobre el correo electrónico válido al que debe dirigirse la notificación. Si se indica fundadamente no conocer un correo electrónico, la parte interesada deberá informar su domicilio. En estos casos, la notificación se efectuará mediante una carta certificada, la que se entenderá practicada al quinto día contado desde a su recepción en la oficina de correos que corresponda. Asimismo, el Tribunal ordenará al tercero a informar de un correo electrónico válido para las futuras

notificaciones, bajo sanción de tenerlo por notificado mediante la publicación a la que alude el inciso primero.

Tratándose de la notificación de la demanda a organismos del Estado, ésta deberá efectuarse mediante oficio, en la forma indicada en el inciso primero del artículo 25 de esta Ley. Tratándose de particulares, la demanda deberá ser notificada personalmente, y en caso de no ser habido en una oportunidad, se procederá a su notificación por cédula.

Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque la parte manifestara expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causa calificada que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, de manera excepcional, el tribunal deberá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes sean notificadas personalmente, por cédula o por carta certificada. Sólo para efectos de lo anterior, el tribunal podrá designar a un funcionario que, en calidad de receptor ad-hoc, realice la diligencia de notificación personal y/o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, esta se entenderá practicada al tercer día contado desde su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Artículo 26 quáter.- La sentencia definitiva deberá dictarse en el plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha de la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciará **fundadamente** sobre la legalidad o arbitrariedad del acto u omisión **respecto del cual se dedujo la acción de impugnación o del vicio en que se fundó la nulidad** y ordenará, en su caso, las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Artículo 26 quinquies.- En contra de la sentencia definitiva podrá deducirse ante el tribunal un recurso de **apelación**, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación de la misma, el que será conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago. La **apelación** se concederá con el sólo efecto devolutivo.

El recurso de **apelación** se verá en cuenta, sin oír alegatos, salvo que la Corte así lo acuerde, a solicitud de cualquiera de las partes. La causa será agregada en forma extraordinaria a la tabla. No procederá la suspensión de la vista de la causa por el motivo establecido en el numeral 5° del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, el tribunal de alzada podrá decretar, fundadamente, orden de no innovar por un plazo de hasta treinta días hábiles, renovable.

La resolución que falle el recurso de **apelación** deberá pronunciarse, a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que la causa se haya visto o haya quedado en acuerdo. En su contra no procederá recurso alguno.

Artículo 26 sexies.- Los autos y decretos dictados por el Tribunal serán siempre susceptibles de recurso de reposición, el que deberá ser interpuesto dentro de cinco días contados desde la notificación de la resolución.

Las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y las demás sentencias interlocutorias que expresamente señala esta ley, también serán susceptibles de recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de tercer día desde su notificación. En contra de dichas resoluciones también procederá la apelación, la que sólo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea acogida. La apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo.

Siempre el tribunal podrá pronunciarse de plano sobre la reposición o tramitarla como incidente.

Artículo 26 septies.- Cuando por sentencia firme y ejecutoriada se hubiere dado lugar a alguna de las acciones de impugnación o de nulidad señaladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 24, la parte interesada podrá interponer ante el tribunal ordinario de justicia competente en su domicilio o en el domicilio del Tribunal de Contratación Pública, demanda de indemnización de perjuicios, la que se tramitará conforme a las reglas del juicio sumario. En dicho procedimiento, no podrá discutirse la ilegalidad arbitrariedad y/o nulidad ya declarada por el Tribunal de Contratación Pública.

La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en seis meses, contados desde la fecha en se encuentre firme la sentencia a que hace alusión el inciso primero.

En todo caso, **la interposición de la referida demanda de indemnización de perjuicios** no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al funcionario que produjo el perjuicio, y, cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para repetir en su contra.”.

42. Modifícase el artículo 27 de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “La

acción de impugnación se tramitará” por la frase “Las acciones a que se refiere el artículo 24 se tramitarán”.

b) Agrégase un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso de las competencias ejercidas en relación con los contratos señalados en la letra e) del artículo 3º, la prueba se apreciará de acuerdo a las reglas de la prueba legal tasada, en conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil mencionadas en el inciso anterior.”.

43. Modifícase el artículo 30 de la siguiente forma:

a) En el inciso primero:

i. Suprímese en el literal c) la expresión “contratistas y”.

ii. Modifícase el literal d) como sigue:

- Sustitúyese en el párrafo primero, la palabra “adjudicado” por “seleccionado”.

- Reemplázase el párrafo tercero por el siguiente:

“Los contratos tipo contenidos en las bases de licitación de Convenio Marco se entenderán perfeccionados una vez notificada la adjudicación respectiva a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, correspondiendo al adjudicatario actualizar en el Registro de Proveedores del Estado sus antecedentes legales y acompañar los demás documentos requeridos por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”.

b) Reemplázase en el literal e) la expresión “la licitación de bienes o servicios” por la frase “procedimientos señalados en el literal a), y numerales 3, 5, 6 y 7 del literal d) del artículo 7º”.

c) Suprímese en el literal f) la frase “Contratistas y”.

d) Intercálase en el literal g), entre la expresión “cantidad de oferentes” y el punto y seguido, la frase “, y monitorear su materialización en los procedimientos de contratación pública”.

e) Agréganse los siguientes literales i), j), k), l),

m), n), ñ), o), p), q), r) y s):

i) Proponer al Ministerio de Hacienda políticas públicas sobre las compras y contrataciones regidas por esta ley, que promuevan la eficiencia, la transparencia, la probidad, la competitividad, **la sustentabilidad** y buenas prácticas en ellas.

j) Impartir instrucciones obligatorias, de general aplicación, conducentes a fortalecer la probidad, la transparencia, la eficiencia, **la sustentabilidad** y la competitividad en los procesos de contratación pública de los organismos de la Administración del Estado señalados en el inciso **segundo** del artículo 1. **Igualmente, a través de sus instrucciones, regulará la correcta aplicación de los procedimientos de contratación establecidos en el artículo 7° de la presente ley.**

Estas instrucciones no serán obligatorias para las municipalidades, sin perjuicio de que éstas puedan adherir voluntariamente a ellas.

A través de dichas instrucciones, podrá determinar los mecanismos de contratación aplicables a tipos de bienes o servicios determinados, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5° y siguientes.

Con todo, previo a la dictación de la resolución que aprueba dichas instrucciones, deberá someterlas a consulta pública, por un plazo no inferior a treinta días.

Las resoluciones que aprueben las referidas instrucciones deberán ser sometidas al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República.

k) Solicitar información a los organismos públicos regidos por esta ley, para efectos de lo señalado **en los artículos 30 bis y 30 ter**, sobre sus compras y ventas de bienes muebles, servicios u obras realizados a través del Sistema de Compras Públicas, así como sobre su consumo de bienes y servicios.

l) **Apoyar la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública, en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y sus servicios dependientes o relacionados.**

m) Establecer los medios que permitan la enajenación y el traspaso de bienes muebles entre organismos de la Administración del Estado, bajo los requisitos, condiciones y el procedimiento establecido en el reglamento, y llevar a cabo dicho procedimiento, por sí, o en representación de otros organismos públicos, cuando corresponda.

n) Solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o a otros organismos públicos o privados, la información que considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones.

ñ) Denunciar ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional Económica, según corresponda, los hechos que eventualmente pudiesen constituir delitos, faltas a la probidad o infracciones a la libre competencia, **respectivamente**.

o) Administrar, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, una plataforma para recibir reclamos, denuncias u observaciones del público, respecto de los procedimientos de contratación pública que se lleven a cabo en virtud de las normas de la presente ley, o la ejecución de los contratos que en virtud de estos procedimientos se celebren, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 30 bis.

p) Hacer seguimiento al desarrollo y ejecución de los procesos de contratación pública y ejecución contractual señalados en el reglamento, con el objeto de promover mejoras en el sistema de contratación pública.

q) Poner a disposición de los organismos del Estado, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, bases y contratos tipo, contratos modulares, elaborar cláusulas de común aplicación contractual y, en general, realizar acciones que tengan por objeto facilitar la elaboración, suscripción e interpretación de los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios que deben suscribir los órganos del Estado.

r) Hacer seguimiento a los procedimientos de contratación llevados a cabo por parte de los organismos públicos sujetos a la aplicación de esta ley, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, para efectos de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable por parte de la entidad compradora.

En el ejercicio de esta facultad, y en caso de que tomare conocimiento de eventuales infracciones a la presente ley, podrá oficiar a los organismos públicos para que se refieran sobre el particular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 ter.

s) Monitorear las adquisiciones de bienes y servicios, en especial aquellas llevadas a cabo a través del procedimiento de Trato Directo o la Contratación Excepcional Directa

con Publicidad. En el ejercicio de esta facultad deberá velar por el cumplimiento de las instrucciones que imparta de conformidad con el literal j) del presente artículo.

Durante el mes de marzo de cada año, la Dirección de Compras y Contratación Pública deberá enviar un informe detallado a las comisiones de Hacienda y de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, que dé cuenta del funcionamiento del sistema de compras públicas durante el año anterior, considerando especialmente las transacciones llevadas a cabo por empresas de menor tamaño.

Igualmente, dentro del mismo plazo, la Contraloría General de la República deberá enviar un informe a las comisiones de Hacienda y de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, con las principales observaciones detectadas en la aplicación de la presente ley.

f) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Las facultades y funciones antedichas serán sin perjuicio de aquellas que corresponden a la Contraloría General de la República.”.

44. Agréganse los siguientes artículos 30 bis y 30 ter, nuevos:

“Artículo 30 bis.- Cualquier persona interesada, natural o jurídica, podrá deducir una reclamación administrativa, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, contra las acciones u omisiones ilegales que se hayan cometido durante un procedimiento de contratación administrativa o en la ejecución un contrato administrativo, regulados por esta ley.

Este reclamo deberá entablarse, mediante la mencionada plataforma, ante el organismo que dictó el acto o incurrió en la omisión denunciada, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde que se haya notificado el acto impugnado o desde que la parte interesada haya conocido o debido conocer de la ilegalidad que alega. Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer las acciones jurisdiccionales establecidas en el artículo 24.

El organismo reclamado deberá responder al solicitante, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, dentro de cinco hábiles contados desde el ingreso del reclamo.

Si los reclamos tratan de acciones u omisiones que pueden ser constitutivos de faltas a la probidad, delitos o infracciones a la libre competencia, la Dirección de Compras y Contratación Pública remitirá, en un plazo de tres días hábiles, los antecedentes al Ministerio Público o a la Fiscalía Nacional Económica, según corresponda.

En el caso de que, a partir de los reclamos señalados en los incisos anteriores, previo análisis de la respuesta del organismo reclamado, la Dirección de Compras y Contratación Pública determinare que existen indicios de acciones u omisiones ilegales y arbitrarias de parte de organismos de la Administración del Estado, o faltas a la probidad durante un procedimiento de contratación administrativa, remitirá, en el plazo de cinco días, los antecedentes a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de lo señalado en el artículo siguiente.

Artículo 30 ter.- En caso de que, a partir de una denuncia reservada, o del monitoreo de procesos de compra, en el ejercicio de sus funciones establecidas en las letras p), r) y s) del artículo 30 de esta ley, la Dirección de Compras y Contratación Pública determinare que existen indicios de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias por infracción de las normas de la presente ley durante un procedimiento de contratación administrativa, ya sea por los organismos de la Administración del Estado o por los demás organismos del Estado que utilicen dicho sistema, deberá oficiar al respectivo organismo para que, en el plazo de cinco días hábiles contado desde la recepción del oficio, informe sobre las medidas que adoptará para subsanar los vicios existentes en el procedimiento de contratación, si es que los hubiere.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior, sin que se haya obtenido respuesta del organismo requerido o si a juicio de la Dirección de Compras y Contratación Pública la infracción de alguna de las normas señaladas en dicho inciso no se hubiere subsanado, oficiará, en el plazo de cinco días, a la Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, realice las acciones que en derecho correspondan.

Asimismo, si las irregularidades observadas tratan de acciones u omisiones que pueden ser constitutivos de delitos o infracciones a la libre competencia, la Dirección de Compras y Contratación Pública remitirá, en el plazo de tres días hábiles, los antecedentes al Ministerio Público o a la Fiscalía Nacional Económica, según corresponda.”.

45. Créase 1 cargo, Técnico Informático, grado 13 de la Escala de Fiscalizadores, en la planta de Técnicos de la Dirección de Compras y Contratación Pública, contenida en el artículo 33 de la ley N° 19.886.

46. Agrégase el siguiente artículo 33 bis:

“Artículo 33 bis.- Todos los funcionarios directivos y profesionales del Servicio, cualquiera sea la calidad jurídica en la que presten servicios, y el personal contratado a honorarios, deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, en la forma dispuesta en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y actualizarla conforme a lo dispuesto en dicha norma.”.

47. Suprímese el inciso primero del artículo 34.

48. Agrégase un Capítulo VII, nuevo, sobre probidad administrativa y transparencia en la contratación pública, a continuación del artículo 35, del siguiente tenor:

“CAPITULO VII

De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública

Artículo 35 bis.- Una vez determinada la necesidad de adquirir bienes o servicios, se iniciará el proceso de preparación de la contratación administrativa.

Previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación pública, el organismo del Estado estará obligado a consultar el Catálogo de Convenio Marco antes de proceder a llamar a una Licitación Pública, Licitación Privada, Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad u otro procedimiento especial de contratación.

Una vez verificada la indisponibilidad del bien o servicio, o que mediante otro procedimiento de contratación pueden obtenerse mejores condiciones, el organismo del Estado deberá determinar el tipo de procedimiento adecuado para realizar la contratación administrativa, así como también elaborar las bases de licitación en los casos que corresponda. Para lo anterior, deberá seguir las disposiciones establecidas en la ley, el reglamento o las instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública cuando ello corresponda o, en su caso, las normas especiales que rijan

el respectivo procedimiento de contratación. Con todo, los organismos del Estado que adjudiquen contratos según lo contemplado en este inciso deberán garantizar la igualdad de los oferentes, la libre competencia y la desconcentración de adjudicaciones, y promoverán la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación.

En las adquisiciones y contrataciones complejas y en aquellas por sobre los montos que determine el reglamento, los organismos del Estado deberán previamente obtener y analizar información acerca de las características técnicas de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los costos asociados, considerando el ciclo de vida útil del bien a adquirir, o de cualquier otra característica relevante que requieran.

Si para ello es indispensable hacer consultas a terceros ajenos a los organismos del Estado, éstas deberán efectuarse mediante una consulta pública a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. Excepcionalmente, y en caso de que no se obtenga la información necesaria para efectuar la contratación por medio del sistema correspondiente, las entidades contratantes podrán obtener directamente sus cotizaciones a través de correos electrónicos, sitios web, catálogos electrónicos, listas o comparadores de precios por internet, u otros medios similares, de lo que deberá quedar registro en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Sólo cuando sea imprescindible, considerando el tipo de bien o servicio por adquirir, podrán realizarse reuniones presenciales o virtuales entre funcionarios de un organismo comprador y los potenciales proveedores, con el fin de obtener información sobre dicho bien o servicio. De todas las actuaciones señaladas en este inciso deberá quedar registro en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. En dicho caso, se deberá cumplir con lo dispuesto en la ley N° 20.730 que Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Sin perjuicio de lo anterior, los organismos de la Administración del Estado, previo a efectuar cualquier adquisición, deberán consultar, en el medio que para ello disponga la Dirección de Compras y Contratación Pública, si existen bienes que sean de propiedad de otros organismos del Estado o servicios compartidos, que les permitan satisfacer la necesidad requerida. El reglamento podrá eximir del procedimiento de consulta cuando el bien requerido o servicio, por su naturaleza, no pueda ser reutilizado o compartido y, en general, no se produzcan excedentes de ellos, o bien, su valor comercial no supere el monto mínimo allí señalado.

Las bases de licitación, en los casos que corresponda, deberán describir los bienes o servicios por contratar, sin que, de manera arbitraria, se privilegie a determinados productos o servicios por sobre otros que permiten satisfacer la necesidad del organismo del Estado, de manera equivalente.

Artículo 35 ter.- Una vez iniciado el procedimiento de contratación, se prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación **e igualdad** de todos los oferentes.

Artículo 35 quáter.- Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley

N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, de acuerdo a lo señalado por el jefe de servicio, los organismos del Estado podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados, en el caso de los órganos de la Administración del Estado. En el caso del Congreso Nacional, la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.

Artículo 35 quinquies.- Las autoridades y los funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, deberán abstenerse de intervenir en procedimientos de contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés.

Son motivos de abstención los siguientes:

1. Tener interés en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas. En este caso, se considerará que existe un interés personal también cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común.

2. Incurrir en alguno de los motivos de abstención a que se refiere el artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la Administración del Estado. En este caso, se considerará que existe un interés personal también cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común.

3. Haberse desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o entidades respecto de las

cuales deba tomarse una decisión. Se entenderán también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045.

4. Haber emitido opinión, por cualquier medio, sobre un procedimiento de contratación en curso y cuya resolución se encuentre pendiente.

5. Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Artículo 35 sexies.- Los contratos celebrados con infracción de lo dispuesto en el presente Capítulo serán nulos. **El personal al que se refiere el artículo 12 bis** que hayan participado en su tramitación incurrirán en contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso primero del artículo 62 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá implementar un canal reservado para recibir denuncias sobre irregularidades en los procedimientos de contratación regidos por la presente ley.

Artículo 35 septies.- Sin perjuicio de las causales de inhabilidad para formar parte del Registro de Proveedores establecidas en virtud del artículo 17, podrán quedar inhabilitados del referido Registro las siguientes personas:

a) Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.

b) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

c) Quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

d) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Título Quinto, Párrafo IX del Libro Segundo del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N° 18.314.

Para efectos de lo anterior, la Dirección de Compras y Contratación Pública declarará inhábiles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas inelegibles para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales.

e) El proveedor que ha informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación.

Para efectos de la aplicación de esta causal, en caso de que la Dirección tome conocimiento de que el proveedor ha presentado información en los términos descritos, deberá notificarlo, otorgándole un plazo de 10 días para subsanar el vicio. En caso que la información requerida no sea enmendada dentro de dicho plazo, procederá la aplicación de la inhabilidad para participar en el Registro.

En los casos señalados en los literales a) y d), en la demanda o querrela se podrá solicitar, además, que se extienda la inhabilidad en el Registro de Proveedores a las personas jurídicas en las que el condenado participe como socio o accionistas, titular de al menos el 10% de las acciones o derechos sociales, o como beneficiario final.

Respecto de la causal señalada en el literal b), en la demanda se podrá solicitar también que la inhabilidad del Registro se extienda a otras personas jurídicas que tengan un objeto similar al del demandado, e iguales socios, accionistas o beneficiarios finales, así como también, a sus beneficiarios finales, en cuanto personas naturales.

Tratándose de los casos señalados en el literal c), en la demanda se podrá solicitar la inhabilidad respecto de las personas jurídicas que hayan sido consideradas por sentencia firme y

ejecutoriada como un solo empleador con el condenado, para efectos laborales y previsionales conforme al inciso cuarto del artículo 3° del Código del Trabajo, sea que se encuentren o no inscritas en el Registro.

La inhabilidad en el Registro de Proveedores será aplicable cada vez que se configure la ocurrencia de las circunstancias reguladas en los literales a), b), c), d) o e) de este artículo.

La inhabilidad se podrá aplicar por hasta dos años contados desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia respectiva, salvo en el caso del literal d), en que se extenderá por el tiempo que dure la pena de inhabilitación establecida en el artículo 251 quáter del Código Penal, o, en su caso, la condena.

Para efectos de determinar la duración de la inhabilidad, el juez deberá considerar, especialmente en los fundamentos de su sentencia, el bien jurídico o derecho vulnerado, la magnitud de la infracción en consideración a los terceros afectados, la reiteración de la conducta denunciada, el interés público afectado y la proporcionalidad del probable efecto económico que tendría su aplicación en consideración a la conducta denunciada, tanto respecto de quien haya sido directamente inhabilitado, como de todos aquellos a quienes se les extienda la inhabilidad, en virtud de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto de este artículo.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en los casos en que la sanción de inhabilidad del Registro de Proveedores pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, o fuere perjudicial para el Estado, el tribunal no aplicará esta sanción. Para la determinación del interés público afectado o las consecuencias económicas que la inhabilidad pudiera provocar a la comunidad o al Estado, el tribunal deberá solicitar a la Dirección de Compras y Contratación Pública su opinión fundada.

Una vez aplicada la inhabilidad en el Registro de Proveedores, el tribunal comunicará este hecho a la Dirección de Compras y Contratación Pública, y le remitirá copia del respectivo fallo.

Cuando la Dirección de Compras y Contratación Pública tome conocimiento de alguna de las circunstancias señaladas en el presente artículo, dictará una resolución por la cual aplicará la inhabilidad en el Registro de Proveedores al proveedor que hubiere sido condenado, o rechazará su ingreso a él, en su caso, lo que le será notificado. Contra la presente resolución, el proveedor afectado podrá interponer los recursos que establezca la ley.

Artículo 35 octies.- Lo señalado en el artículo anterior se aplicará al Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas, a los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a todos los demás registros que tengan por objeto inscribir a personas naturales o jurídicas, para el suministro de bienes muebles, la ejecución de obras, o la prestación de servicios a organismos del Estado, según las reglas que se explicitan a continuación.

Para llevar a cabo la inhabilidad señalada en el artículo anterior, tratándose de otros registros electrónicos, distintos de aquel establecido por el artículo 16, una vez que el organismo del Estado a cargo de administrar el respectivo registro tome conocimiento de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dictará una resolución por la cual declarará la inhabilidad en el registro al proveedor que hubiere sido condenado en virtud de lo señalado en ese artículo, lo que será notificado al proveedor. La sanción de inhabilidad del respectivo registro podrá ser impugnada por el proveedor ante el organismo administrativo o jurisdiccional competente, según corresponda.

En caso de que las causales contenidas en el artículo anterior sean equivalentes a aquellas sanciones contempladas en los registros especiales, estas deberán ser aplicadas en conformidad a su normativa especial.

En los contratos de concesión de obra pública solo les será aplicable lo dispuesto en las letras a) y d) del artículo 35 septies. Para esos efectos, en lugar de la inhabilidad en el Registro de Proveedores, procederá una inhabilidad para participar en licitaciones de obra pública de concesión por un plazo máximo de dos años, en procesos de precalificación de proyectos por el mismo tiempo y, cuando corresponda, la exclusión en la etapa de precalificación para una obra en particular.

Artículo 35 nonies.- Toda persona que tenga por función calificar o evaluar procesos de licitación pública o privada deberá suscribir una declaración jurada, por cada procedimiento de contratación, en la que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre el mismo.

Asimismo, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones señaladas en el inciso anterior, tendrá la calidad de agente público, por lo que estará sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Artículo 35 decies.- Cuando tome conocimiento de hechos que puedan constituir infracciones a la presente ley, la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, podrá ordenar a la autoridad dotada de potestad disciplinaria dar inicio a los procedimientos que correspondan, o incoar directamente procedimientos disciplinarios, con arreglo a lo establecido en el Título VIII de la ley N° 10.336, de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado en el decreto supremo N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda.

Si la Contraloría General de la República incoare directamente un procedimiento disciplinario, deberá proponer a la autoridad que tenga la potestad disciplinaria las sanciones que, en definitiva, estime procedentes, o la absolución de los funcionarios o agentes públicos involucrados. Establecida la responsabilidad disciplinaria por la Contraloría, la autoridad administrativa correspondiente podrá imponer una sanción distinta de la propuesta sólo si lo efectúa mediante resolución fundada que la justifique.

El acto administrativo que imponga la sanción deberá dictarse dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde que se hubiere tomado conocimiento del acto dictado por la Contraloría que aprueba el sumario y propone a la autoridad competente las respectivas sanciones que estime procedentes. La infracción del Jefe de Servicio a lo dispuesto en este inciso será sancionada con censura o multa de hasta el 50 por ciento de su remuneración, la que será aplicada por la Contraloría, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo.

En todo caso, la Contraloría General de la República podrá ejercer las restantes atribuciones que le reconoce el ordenamiento jurídico.

Si del estudio de los antecedentes apareciere que los hechos revisten caracteres de delito, la Contraloría deberá denunciar dichos hechos ante el Ministerio Público. Asimismo, en caso de estimar que los hechos materia de la investigación tienen el carácter de infracciones que puedan generar responsabilidades administrativas distintas de la disciplinaria, de competencia de otra autoridad de fiscalización o control, la Contraloría deberá denunciar dichos hechos a los órganos respectivos, a objeto de que éstos se avoquen al conocimiento de estas materias dentro del ámbito de sus competencias.”.

49. Agrégase un Capítulo VIII, a continuación

del capítulo VII, nuevo, del siguiente tenor:

**“Capítulo VIII
Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad**

Artículo 40.- Créase el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad.

Artículo 41.- Este Comité tendrá como función principal asesorar al Estado y a la Dirección de Compras y Contratación Pública en las compras públicas de innovación, que involucran procesos de investigación y desarrollo, así como en la determinación de aquellas necesidades públicas que podrían ser satisfechas a través de bienes o servicios que incorporen innovación o criterios de sustentabilidad, por parte de los organismos de la Administración del Estado, durante el año calendario siguiente, y evaluar el funcionamiento y resultado de los procedimientos especiales contemplados en los números 4° y 5° de la letra d) del artículo 7° de la presente ley, la incorporación de sustentabilidad en los bienes y servicios que adquirió el Estado, y el funcionamiento de la Ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado, durante los años anteriores. En cumplimiento de esta función el Comité podrá sugerir a la Dirección de Compras y Contratación Pública la dictación de instrucciones en los términos de la letra j) del artículo 30 de la presente ley.

Con todo, respecto a las materias de compras de innovación, las funciones de este Comité considerarán el contenido de la Política de Compra Pública de Innovación.

Artículo 42.- El Comité será presidido por el Subsecretario o la Subsecretaria de Hacienda y estará integrado también por los Subsecretarios o las Subsecretarias de Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Medio Ambiente y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o quien les represente y, además, por cuatro miembros, que serán personas calificadas, con conocimientos y/o experiencia de al menos cinco años, en materias de economía, investigación, desarrollo e/o innovación, emprendimiento, sustentabilidad, contratación pública o derecho administrativo, designados por el Subsecretario o la Subsecretaria de Hacienda, con acuerdo de los Subsecretarios y las Subsecretarias de Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Medio Ambiente y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación o sus representantes. El Director o la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública actuará como secretario técnico o secretaria técnica del Comité.

Sus integrantes no percibirán dieta.

Artículo 43.- El Comité celebrará sesiones cuando lo convoque su presidente o presidenta.

El quórum para sesionar será de la mayoría de sus integrantes, y sus acuerdos, que serán vinculantes para el Comité, se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, dejando constancia en acta en caso de existir votos de minoría o empate. Con todo, ante este último caso se estará a la decisión del presidente o de la presidenta del Comité.

El Comité deberá aprobar por acuerdo las demás normas necesarias para su funcionamiento, considerando, entre ellas, la periodicidad de sus sesiones.

Los organismos de la Administración del Estado y sus funcionarios, así como la Dirección de Compras y Contratación Pública, deberán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, la colaboración que el Comité requiera para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 44.- El Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo elaborarán, con una periodicidad bienal, una Política de Compra Pública de Innovación. Esta política deberá incluir, al menos, lineamientos sobre las áreas dentro del Estado donde fomentar la compra pública de innovación, objetivos e indicadores de resultados, y un plan de acción para el desarrollo de las capacidades públicas necesarias para implementar la compra pública de innovación de manera efectiva, así como guías o mecanismos para incentivar, facilitar y establecer estándares para la realización de este tipo de adquisiciones.

Los procedimientos especiales contemplados en los números 4° y 5° de la letra d) del artículo 7° de la presente ley, deberán ajustarse al contenido de la Política de Compra Pública de Innovación.

El Comité deberá aprobar por mayoría absoluta la Política de Compra Pública de Innovación durante el último trimestre del año que corresponda. Con todo, con anterioridad a la votación, se deberá presentar una versión preliminar de dicha política al Comité, con el objeto de recibir comentarios y sugerencias. Una vez aprobada, la Política deberá ser informada a las Comisiones de Economía de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Artículo 45.- Adicionalmente, el Comité emitirá

anualmente un informe que evalúe el resultado de las compras de innovación, la aplicación de criterios de sustentabilidad y el funcionamiento de la Ley sobre la economía circular, todo ello en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado, el que deberá ser remitido a las Comisiones de Economía de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Artículo 46.- Los miembros del Comité en el desempeño de sus funciones estarán sujetos a las normas del capítulo VII de la presente ley.

En virtud de lo anterior, deberán abstenerse de participar o intervenir en procedimientos de contratación pública o ejecución contractual en que puedan tener interés, entre ellos, aquellos referidos a los procedimientos especiales contemplados en los números 4° y 5° de la letra d) del artículo 7° de la presente ley y los referidos a la Ley sobre la economía circular. A estos les serán aplicables las causales de abstención establecidas en el artículo 35 quinquies de la presente ley.”.

50. Agrégase un Capítulo IX, nuevo, a continuación del Capítulo VIII, del siguiente tenor:

“Capítulo IX

De la promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el Sistema de Compras Públicas

Párrafo 1

Disposiciones generales

Artículo 47.- La Dirección de Compras y Contratación Pública tendrá dentro de sus funciones la de promover la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública, en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Los organismos del Estado promoverán la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública con el objeto de fortalecer su competitividad y su participación en el sistema de compras públicas. Igualmente, promoverán la participación de proveedores locales y de empresas de menor tamaño que sean lideradas por mujeres. Todo lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

Para los efectos de esta ley, se estará a la definición de micro, pequeña y mediana empresa y empresa de menor

tamaño del artículo segundo de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño. Dentro de esta clasificación serán consideradas aquellas cooperativas que, de conformidad con el decreto con fuerza de ley N°5 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, cumplan con los requisitos para ser empresas de menor tamaño de acuerdo con la referida ley N° 20.416.

No será considerada como una empresa de menor tamaño aquella que pertenezca a un grupo empresarial, definido de acuerdo con el artículo 9 de la presente ley, en el que la sociedad controladora no sea una empresa de menor tamaño. Lo anterior deberá ser acreditado de la forma establecida en el reglamento, de acuerdo con la información de persona beneficiaria final que se encuentre en el Registro de Proveedores al que se refiere el artículo 16 de la presente ley.

Artículo 48.- Serán proveedores locales aquellas empresas de menor tamaño cuyo domicilio principal se encuentre en la misma región donde se entregan los bienes o se prestan los servicios y que cumplan con los demás requisitos y condiciones que establezca el Reglamento.

Artículo 49.- La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá celebrar convenios de colaboración con organismos regionales, provinciales o comunales para realizar acciones de promoción para el acceso de las empresas de menor tamaño y proveedores locales a los procedimientos de contratación de bienes y servicios de los organismos del Estado, en conformidad con lo dispuesto en el literal l) del artículo 30 de esta ley.

La Dirección de Compras y Contratación Pública elaborará un reporte público semestral que contenga información acerca de la participación de las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación contemplados en esta ley, considerando variables de tamaño, ubicación geográfica, rubro, cantidad de órdenes de compra y montos transados, entre otros. Este reporte se enviará al Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, contemplado en la ley N° 20.416, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado.

Mediante resolución fundada de la Dirección de Compras y Contratación Pública, se establecerán sistemas de tarificación diferenciada para el ingreso de empresas de menor tamaño al Registro de Proveedores, contemplado en el artículo 16 de esta ley.

Artículo 50.- Sin perjuicio de la consulta pública previa a la que se refiere el literal j) del artículo 30 de la presente ley, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de la ley N° 20.416, la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la dictación o modificación de una instrucción obligatoria de general aplicación que afecte a empresas de menor tamaño, deberá mantener a disposición permanente del público los antecedentes preparatorios necesarios que estime pertinentes para su formulación, en sus sitios electrónicos, en los términos previstos en el artículo 7° de la ley N° 20.285. Los antecedentes preparatorios deberán contener una estimación simple del impacto social y económico que la instrucción generará en las empresas de menor tamaño.

Una vez finalizada la consulta pública ya señalada, y previo a su dictación, la respectiva propuesta de instrucción o su modificación deberá ser informada al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La respectiva instrucción o sus modificaciones serán publicadas en la página web de dicho Ministerio, junto con todas las normas vigentes sobre empresas de menor tamaño.

Párrafo 2

De la Unión Temporal de Proveedores

Artículo 51.- La Unión Temporal de Proveedores es un conjunto de empresas de menor tamaño, sea que se trate de personas naturales o jurídicas, que se unen para la presentación de una oferta en caso de licitaciones o convenio marco, o para la suscripción de un contrato, en caso de una contratación directa, sin que sea necesario constituir una sociedad.

La Unión Temporal de Proveedores se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular. Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.

Artículo 52.- Para el efecto de participar en un proceso de compra, el acuerdo en que conste la Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. En ambos casos el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes

respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

Artículo 53.- Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.

Las causales de inhabilidad establecidas en la ley afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad, la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisibile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54 siguiente.

En el caso en que la inhabilidad se produzca durante el período en que el contrato se encuentra en ejecución, el integrante inhábil podrá ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la unión, que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en las bases de licitación para ofertar y cuyos atributos no sean, a criterio de la entidad compradora, inferiores a los que cumplía el anterior integrante al momento de adjudicarse el contrato. Lo dispuesto en este inciso será verificado en la forma que determine el reglamento.

Artículo 54.- Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta.

Respecto de cada proceso, y al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de una Unión Temporal de Proveedores no podrán participar en otra.

Artículo 55.- De manera excepcional, una Unión Temporal de Proveedores podrá constituirse sin limitaciones por tamaño de empresa, solo para los efectos de los procedimientos de contratos para la innovación o de diálogo competitivo, en los términos de los numerales 4º y 5º de la letra d) del artículo 7 de la presente ley.

Párrafo 3

Reglas para las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación

Artículo 56.- De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, literal d) del artículo 7 de la presente ley, el procedimiento de Compra Ágil se realizará con empresas de menor tamaño y proveedores locales.

Para garantizar la selección de empresas de menor tamaño y proveedores locales por parte de los organismos públicos en los procesos de compra, el reglamento establecerá las condiciones en que operará la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

Solo en el caso en que el respectivo organismo que solicitó el envío de cotizaciones a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas no hubiese recibido ninguna cotización correspondiente a una empresa de menor tamaño o proveedor local, aquel podrá seleccionar por ese mismo medio a un proveedor que no cumpla con aquellas características.

A este procedimiento no le será aplicable lo dispuesto en la letra d) del artículo 30 y en el inciso segundo del artículo 35 bis de la presente ley.

Artículo 57.- El procedimiento de Convenio Marco contemplado en el numeral 3, letra d) del artículo 7 de la presente ley, tendrá lugar para la adquisición de bienes y/o servicios por un monto superior a 100 UTM. Excepcionalmente y por resolución fundada, la Dirección de Compras y Contratación Pública podrá establecer Convenios Marco por un monto inferior, considerando la participación de empresas de menor tamaño en el rubro respectivo.

Artículo 58.- Los criterios de evaluación y los requisitos de admisibilidad contenidos en las bases de licitación de los Convenios Marco se establecerán atendiendo a las características de los bienes y/o servicios y a la necesidad pública a satisfacer, sin que pueda obstruir la libre concurrencia de los proveedores. Estos criterios y requisitos no podrán implicar una discriminación arbitraria en contra de las empresas de menor tamaño.

Igualmente, en caso de establecerse un criterio de evaluación de experiencia y/o de solvencia económica o financiera de los oferentes, ello deberá realizarse de manera proporcional al objeto de la contratación, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las empresas de menor tamaño.

Artículo 59.- Las bases de licitación de los Convenios Marco deberán contener cláusulas de adjudicación por zonas geográficas de los bienes o servicios licitados, a fin de promover la participación de proveedores locales. Los proveedores locales podrán ofertar en las zonas geográficas de su preferencia sin requerir de una presencia nacional. En las bases se podrá establecer que, una vez adjudicados, los proveedores locales seleccionados podrán ampliar su oferta a otras zonas del país.

Excepcionalmente, la Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante resolución fundada en las características del sector económico o de los bienes o servicios de que se traten, podrá eximirse de la obligación establecida en el inciso anterior.

Artículo 60.- Procederá la Contratación Directa con Publicidad cuando se trate de adquisiciones inferiores a 30 UTM, y que privilegien materias de alto impacto social, tales como el impulso a las empresas de menor tamaño, incluidas aquellas lideradas por mujeres, los proveedores locales, la descentralización y la sustentabilidad ambiental. El cumplimiento de dichos objetivos, así como la declaración de que lo contratado se encuentra dentro de los valores de mercado, considerando las especiales características que la motivan, deberán expresarse en la respectiva resolución que autorice la Contratación Directa con Publicidad.

Artículo 61.- Cuando se trate de licitaciones de un valor inferior a 500 UTM, las municipalidades, los gobiernos regionales y los organismos públicos territorialmente desconcentrados, podrán establecer criterios de evaluación que otorguen prioridad o preferencia a los proveedores locales correspondientes a la zona geográfica en que se encuentran ubicadas.

Esos puntajes o ponderaciones no podrán, en caso alguno, ser los únicos que se consideren para determinar la adjudicación de la oferta más conveniente, según lo determine el Reglamento.”.

Artículo segundo.- Apruébase la siguiente ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado:

“Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el mecanismo a través del cual los organismos del Estado podrán transferir el uso, goce o disposición de bienes muebles en desuso, a otros organismos del Estado o al público, y la utilización de medios y servicios

compartidos en la Administración del Estado. Tales organismos deberán procurar un uso eficiente de ellos, y cautelar el buen uso de los recursos públicos y el cuidado del medio ambiente a través de la aplicación de principios de economía circular.

La presente ley se aplicará a los organismos de la Administración del Estado señalados en el **inciso segundo** del artículo 1 de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, los organismos del Estado no incluidos en el inciso anterior podrán acogerse a las disposiciones de esta ley y su reglamento, comunicándolo previamente a la Dirección de Compras y Contratación Pública, bajo las condiciones que esta ley y las demás normas señalen.

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por bienes muebles los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que pierdan su individualidad, sean semovientes o inanimados.

Asimismo, se entenderá por servicio o medio compartido a aquellas actividades, infraestructuras técnicas, instalaciones, aplicaciones, equipos, inmuebles, redes, ficheros electrónicos, licencias y activos que dan soporte a sistemas de información, determinados por uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, y suscritos además por el Ministerio que por su ámbito de competencia corresponda, que, por su demanda transversal y estandarizada por parte de los órganos de la Administración del Estado, haga más eficiente su utilización compartida por parte de ellos.

Se excluyen de las disposiciones de la presente ley, los vehículos motorizados, a los cuales se les continúa aplicando las disposiciones legales vigentes.

Título I

De la enajenación de bienes muebles en desuso en la Administración del Estado

Artículo 3.- Los jefes de servicio podrán disponer de los bienes muebles que no requieran para el cumplimiento de los fines propios del servicio, previa resolución fundada, de acuerdo con las normas siguientes. Sin perjuicio de ello, la disposición de estos bienes será obligatoria en los casos en que se cumplan las condiciones que una instrucción de carácter general del Ministerio de Hacienda así lo señale.

Artículo 4.- Si un bien mueble que se encuentra en las condiciones señaladas en el artículo anterior aún puede ser empleado

para su uso ordinario según lo indicado en la resolución del jefe de servicio, éste deberá **ofrecerlo a** otros organismos, de aquellos señalados en el **inciso segundo** del artículo 1 de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para que sea **entregado** a aquel organismo que lo requiera, a través de los medios que la Dirección de Compras y Contratación Pública disponga para este efecto.

La entrega se efectuará previa resolución de la entidad a cuyo cargo se encuentra el bien, procediéndose al traslado, en el caso de organismos públicos con el mismo patrimonio. En el caso de los organismos públicos con distinto patrimonio, dicha resolución actuará como título traslativo de dominio, para proceder al traslado del bien.

Los traslados de bienes muebles deberán quedar debidamente registrados en los inventarios correspondientes.

Si no hubiere organismos públicos interesados en adquirir el dominio, uso o goce del bien, deberá ponerlo a disposición del público, para que sea transferido su dominio, uso o goce a título oneroso, a través de la Dirección de Crédito Prendario, utilizando los mecanismos que ésta determine. Sin perjuicio de lo anterior, los bienes se mantendrán en poder de organismo vendedor hasta su entrega.

Artículo 5.- Si no hubiere terceros interesados, deberá donarlo a alguna institución sin fines lucro inscrita en el catastro de organizaciones de interés público establecido por el artículo 15 de la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, o a entidades gremiales, Juntas de Vecinos, Centros de Madres o a cualesquiera otras entidades similares, sin ánimo de lucro.

El organismo donante deberá guardar registro de los donatarios beneficiados por las donaciones descritas en el presente artículo.

Artículo 6.- Si un bien mueble no se encuentra en condiciones de ser utilizado para su uso ordinario, deberá ser manejado de acuerdo al principio de jerarquía en el manejo de residuos que establece la ley N° 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. De esta forma, se deberá considerar, como primera alternativa, su reutilización, luego su valorización, y como última alternativa su eliminación.

Artículo 7.- La Dirección de Compras y Contratación Pública dispondrá de los medios para enajenar los bienes muebles señalados en el presente título, a través de un catálogo electrónico,

entre los organismos señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 1 de esta ley.

Artículo 8.- Un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, **suscrito por el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio del Medio Ambiente**, regulará las condiciones para transferir el dominio, uso o goce de bienes muebles en desuso de los organismos señalados en **el inciso segundo** del artículo 1 de esta ley entre ellos, o a terceros, los requisitos, incluyendo los plazos y condiciones para disponer de ellos, el carácter gratuito u oneroso que deberá tener su transferencia, así como las demás normas necesarias para la implementación del presente título.

Título II

De la utilización de servicios y medios compartidos en la Administración del Estado.

Artículo 9.- A través de un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, suscrito además por el Ministro que por su ámbito de competencia corresponda, se podrá establecer la utilización obligatoria por parte de los organismos de la Administración del Estado, de los medios o servicios compartidos que el decreto señale, bajo las condiciones establecidas en él, salvo que, por motivos técnicos o económicos, mediante una resolución fundada, un organismo de la Administración decida sustraerse de su utilización.

Título III

Otras Disposiciones

Artículo 10.- Modifícase el Decreto Ley N°1.939, de 1977, Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en el siguiente sentido:

1. Modifícase el artículo 24 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “Dirección de Aprovisionamiento del Estado” por la frase “Ley N°19.886 y su reglamento,”.

b) Reemplázase los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, por el siguiente inciso tercero, nuevo:

“La transferencia del dominio, uso, goce o disposición de bienes muebles en desuso, a otros organismos del Estado o al público, y la eliminación de estos se hará de conformidad a la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios

de los organismos del Estado, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales.”.

c) Reemplázase en el inciso séptimo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “de los incisos cuarto, quinto y sexto” por “del inciso tercero”.

d) Suprímase en el inciso final la frase “y fijará las normas conforme a las cuales se deberá enajenar dichos bienes,”.

2. Agrégase en el artículo 25 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La transferencia del uso, goce o disposición de bienes muebles en desuso, a otros organismos del Estado o al público, y su eliminación se hará de conformidad a la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.”.

Artículo tercero.- Agrégase en la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, el siguiente artículo 57 bis:

“Artículo 57 bis.- En lo referido a la adquisición, administración y disposición de bienes muebles, prestación de servicios y obras, el Banco deberá observar lo dispuesto en el Capítulo VII de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con exclusión **de los incisos segundo y quinto** de su artículo 35 bis, y de sus artículos 35 septies, 35 octies y **35 decies**.

Las referencias contenidas en las normas del mencionado Capítulo VII a la Dirección de Compras y Contratación Pública o las instrucciones dictadas por ésta, se entenderán efectuadas al Consejo y a las normas que éste imparta sobre la materia, para cuyo efecto podrá considerar las que dicte la referida Dirección.

La divulgación de la resolución fundada a que se refiere el inciso final del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 se efectuará incluyéndola en el sitio electrónico institucional del Banco, con sujeción a lo previsto en los artículos 65 bis y 66, y será comunicada a las autoridades señaladas en el artículo 4°.

La referencia al principio de probidad indicado en el inciso primero del artículo 35 **sexies** de la ley N° 19.886 se entenderá efectuada al artículo 8° de la Constitución Política de la República en relación con lo dispuesto en la presente ley.

El Banco deberá implementar un canal para recibir denuncias sobre irregularidades en los procesos de compras que realice.

El Banco también podrá acordar con la Dirección de Compras y Contratación Pública hacer uso de los sistemas electrónicos o digitales de contratación que contempla el artículo 20 de la ley N° 19.886, en los términos y condiciones que convengan al efecto, rigiéndose en todo caso los procedimientos y contratos que celebre el Banco por lo dispuesto en los artículos 2, 57 y 90 de la presente ley. Lo mismo se aplicará en caso de que el Banco convenga el uso, acceso o participación en otros sistemas de información a que se refiere la ley N° 19.886.

El Banco no quedará sujeto a la regulación, fiscalización o supervigilancia de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y las eventuales controversias que surjan respecto de los procesos de contratación y contratos que el mismo celebre serán conocidas por la justicia ordinaria.

Para el caso de que el Banco resuelva acogerse a las disposiciones de la ley N° 19.886 y su reglamento, las referencias hechas en dicho cuerpo legal al Reglamento o a las directrices o instrucciones emitidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública se entenderán realizadas a la normativa interna que el Consejo dicte para estos efectos.

El Banco quedará excluido de la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismo del Estado, sin perjuicio de lo cual podrá aplicar dicha ley en los términos previstos en los artículos 2, 57 y 90 de la presente ley, en relación con la disposición de los bienes muebles de su propiedad, así como en la utilización de uno o más procesos de economía circular y reciclaje, pudiendo convenir con la Dirección de Compras y Contratación Pública los términos y condiciones conforme a los cuales ello tendrá lugar.”.

Artículo cuarto.- Reemplázase el artículo 2 de ley N° 18.803, que otorga a los servicios públicos la autorización que indica, por el siguiente:

“Artículo 2.- La adjudicación de contratos para la realización de acciones de apoyo a sus funciones, por parte de los servicios públicos señalados en esta ley a entidades de derecho privado, se realizará siguiendo las normas establecidas en la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.”.

Artículo quinto.- Reemplázase el inciso final del

artículo 16 del decreto ley N° 1.608, de 1976, que dicta normas para implantar la segunda etapa de la carrera funcionaria y otras disposiciones, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, para el suministro de bienes y la prestación de servicios requeridos por las entidades señaladas en el presente artículo, se seguirá lo dispuesto en la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.”.

Artículo sexto.- Agrégase en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando el actual inciso octavo a ser noveno:

“La adjudicación de los estudios señalados en el presente artículo se realizará a través de los procedimientos establecidos en la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.”.

Artículo séptimo.- Modifícase la ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, de la siguiente forma:

1. Agrégase en el inciso primero del artículo 18, a continuación de la expresión “Tributarios y Aduaneros” la frase “, y del Tribunal de Contratación Pública”.

2. Modifícase el encabezado del inciso primero del artículo 19 de la siguiente forma:

a) Intercálase, entre la expresión “Tribunales Tributarios y Aduaneros” y el punto y seguido, la frase “y del Tribunal de Contratación Pública”.

b) Reemplázase la palabra “ellos” por la dicción “los primeros”.

3. Agrégase en el inciso segundo del artículo 25, a continuación de la frase “Tributarios y Aduaneros”, la expresión “, y del Tribunal de Contratación Pública”.

Artículo octavo.- Modifícase la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase en el artículo 35 la oración “mediante remate público. No obstante, en casos calificados, las municipalidades podrán donar tales bienes a instituciones públicas o privadas de la comuna que no persigan fines de lucro” por la oración “de conformidad a la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.”.

2. Agrégase en el artículo 65 el siguiente inciso final, nuevo:

“En el caso de las contrataciones reguladas por la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, cuando el alcalde o alcaldesa requiera del acuerdo del Concejo Municipal, según lo dispuesto en este artículo, los y las concejales deberán ceñirse al principio de estricta sujeción a las bases, dispuesto en el artículo 10 de dicha ley.”.

3. Suprímese el inciso tercero del artículo 66.

Artículo noveno.- Todas las referencias hechas a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en ésta u otras leyes, se entenderá realizada a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y del Tribunal de Contratación Pública.

Artículo décimo.- Modifícase la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en el siguiente sentido:

1. Agregáse al artículo 4 el siguiente numeral 14, nuevo:

“14. Las personas que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, estén sujetas a la obligación de declarar intereses y patrimonio.”.

2. Agrégase al artículo 5°, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos señalados en el numeral 14 del artículo 4° de esta ley, y los jefes superiores de servicio, deberán actualizar su declaración de intereses y

patrimonio, adicionalmente, en el mes septiembre de cada año.”.

3. Modifícase el artículo 7° en el siguiente sentido:

i. Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la frase “números 1 a 4,” la expresión “y 14”.

ii. Agrégase un inciso cuarto, nuevo, pasando el siguiente a ser quinto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Adicionalmente, los sujetos señalados en el numeral 14 del artículo 4° de esta ley, y los jefes superiores de servicio, deberán incluir en su declaración la singularización de los siguientes bienes:

a) Cuentas y/o libretas de ahorro, que se mantengan en instituciones de ahorro, instituciones financieras, o de cualquier otra naturaleza.

b) Ahorro previsional voluntario bajo cualquier modalidad, ahorro previsional voluntario colectivo y depósitos convenidos.

c) Depósitos a plazo.

d) Seguros de vida con ahorro y seguros en general.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero transitorio.- Las normas de la presente ley entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. **Excepcionalmente, entrarán en vigencia 18 meses después de la publicación de la presente ley las disposiciones contenidas en los numerales 4, 5, y 6 del literal d) del artículo 7 del artículo primero, sobre Contratos para la Innovación, Diálogos Competitivos de Innovación y Subasta Inversa, y en el artículo segundo que aprueba la ley de economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.**

Con todo, las normas del capítulo VII, sobre probidad y transparencia de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, entrarán en vigencia en el momento de publicarse esta ley en el Diario Oficial.

Los reglamentos señalados en la presente ley

deberán dictarse a más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a su publicación.

Los preceptos que modifican el Capítulo V de la ley N° 19.886 sólo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Las causas se entenderán iniciadas desde la fecha de presentación de la demanda.

A la unidad administradora a que se refiere el artículo 23 bis de la ley N° 19.886, introducido por la presente ley, a partir de la fecha de publicación de esta ley le corresponderá especialmente realizar todas las gestiones necesarias para la implementación de lo dispuesto en el citado artículo, tales como obtención del rol único tributario de la institución, apertura de cuentas bancarias, habilitación de cuentas corrientes e inscripción en el mercado público.

Artículo segundo transitorio.- Traspásanse al Tribunal de Contratación Pública diez funcionarios de la Dirección de Compras y Contratación Pública que, a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones al Capítulo V de la ley N° 19.886, prestan el apoyo técnico necesario para el adecuado funcionamiento de dicho tribunal dispuesto por el artículo 23 vigente antes de la publicación de esta ley. El traspaso se realizará a contar de la entrada en vigencia del referido Capítulo V. Asimismo, se traspasarán los recursos y bienes muebles que correspondan a dicho personal desde la Dirección de Compras y Contratación Pública al Tribunal de Contratación Pública. Del mismo modo, la dotación máxima de personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública se disminuirá en el número de funcionarios traspasados.

Los funcionarios que se traspasen conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, cualquiera sea su calidad jurídica, continuarán desempeñándose sin solución de continuidad en el Tribunal de Contratación Pública.

Los contratos de trabajo que corresponda celebrar entre la Unidad Administradora a la cual se refiere el artículo 23 bis y los funcionarios traspasados conforme al inciso primero de este artículo deberán constar por escrito dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigencia de las modificaciones al Capítulo V de la ley N° 19.886. El traspaso del personal deberá realizarse al mismo grado de remuneraciones al cual estaban asimilados en la Dirección de Compras y Contratación Pública.

El personal a que se refiere el inciso primero de este artículo tendrá derecho a las indemnizaciones que les correspondan por término de la relación laboral, de conformidad al Código del Trabajo. Para tal efecto, se considerarán sólo los años de servicios prestados a contar de la

fecha de su traspaso al Tribunal de Contratación Pública dispuesto de conformidad al inciso primero de este artículo.

El traspaso del personal de la Dirección de Compras y Contratación Pública al Tribunal de Contratación Pública a que se refiere el inciso primero quedará sujeto a las siguientes restricciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios o trabajadores fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo tercero transitorio.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

Artículo cuarto transitorio.- Los contratos administrativos y procedimientos de contratación cuyas bases o términos de referencia hayan sido aprobadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se regularán por la normativa vigente a la fecha de dicha aprobación.

Artículo quinto transitorio.- Los organismos del Estado, y las organizaciones afectas a la ley N° 20.285 que, a la fecha de publicación de la presente ley, hubieren adherido al Sistema de Información de Compras Públicas y a los Convenios Marco elaborados por la Dirección de Compras y Contratación Pública, continuarán formando parte de dichos sistemas, con los cambios que a ellos se les introduzca en virtud de las disposiciones de la presente ley, salvo que expresamente decidan sustraerse de la aplicación de esta norma.

Artículo sexto transitorio.- Las normas del capítulo VII de la ley N° 19.886, sobre probidad y transparencia, respecto de los contratos de ejecución y concesión de obras de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, entrarán en vigencia dos años después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las modificaciones de los respectivos reglamentos y bases generales sobre los contratos de ejecución de obra pública deberán dictarse dentro de un año, contado desde la publicación de la presente ley.

Las modificaciones del respectivo reglamento relativo a concesión de obras públicas deberán publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley.

Artículo séptimo transitorio.- Los jueces o juezas del Tribunal de Contratación Pública que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren ejerciendo sus cargos, permanecerán en ellos por un período de cinco años desde la fecha que hubieren asumido en su cargo.

Los jueces o juezas que estuvieran ejerciendo su cargo en calidad de suplentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por el solo ministerio de esta, pasarán a tener la calidad de titulares y mantendrán tal carácter por el período remanente hasta el cumplimiento de los cinco años desde la fecha que hubieren asumido como suplentes.

Pasados los plazos señalados en los incisos anteriores, las vacantes de jueces o juezas titulares deberán proveerse según lo dispuesto en el Capítulo V de la ley N° 19.886. Los jueces y juezas que estuvieran ejerciendo en un segundo período o posterior, cualquiera fuera la calidad con que fueron nombrados, no podrán ser designados nuevamente. Aquellos que estuvieran ejerciendo en razón de su primer nombramiento, cualquiera fuera su calidad, estarán sujetos a los requisitos y procedimiento establecidos en esta ley.

El procedimiento para la designación de los cargos de jueces o juezas suplentes deberá iniciarse dentro del plazo de 30 días desde la publicación en el Diario Oficial de la ley.

Las disposiciones de esta ley referidas a las remuneraciones de las y los jueces titulares, su dedicación exclusiva y su jornada laboral comenzarán a regir el primer día del mes siguiente de la entrada en vigencia a que se refiere el artículo primero transitorio.

Artículo octavo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 57 no aplicará respecto de los Convenios Marco cuyas bases de licitación hayan sido publicadas en el Sistema de Información con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo noveno transitorio.- Las normas de la presente ley, respecto de los contratos de ejecución de obra y sus contratos relacionados, que deban desarrollarse a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas indicado en el artículo 19 de la ley N° 19.886, entrarán en vigencia dos años después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Las modificaciones que deban realizarse a los respectivos reglamentos del Ministerio de Obras Públicas relacionados a contratos de ejecución y concesión de obras públicas deberán dictarse dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de la presente ley.”.

Artículo final transitorio.- En un plazo de seis meses desde la publicación de esta ley, el Tribunal de Contratación Pública deberá dictar las normas necesarias para su adecuado funcionamiento administrativo interno a las que se refiere el artículo 22 septies de esta ley. En tanto dichas normas no se dicten, continuarán rigiendo las que se encuentren vigentes al momento de publicación de esta ley.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 30 y 31 de mayo de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, Fidel Espinoza Sandoval (Gastón Saavedra Chandía), José García Ruminot (Presidente accidental), Ricardo Lagos Weber (Presidente) y Daniel Núñez Arancibia.

Valparaíso, 31 de mayo de 2023.


MARÍA SOLEDAD ARAVENA
Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODERNIZA LA LEY N°19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE

**PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCIR PRINCIPIOS DE
ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS COMPRAS DEL ESTADO.**

(BOLETIN N° 14.137-05).

I. OBJETIVO(S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

profundizar y desarrollar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha emprendido desde la creación del Sistema de Compras Públicas, elevando sus estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de la economía circular, como también perfeccionando el funcionamiento del Tribunal de Compras y Contratación Pública y las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el Sistema de Compras Públicas.

Con miras al cumplimiento de tales objetivos, se incorpora al proyecto el Capítulo IX, nuevo, referido a la promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el Sistema de Compras Públicas.

Además, el proyecto en análisis sanciona una ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado.

II. ACUERDOS:

Artículo primero:

- Número 1, en el artículo 1° propuesto, sus incisos segundo, tercero y quinto: aprobados por unanimidad (4x0).
- Número 9, en la letra a), numeral iv, literal d), número 4, su párrafo segundo; y en la letra b), su numeral ii: aprobados por unanimidad (4x0).
- Numeral 11, en el artículo 8° propuesto, el párrafo quinto de su letra c) y el párrafo sexto de su letra e): aprobados por unanimidad (4x0).
- Numero 23, en el artículo 16 propuesto, sus incisos primero, segundo, octavo, undécimo y décimo tercero: aprobados por unanimidad (4x0).
- Número 31, en el artículo 22 propuesto, su inciso primero: aprobado por unanimidad (4x0).
- Número 32, los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quinquies y 22 sexies inciso final propuestos: aprobados por unanimidad (4x0).
- Número 33, en el artículo 23 propuesto, sus incisos primero, segundo y final: aprobados por unanimidad (4x0).
- Número 34, el artículo 23 bis propuesto: aprobado por unanimidad (4x0).
- Número 35, el artículo 23 ter propuesto: aprobado por unanimidad (4x0).
- Número 39, en el artículo 25 quáter propuesto, su inciso quinto: aprobado por unanimidad (4x0).
- Número 45: aprobado por unanimidad (4x0).
- Número 48, en el artículo 35 decies propuesto, su inciso tercero: aprobado por unanimidad (4x0).

-Número 50, en el artículo 56 propuesto, sus incisos primero y segundo: aprobados por unanimidad (4x0).

Artículo segundo:

-En el artículo 1 propuesto, su inciso primero: aprobado por unanimidad (3x0).

-El artículo 7 propuesto: aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo segundo transitorio: aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo tercero transitorio: aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo séptimo transitorio, inciso final: aprobado por unanimidad (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de diez artículos permanentes y diez disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Economía.

V. URGENCIA: “discusión inmediata”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general por mayoría de 139 votos a favor y 4 abstenciones

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 23 de junio de 2021.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios
- Ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
- Ley N° 18.803, que otorga a los servicios públicos la autorización que indica.
- Decreto ley N° 1.608, de 1976, que dicta normas para implantar la segunda etapa de la carrera funcionaria y otras disposiciones.
- Decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
- Ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera.

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

Valparaíso, a 31 de mayo de 2023.



MARÍA SOLEDAD ARAVENA
Secretaria de la Comisión